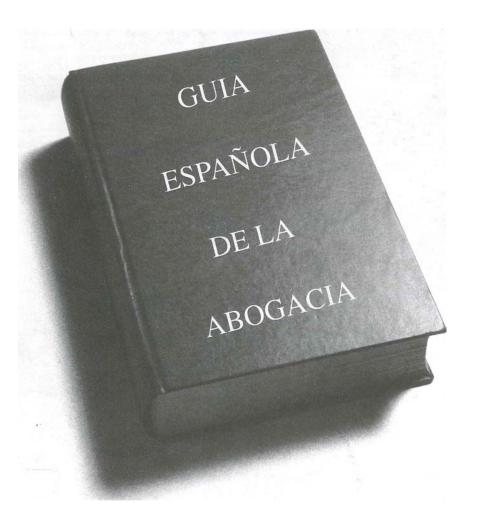
'S'E O 9{0S'Eg(' 'ES'TYL'ESLYLC'll'ES'TIÓ9{

Es el si o el no. El blanco o el negro. El norte o el sur. Y en este caso, para los profesionales del derecho, el existir o el no existir.

"Ser o no ser" es la filosofía que centra una obra como la GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA



Is_{gr} 11 significa estar inscrito en la primera obra que se publica en nuestro país como soporte ún ico de los profesionales del derecho de todo el terri torio nacional, detallados por miembros y socios, áreas de actuación, idiomas de trabajo, etc.

Y estar presente como fuente de consulta en empresas y organismos oficiales, que recibe n gratu itamen te la GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA, y que en cualquier momento se dirigirán a Vd. para resolver sus necesidades jurídicas.

deljuego diario de la consultoría jurídica de nuestro país. Es perder oportunidades en el mercado por no figurar en el sitio y momento justos. Es no avanzar ni progresar. Piense como uno de sus posibles clientes. Si necesitan resolver un problema legal... ¿lo más lógico no es que acudan a la GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA?

Es muy simple "Ser o no ser", estar inscrito o no en la GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA es la diferencia entre existitir y no existir.

Por todo ello, a Vd. le interesa aparecer.

Para más información, diríjase a:

@(<u>FlEditora Profesional</u>,s.l.

Rosellón, 186 2° - 3ª 08008 Barcelona Tel. (93) 451 34 21 Fax (93) 454 35 37





VIA LAIETANA, 12 08003 BARCELONA 310 40 42 TELS. (93) 315 23 03 319 46 10 FAX 315 39 33

Bibliografía jurí dica. Selección de novedades

+ González Pérez, J y González Navarro, F.: Régimen jurídico de las Administraciones públicas y pro administrativo común. (Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Incluye las normas estatales y	cedimiento
autonómicas dictadas en desarrollo de la Ley 30/1992. 1993	13.592,-
+ Pons González, M. y del Arco Torres, M.A.: Diccionario de derecho urbanístico. Adaptado al Texto Refundido de la Ley del Suelo y Tablas de vigencia de los Reglamentos. 1993	4.800,-
+Ariño Ortiz, G.: Economía y Estado. Crisis y reforma del sector público. 1993	7.282,-
+ Fernández Jiménez, J.: Legislación básica de la función pública. 3.ª ed. 1993	6.311,-
+ Bonet Correa, J.: Código Civil. Jurisprudencia, concordancias y doctrina. Tomo VII.	0.011,
(Arts. 1445 a 1708). 1993	4.757,-
+ Bonet Correa, J.: Código Civil.Jurisprudencia, concordancias y doctrina. Tomo VIII.	•
(Arts. 1709 al final). 1993	4.854,-
+ Alonso Sánchez, B.: Protección del fiador en via de regreso. 1993	3.398,-
+ Morales & Sancho, Abogados: Tratado práctico de responsabilidad civil. 1993	12.400,-
+ Ocaña Rodríguez, A.: La filiación en España. Jurisprudencia y doctrina. 1993	6.000,-
+ M.º J.a: Sentencias en apelación de las audiencias provinciales.	5.040
En materia civil y penal, 1991. 1993	5.243,-
+ Davara Rodríguez, M.A.: Derecho informático.1993. + García Gil, F.J. y García Gil, J.L: Los contratos mercantiles y su jurisprudencia. 1993	4.050,-
+ Cano Rico, J.R.: Manual práctico de contratación mercantil. Tomo !	12.621,-
Contratos mercantiles en general. 3.ª ed. 1993	4.369,-
+ Vázquez Bonome, A.: Tratado de derecho cambiario. Letra, pagaré y cheque.	4.309,-
Comentarios. Legislación. Formularios procesales. Fórmulas cambiarias. 2.ª ed. 1993	9.660,-
+ Gómez de Liaño, F.: Jurisprudencia cambiaria. Juicio ejecutivo. 3.ª ed 1993	6.602,-
+ Gual Dalmau, M.a. A.: Las cuentas en participación. 1993	2.621,-
+ Valenzuela Garach, F.: La información en la sociedad anónima y el mercado de valores.	- ,
1993	2.816,-
+ de Cárdenas Smith, C.: Régimen jurídico de las ofertas públicas de adquisición. 1993	2.330,-
+ Mejías Gómez, J. y Mellado Rodríguez, M.: Negocios jurídicos sobre acciones no cotizadas en bolsa. 1993	3.398,-
+ Márquez Narváez, J.M.: Medios de pago en la compraventa internacional.	,
Manual práctico. 1993	2.233,-
+Martínez Flórez, A.: Las interdicciones legales del quebrado. 1993	2.621,-
+ González Sánchez, M.: El fraude de ley en materia tributaria. 1993	1.699,-
+ González Sánchez, M.: La sucesión en la deuda tributaria. 1993	2.913,-
+Poveda, Francisco: Sistema fiscal: esquemas y supuestos prácticos. 2.ª ed. 1993 +Lex Nova: Estimación objetiva 93. Rendimientos de actividades empresariales y profesionales.	5.325,-
(Estudio del Impuesto. Legislación. Casos prácticos). 1993	6.500,-
+ Camps Ruiz, I.M.: Régimen laboral de la transmisión de la empresa. 1993	2.913,-
+ Lorca Navarrete, Ruiz Jiménez y Alvarez, S.: Comentarios a la ley de.procedimiento laboral Conformularios y Jurisprudencia. 2.ª ed. 1993	0.700
+ Arroryo de las Heras y Muñoz Cuesta: El delito de lesiones. Su tratamiento legal en el	9.709,-
Código Penal y en el Proyecto. 1993	3.748,-
+ Puyol Montero, F.J.: Nulidad de actuaciones. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.	0.7 40,
1993	9.680,-
+ Fernández López, M.A., Rifá, J.M. y Valls, J.F.: Derecho procesal práctico. Tomo VI	,
Juicio ejecutivo ordinario. Juicio ejecutivo cambiario. Juicio ejecutivo de la Ley del.	
Automóvil. Procedimiento de apremio en negocios de comercio. El "juicio ejecutivo" y el	
declarativo posterior 1993	16.000,-
+ Silva de Lapuerta, R.: El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las comunidades	0.044
europeas. 2.ª ed. 1993	6.311,-

Economist & urist

Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S. A.

Editor Francisco Marhuenda

> Gerente Ester Ortín

Director Alexandre Pintó

Redactora Jefe Ana Sesé

Colaboradores Jurídicos

García de Enterría (Administrativo), Xavier Jordana Rosell (Andorrano), Sastre Papiol (Bancario), Hernández Gil (Civil), Jorge Vives Martínez (Civil Catalán), Cuatrecasas (Comunitario), Marroquín Sagalés (Concursal), Miguel Montoro Puerto (Constitucional), Checkaudit (Contabilidad y Auditorías), Iberforo y Piqué Vidal (Fiscal), José Juan Pintó Ruiz y Margarita Ginesta de Puig (Inmobiliario), García de Ceca (Inversiones Extranjeras), García Fernández (Laboral), Antonio Pérez Ramos (Matrimonial), J. y A. Garrigues (Mercantil), Córdoba Roda/Gonzalo Rodríguez Morullo (Penal), Angel Bonet Navarro (Procesal) Rafael Jiménez de Parga, Agustí Jausas.

Rafael Jill Jépez dyga, nh Piqué Vida!, Agustí Just falesµ a;es, Frallisc9 Mathuel! ¡\v:< ajiq fintó, Francisco de Quin to; Juan Cris Yaz.qq Dodéro

Consejo Asesor

Carlos Ferrer Salat, Antonio Negre Villavechia, Mario Pifarre Riera, José Juan Pintó Ruiz, Juan Piqué Vidal, Luis Martí Mingarro

> Fotografía Luis Moreno y Jordi Romeu

Redacción, Publicidad y Administración
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S. A.
C/. Nápoles, 272 4º 2ª 08025 Barcelona
Telf. 457 48 88 - 207 38 20
Fax 207 14 57
NIF A59888172
Depósito Legal: B-12590- 9

Impresión y fotocomposición Suministros Gráficos 2001

Editorial

COLEGIACION Y PUBLICIDAD

Economist & Jurist ha elaborado una representativa encuesta sobre la opinión de los abogados en dos asuntos polémicos y de especial trascen dencia: la colegiación obligatoria y la publicidad en los medios de comunicación.Los resultados son muy significativos ya que el 66 por ciento de los encuestados se manifiesta en contra de la colegiación obligatoria frente al 33 por ciento que está de acuerdo. Con respecto a la publicidad, un 53 por ciento se expresa a favor y un 47 en contra. Esta encuesta ha sido elaborada por la Redacción de Economist & Jurist a partir de los formularios enviados a varios centenares de abogados en ejercicio, de varias provincias españolas y que pertenecen a todo tipo de despachos, tanto por sus especialidades como por su tamaño.

El resultado de la encuesta pone de manifiesto que los colegios de abogados se deberán transformar para ser más competitivos y lograr que los colegiados estén totalmente satisfechos. El asunto de la publicidad es más complejo y está condicionado por lo que sucede en los países comunitario y la voluntad que exprese el Gobierno sobre esta polémica cuestión.

LA REELECCION DE GAY

La reelección de Eugeni Gay como decano del Colegio de Abogados de Barcelona supone un indudable éxito personal para el presidente del Consejo General de la Abogacía. Los abogados barceloneses lograron otro hito en su historia ya que se produjo la mayor afluencia de votantes de las últimas décadas. La votación estuvo muy reñida y el margen de victoria de Gay y su equipo fue escaso. El decano obtuvo 3.392 votos, frente a los 2.914 de Juli de Miquel y 2.110 de Felip Portabella. Esto refleja que más de cinco mil votos fueron en su contra y que, a diferencia de las anteriores en las que consiguió el ochenta por ciento de los sufragios, tiene un bloque importante de casi el sesenta por ciento disconforme con su continuidad.

Las urnas se han impuesto, pero esos más de cinco mil votos no son uná anécdota menor o un asunto baladí. Portabella ha obtenido una victoria personal notable, porque realizó una campaña modesta. El resultado de Juli de Miquel es también significativo ante las dificultades que comportaba enfrentarse ante un decano saliente que, además, ocupa un cargo de la trascendencia de Gay. Lo sucedido supondrá una buena reflexión para el decano que deberá impulsar esta nueva etapa desde la apertura, el diálogo y el progreso de la institución.

JULIO, 1993

Julio. 1993

NUMERO 7

28 a 30

36

Economist & Jurist

Novedades legislativas

- -Indice jurídico
- -Ultimas novedades legislativas del mes de junio

Información jurídica: una

encuesta realizada por Economíst & Jurist revela que más de la mitad de los abogados consultados se opone a la colegiación obligatoria. También se recoge la opinión de los profesionales sobre la necesidad o no de realizar publicidad de los servicios que prestan.

Doctrina Jurídica: Problemas de siempre y soluciones a la Ley de Sociedades Anónimas.

Doctrina Jurídica: Aproximación al contenido jurídico del Tratado de Maastricht. El lector encontrará un informe detallado sobre los compromisos derivados de dicho Tratado.

Derecho Fiscal: Dos órdenes
. ministeriales que desarrollan dos
disposiciones anteriores sobre la llevanza
y diligenciado de Libros
de Registro y Coeficientes de

Amortización.

Derecho Bancario: Mercado de Valores, Mercado de Deuda Pública y Entidades de Crédito

Derecho Comunitario: Nueva

- directiva europea para la protección 6a9 del consumidor. Un intento de acabar con la imposición de
 - 10 cláusulas abusivas en los contratos 24 a 27

Derecho Constitucional:

Articulación de la legislación del Estado y la legislación de las Comunidades Autónomas

Inversiones Extranjeras: La nueva Ley de Procedimiento

- 12 a 13 Administrativo y su influencia en las infracciones de control de cambio. Requisitos, formalidades, verificaciones y autorizaciones exigidas por la
- 14 a 15 Administración 31 a 32

Derecho Laboral: El articulista expone el documento elaborado por el Gobierno para la reforma del mercado 33 a 34 de trabajo.

16a 19

Derecho Matrimonial: La

incapacidad psíquica matrimonial. 35

Derecho Mercantil: Ultimas resoluciones dictadas por la Dirección General de Registros y del Notariado.

Doctrina Jurídica: Contrato de seguro y responsabilidad civil. Polémica

22 a 23 sentencia del Tribunal Supremo del día 2 de-febrero de 1993.. 37

ELECATED TO SECURE TO SECU

La reeleción de
Eugeni Gay como
decano del Colegio
de Abogados de
Barcelona estuvo
marcada por el más
alto índice de
participación habido
nunca en la historia
colegial. Un 40 por
ciento de los
letrados se acercó,
el pasado 8 de junio,
a depositar su voto.

Doctrina Jurídica: Reflexiones sobre la pronta liberalización de las telecomunicaciones dictada por !a Comunidad Europea. Monopolio en España de Telefónica.

Doctrina Jurídica: La «lítís expensas» en la actualidad.

Doctrina Jurídica: La Sociedad Unipersonal o de socio único.

Doctria Jurídica: Adecuación de la lesgislación y lucha contra el fraude en el tráfico inmobilíarío. Dificultades en su aplicación.

Doctrina Jurídica: Los delítos cometidos contra los derechos de autor. Especia! referencia a las «ímportacíones paralelas)> de soportes fonográficos.

Doctrina Jurídica:

Administradores y socios de compañías mercantiles. Relación laboral o mercantil. Su cotización.

Doctrina Jurídica: Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) en el marco del transporte marítimo. Están reguladas por la Ley 12/1991

39 a 40 de 29 de abril

52a56

57

41a42 Subvenciones Oficiales:

Diversas ayudas, normas y 1spos1c1ones que afectan a ayudas institucionales.

43 a 45

Información Jurídica: Eugeni Gay, reelegido decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Nuevo equipo de gobierno.

58a59

Informe Económico: Estudio sobre todas las empresas españolas que el año pasado exportaron por encima de los mil míllones de pesetas, según datos oficiales regogídos en el anstituto

48 a 49

46a47

Español de Comercio Exterior, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio. Casi 90_0 empresas españolas han exportado por encima de esa cantidad en 1992. Encabeza la

50 a 51 clasificación el sector del automóvil.

60a73

4

JULIO, 1993

JULIO, 1993

Indice de las novedades legislativas

Administrativo

-Orden de 31 de ma r zo de 1.993: Regula el acceso al Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. (B.O.E. de 1 de abril de 1.993, n° 78).

-Real Decreto 477/ 1993 de 2 de abril: Régimen de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria. (B.O.E. de 3 de abril de 1.993, n° 80).

-Orden de 25 de marzo de 1.993: Desarrollo del Real Dec reto 1145/1992 de 25 de septiembre, por el que se reg u la la prestación de determ inados serv icios rápidos internacionales de recogida, transporte y entrega de cartas y tarjetas postales. (B.O.E. de 5 de abril de 1.993, n° 81).

-Real Decreto 534/1993 de 12 de abril: Disolución de Congreso de los Di pu tados y del Senado y de convocatoria de elecciones. (B.O.E. de 13 de abril de 1.993, n° 88).

-Orden de 29 de marzo de 1.993: Regula las bases generales para la concesión de Subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo e Instituciones sin fines de lucro que realicen actividades en el campo de la cooperación Internacional para la ejecución de proyec tos de cooperación al desarrollo. (B.O.E. de 13 de abril de 1.993, n°

-Real Decreto 419/1993 de 21 de marzo: Se actualiza el importe de las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican determinados artículos del Reglamento de Dominio Público Hidráu -1ico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril. (B.O.E. de 14 de abril de 1.993, n° 89).

-Orden de 2 de abril de 1.993: Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civi 1 de Emergencias por regulación de la tasa por expedición Incendios Forestales. (B.O.E. de 15 de abril de 1.993, nº 90).

-Circular 2/ 1993 de 3 de marzo: Establece el ejercicio del control posteri or de derechos e ingresos General Presupuestaria. (B.O.E. de tiem bre de 1.991 por la que se

16 de abril de 1.993, n° 91).

-Ley 6/ 1993 de 16 de abril: Concesión de un crédito extraordinario para e l pago de indemnizac iones derivadas de Sentencias del Tribunal Supremo a titulares de las oficinas de farmacia. (B.O.E. de 17 de abril de 1.993, n° 92).

-Real Decreto 557/ 1993 de 16 de abril: Actuación notarial en el procedimiento de emisión de voto por correo. (B.O.E. de 17 de abri 1 de 1.993, n° 92).

-Real Decreto 562/1993 de 16 de abril: Desarrolla el art. 18 de la Ley 31/1991 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1992 sobre procedimiento especial de gest ión de gastos electorales. (B.O.E. de 17 de abril de 1.993, n°

abril: Modifica determinados preceptos del Real Decreto 421/1991 de 5 de abril por el que se dictan norm as reg uladoras de procesos electorales. (B.O.E. de 17 de abril de 1.993, n° 92).

-Ley 10/ 1993 de 21 de ab ril: Modifica el régimen de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. (B.O.E. de 22 de abril de 1.993, n° 96).

-Real Decreto 564/1993 de 16 de abril: Presencia de la letra "ñ" y demás caracteres específicos del idioma castellano en los teclados de determinados aparatos de funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico que se utilicen para la escrit ura. (B.O.E. de 23 de abri 1 de 1.993, n° 97).

-Real Decreto 560/1993 de 16 de abril: Se derogan determinadas disposiciones vigentes en materia de Homologación y Normalización. (B.O.E. de 24 de abril de 1.993, n°

-Real Decreto 539/1993 de 12 de abril: Aplicación y desarrollo de la de tarjetas de residencia a nacionales de países com u nitarios y sus familiares. (B.O.E. de 24 de abril de 1.993, n° 98).

-Orden de 26 de abril de 1.993: previstos en el art. 95.6 de la Ley Mod i fica la Orden de 19 de sep-

aprueban los modelos de documentos en que las entidades aseguradoras han de rem i ti r la información estadístico-contable a la Dirección General de Seguros. (B.O.E. de 30 de abril de 1.993, n° 103).

-Orden de 28 de abril de 1.993: Normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1.994. (B.O.E. de 30 de abril de 1.993, n° 103).

-Orden de 26 de abril de 1.993: Establece medidas en el ámbito portuario en aplicación de la Resol ución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 820 de 17 de abril de 1.993. (B.O.E. de 3 de mayo de 1.993, n° 105).

-Orden de 28 de abril de 1.993: Se regula la retirada, para la campaña 1.993- 1.994, del cultivo de las -Real Decreto 563/1993 de 16 de tierras que se benefician de los pagos compensatorios contempla dos en el Reglamento (CEE) número 1.765/92 del Consejo de 30 de junio y su posible utilización para la producción de materias primas destinadas a la fabricación de productos cuyo principal destino no sea el consumo humano o animal. (B.O.E. de 3 de mayo de 1.993, nº 105).

> -Real Decreto 558/1993 de 16 de abril: Modifica parcialmente el art. 11 del Real Decreto 1273/1992 de 23 de octubre por el que se regula el otorgamien to de concesiones y la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de rad iodifusión sonora en ondas métri cas con mod ulación de frecuencia por las corpaciones locales. (B.O.E. de 4 de mayo de 1.993, n°

> -Real Decreto 476/1993 de 2 de abril: Se declaran las materias primas m inerales v activ idades con ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley 6/1977 de 4 de enero de Fomento de la Minería. (B.O.E. de 4 de mayo de 1.993, n° 106).

> -Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo: Aprueba el Estatu to de la Agenci a de Protecci ón de Datos. (B.O.E. de 4 de mayo de 1.993, nº

-Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo: Aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administ rac i ones p ú bl icas en ma teria de respon sabilidad patri mon ial. (B.O.E. de 4 de ma yo de 1.993,

-Real Decreto 633/1993 de 3 de mayo: Fija la cuantía de los módu-

los base que deberán aplicarse para el cálculo de la indemnización compensatoria básica en determinadas zon as desfa v oreci das, en el año 1.993. (B.O.E. de 5 de m ayo de 1.993, n° 107).

-Ci rcu l ar de 10 de ma rzo de 1.993: Resti tuciones a la exportación. Aplicación del apartado 2 del art. 3 del R eglame nto (CEE) nº 3035/80. (B.O.E. de 6 de mayo de 1.993, n° 108).

-Real Decreto 685/ 1993 de 7 de may o: As i stenc i a ju rídica a l os entes públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. (B.O.E. de 8 de mayo de 1.993, nº 110).

-Orden de 29 de abril de 1.993: Modelos de documentos admin istrativos en los que se formalizarán los conciertos educativos. (B.O.E. de 13 de mayo de 1.993, n° 114).

-Real Decreto 732/1993 de 14 de mayo: Estructu ra orgánica del Organismo au tónom o Inst i t u to Nacional de Estadística. (B.O.E. de 18 de mayo de 1.993, n° 118).

-Real Decreto 635/1993 de 3 de mayo: R egu l a l a orga nización y funcionamiento de la Sección española en la Comisi ón Internacional del Estado Civil. (B.O.E. de 18 de mayo de 1.993, n° 118).

-Orden de 11 de mayo de 1.993: Modifica las monedas de 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 pesetas. (B.O.E. de 19 de mayo de 1.993, n° 119).

-Orden de 14 de mayo de 1.993: Mod ifica el artículo 4 del Reglamento del Juego del Bingo, aprobado po r Orden de 9 de enero de 1.979. (B.O.E. 21 de ma vo de 1.993, n° 121).

-Orden de 12 de mayo de 1.993: Se establece el certificado sanitario oficial para la exportación de productos alimenticios. (B.O.E. de 21 de mayo de 1.993, n° 121).

-Real Decreto 636/ 1993 de 3 de mayo: Regula el sistema arbitral de consumo. (B.O.E. de 21 de mayo de 1.993, n° 121).

-Real Decreto 677/ 1993 de 7 de mayo: Aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses. (B.O.E. de

25 de mayo de 1.993, nº 124).

-Real Decreto 634/ 1993 de 3 de mayo: Relativo a productos sanitarios impl antables activos. (B.O.E. de 27 de mayo de 1.993, n° 126).

Bancario

-Circula r 4 / 1993 de 26 d e marzo: Modifica la circular 4/1991 de normas de contabi l idad de las Entidades de Crédito. (B.O.E. de 8 de abril de 1.993. nº 84). Vide área de Derecho Bancario.

-Circula r 5/ 1993 d e marzo: Determinación control de los recursos propios mínimos de las Entidades de Crédito. CB.O.E. de 8 de abri 1 de 1.993, nº 84). Vide área de Derecho Bancario.

d e marzo:Modificaciones de la Circu-lar 6/ 1991 y Circular 8/ 1 99 1 en relación a las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Ano-taciones. (B.O.E. de 22 de abril de 1.993, n° 96). Vide área de Derecho Bancario.

-Circular 7/ 1993 de 27 de abril: Sobre el Registro Especial de Estatu tos de las Entidades de crédito. (B.O.E. de 5 de mayo de 1.993, nº

-Real Decreto 629/ 1993 de 3 de mayo: Actuación en los mercados de valores y registros obligatorios. (B.O.E. de 21 de mayo de 1.993. nº 121). Vide área de Derecho Banca-rio.

-Real Decreto 686/ 1993 de 7 de mayo: Modifica el Reglamento de la Ley 46/ 1984 de 26 de diciembre relativo a las Instituciones de Inversión Colectiv a, precisánd ose el régimen de las Sociedades y Fondos de Inv ersión Inm obi l iari a. (B.O.E. de 25 de mayo de 1.993, nº

Civil

-Real Decreto 675/1993 de 7 de m ayo: Mod ifica el art. 142 del Reglamento Notarial. (B.O.E. <u>de 8</u> de mayo de 1.993. nº 110).

Comunitario

-Reglamento 696/93 del Consejo, de 15 de marzo de 1.993: Relativo a las unidades estadísticas de observación y análisis del sistema de prod ucci ón en la Comu nidad.

1.993). Vi de área de Derecho Comunitario.

-Directiva 93/ 13/ CEE del Conse-jo. de 5 de abril de 1.993: Relativa a las cláusulas abusivas en los con- tratos celebrados con consumido-

(D.O.C.E. L. 76 de 30 de marzo de

(D.O.C .E. L. 121 de	que regula la selec-
15 de mayo de 1.993).	ción de medicamentos
	a efectos de su fin anc
Far	i ac ión por el Sistema
ma	Nac ional de Salud.
cé	(B.O.E. de 13 de abril
	de 1,993, n° 88).
uti	-Real Decreto
CO	561/1993 de 16 de
	abril: Se establecen
-Orden de 6 de abril	los requ isitos para la
de 1.993: Se desarrolla	realización de ensayos
el Real Decreto 83/	clíni- cos con
1993 de 22 de enero	medicamentos.
	(B.O.E. de 13 de mayo

JULIO, 1993

res. (D.O.C.E.L. de 21 de abril

de 1.993). Vi de área de Derecho Comunitario.

-Reglamen to 793/93 del Conse- jo, de 23 de marzo de 1.993: \$obre evaluación y control

de las sustan- cias existentes. (D.O.C.E. L. 84 de 5 de abril de 1.993). Vide área de Derecho

Comunitario.
-Directiva del Consejo:
Relativa a la armonización de las disposicio- nes sobre la puesta en el mercado y el cont rol de l os expl osiv os con fines civ iles.

de 1.993, n° 114).	128).	ejercicio 1.992. y se determ in a el
-Real Decreto 822/	Γ'	lu gar. <u>forma y plazos de</u>
1993 de 28 de mayo:	Fis	presentación de los mismos.
Relativo al	cal	(B.O.E. de 16 de abril de 1.993. n°
establecimiento de los Principios de buena práctica a seguir por los Laboratorios y su aplicación en la realización de estu- dios no clínicos sobre sustancias y prod uctos químicos.	-Orden de 14 de abril de 1.993: Aprueba los model os de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el	91). Vide área de Dere-cho Fiscal. -Orden de 28 de abril de 1.993: Revisión de la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Per- sonas Físicas. (B.O.E. de 1 de mayo de 1.993, n° 104). -Orden de 4 de mayo de 1.993:
(B.O.E. de 29 de mayo de 1.993, nº	Patrimonio para el	
	JULIO, 1993	7

Economist & urist

Canje de Notas de 30 de septiem-

Regula la forma de llevanza y el diligenciado de los librosregistros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. CB.0.E. de 6 de mayo de 1.993. n° 108). Vide área de Derecho Fiscal.

-Circular 4/ 1993 de 23 de abril: Dicta las normas de cumplimentación de los documentos de acompa- demanda de drogas entre el ñamiento que amparan la circulación de prod uctos objeto de los Rei no de Espa ña y los Estados Impuestos Especiales de fabricación y se aprueba el modelo de resumen trimestral de movimientos de v inos v bebid as fermentadas. (B.O.E. de 11 de mayo de 1.993, n°

-Orden de 11 de mayo de 1.993: Aprueba el modelo de solicitud- res y de medios bacteriológicos: l iqu idación de la tasa fiscal que hecho en Ginebra el 17 de junio de grava los juegos de suerte, envite o 1.925. (B.O.E. de 16 de abri 1 de azar, devengados por las salas de 1.993, nº 91). bingo. (B.O.E. de 17 de mayo de 1.993, n° 117).

Aprueba los modelos de decla- A rabe de Egipto: firmado "ad ración del Impuesto sobre Socieda- referend um" el 12 de marzo de des para los ejercicios iniciados 1.991 en El Cairo. (B.O.E. de 23 de entre el 1 de enero y el 31 de abril de 1.993, nº 97). diciembre de 1.992, de los Grupos de Sociedades a los que se haya concedido el Régimen de Tributa- nal sobre Búsqueda y Salvamento ción sobre el beneficio consolidado. (B.O.E. de 18 de mayo de 1.993, n° 118).

-Orden de 12 de mayo de 1. 993: Aprueba la tabla de coeficien tes an uales de amortización en relación al Impuesto sobre Socieda- des. CB.O.E. de 20 de mayo de 1.993. n° 120). Vide área de Dere- cho Fiscal.

-Real Decreto 803/1993 de 28 de mayo: Modifica determinados procedimientos tributarios. (B.O.E. de 29 de mayo de 1.993, nº 128).

Inmobiliario

-Orden de 25 de marzo de 1.993:

Modifica la tasa de amortización propuestas por Francia relativas al establecida en el art. 17 del Real Apéndice B.6 del Anejo B y a los

diciembre sobre medidas de finan- mayo de 1.993, n° 106).

ciación de actuaciones protegibles

bre y 23 de diciem bre de 1.992: Modifica el Tratado de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Argentina de 3 de junio de 1.988. (B.O.E. de 1 de abril de 1.993, n° 78).

materia de red ucción de la

U nidos de A mérica: hecho en Madrid el 25 de nov iembre de 1.99 1. (B.O.E. de 8 de abril de 1.993,n°84).

-Protocolo relativo a la prohibición de empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o simila-

-Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el -Orden de 11 de mayo de 1993: Reino de España y la República

> -Instru mento de Ad hesión de España al Convenio Internacio-Marítimo 1.979: hecho en Ham bu rgo el 27 de abri l de 1.979. (B.O.E. de 30 de abril de 1.993, n° 103).

-Entrada en vigor del Memorándum de entendimiento, en virtud del Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 20 de febrero de 1.973. entre España y los Estados Unidos de América: Hecho en Madrid el 27 de noviembre de 1.991. (B.O.E. de 30 de abril de 1.993, n° 103).

-Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

(ADR): Hecho en Ginebra el 30 de septiem bre de 1.957. Enmiendas

Decreto 1932/1991 de 20 de Anejos A y B. (B.O.E. de 4 de

en materia de viv

iendas del plan

-Instrumento de Ratificación del

de cianuro sódico sólido entre el Reino de España y la República Francesa: Deroga parcialmente los anexos del Ac uerdo europeo sobre transporte de merca ncías pel igrosas, firmado en Mad rid y París el 13 de abri 1 de 1.993.

-Acuerdo sobre cooperación en (B.O.E. de 14 de mayo de 1.993, nº 115).

Inversiones Extranjeras

-Real Decreto 591/1993 de 23 de abril: Regula determinados aspectos relacionados con la gestión de gastos y pagos en el exterior. (B.O.E. de 21 de mayo de 1.993, nº

Laboral

-Real Decreto 480/1993 de 2 de abr il: Se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local. (B.O.E. de 3 de abril de 1.993, n° 80).

-Orden de 7 de abril de 1.993: Desarrolla el Real Decreto 480/1993 de 2 de abril por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local, en materia de cotizaciones y pago de pensiones. (B.O.E. de 12 de abril de 1.993, n° 87).

-Real Decreto 426/1993 de 26 de marzo: Se regulan las Secciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de las Oficinas Consulares. (B.O.E. de 14 de abril de 1.993, n° 89).

-Real Decreto 728/1993 de 14 de

mayo: Establece pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles. (B.O.E.

de 21 de mayo de 1.993, nº 121).

Legislación Autonómica

Aragón

Economist & urist

28 de abril de 1.993, n° 101).

-Ley 5/ 1993 de 29 de marzo: Establece el régimen de inspección y procedimiento en materia de disciplina turística. (B.O.E. de 5 mayo de 1.993, nº 107). Vide área de Derecho Constitucional.

-Ley 6/1993 de 5 de abril: Carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.E. de 5 de mayo

de 1.993, n° 107).

-Ley 7/ 1993 de 4 de mayo: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1.993. (B.O.E. de 2 de junio de 1.993, n° 131).

Baleares

-Ley 1/1992 de 10 de niar zo: Sobre el Síndic de Greuges de las Islas Baleares. (B.O.E. de 12 de mayo de 1.993, nº 113).

Canarias

-Ley 10/ 1992 de 23 de diciembre: Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1.993. (B.O.E. de 6 de abril de 1.993, n° 81).

-Real Decreto 536/1993 de 12 de abril: Ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de educación no universitaria. (B.O.E. de 5 de mayo de 1.993, nº 107).

-Real Decreto-Ley 7/1993 de 21 de mayo: Med idas Urgentes de adaptación y modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, del

Impuesto General Indirecto Canario, del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias y de la Tarifa Especial de Arbitrio Insular a la Ent rada de Mercancías. (B.O.E. de 27 de mayo de 1.993, n° 126).

-Lev 1/1993 de 6 de abril: Ordenación del Sistema Sanitario. (B.O.E. de 25 de mayo de 1.993, n°

Castilla León

Cataluña

Cantabria

-Ley 3/1993 de 5 de marzo: Esta-

-Ley 111993 de 5 de mar zo: tuto de los Consumidores. CE.O.E. Modifica la Ley 5/1984 de 18 de de 5 de abril de 1.993. nº 81). Vide octubre sobre incompatibilidades próximo número.

de altos cargos. (B.O.E. de 27 de Ley 4/1993 de 18 de marzo: Sisabril, no 100).

Modifica parcialmente en materia 9S). de contratación la Ley 3/1984 de 26 de abril de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria. (B.O.E. de 27 de abril de 1.993, n° 100).

- Ley 3/ 1993 de 10 de marzo: Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria. (B.O.E. de 20 de mayo de 1.993, n° 120).

-Ley 4/ 1993 de 1 de abril: Reguladora de la Función Pública. (B.O.E. de 25 de mayo de 1.993, n°

Castilla La Mancha

-Ley 2/ 1992 de 10 de diciembre: Ordenación y disciplina en materia jurídica. (B.O.E. de 27 de abril de 1.993, n° 100).

-Ley 3/ 1992 de 18 de diciembre: Presupuestos Generales de Castilla La Mancha para 1.993. (B.O.E. de 28 de abril de 1.993, n°lü 1).

tema bibliotecario de Cataluña.

-Lev 2/1993 de 5 de marzo: (B.O.E. de 21 de abril de 1.993, nº

Galicia

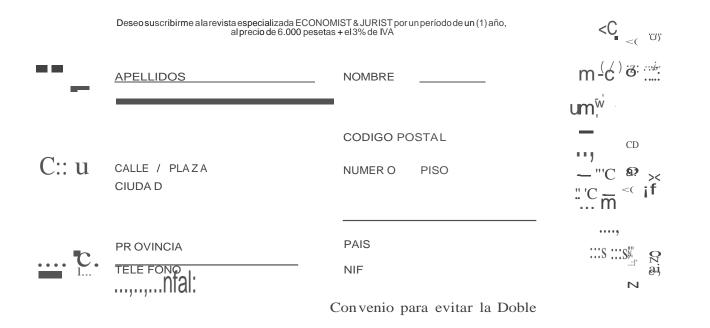
-Lev 1/1993 de 13 de abril: Sobre Protección de Animales Domésti cos v Salvaies en Cautiv idad. (B.O.E. de 11 de mayo de 1.993, nº

-Ley 3/1993 de 16 de abril: Sobre las Aparcerías y los Arrendamientos Rústicos Históricos de Galicia. (B.O.E. de 11 de mayo de 1.993, nº

-Ley 4/1993 de 14 de abril: Servicios Sociales. (B.O.E. de 11 de mayo de 1.993, nº 112).

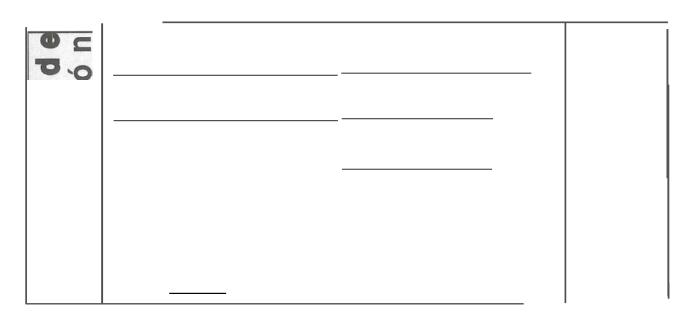
La Rioja

-Lev 2/1993 de 13 de abril: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Rioja para 1.993. (B.O.E. de 20 de abril de 1.993, n°



medidas relativas a estas actuacio-	fiscal en materia de Impuestos	ción General y de la Administra-
inodiads foldervas a ostas actuacio	insear on materia de impaestos	cion General y de la Mainimistra
1.992-1.995 y se adoptan otras	Imposición y prevenir la evasión	junio del Presidente de la Diputa-
nes. (B.O.E. de 9 de abril de 1.993,	sobre la Renta y el Patrimonio	ción de la Comunidad Autónoma
n° 85). Internacional	entre España y Ecuador: Firmado en Quito el 20 de mayo de 1.991. (B.O.E. de 5 de mayo de 1.993, nº 107).	de Aragón. (B.O.E. de 22 de abril de 1.993, nº 96). Vide área de Dere- cho Constitucional. -Ley 4/ 1993 de 16 de marzo: Ley
-Aplicación provisional del	-Acuerdo relativo al transporte	del Deporte de Aragón. (B.O.E. de
	JULIO, 1993	

	• • • •	1
O	lmll 11111108llO. IDIDI.III4n.ufclcar,c11M11111111111111CIIIIDII*»	co co ai
u		(1) $u > co$
	dlCllDll,dl,can mgitallCllRltf <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</u>	.2 (1) °
m U)		e ^{m zo} o
:::J	11111111aamdlfld&11, 1111111UCIIIII tf dlllllldld 1	
(U)	NIdia11*I1 1 1 1 1 11118	{:/.
	JULIO, 1993	



Economist & urist

Ultimas novedades legislativas

• PUBLICADAS EN EL B.O.E. HASTA EL DIA 11 DE JUNIO •

Se aprueba el modelo de Tarjeta Brasilia el 12 de mayo de 1.992. Europea de Armas de Fuego y el de (B.O.E. de 4 de junio de 1.993, nº declaración de transferenc i as de armas de fuego por armeros autorizados. (B.O.E. de 3 de junio de 1.993, n° 132).

-Real Decreto 680/1993 de 7 de mayo: Normas de control y medidas de lucha contra la peste equina. (B.O.E. de 3 de junio de 1.993, nº

Mod i fica los anexos I al VI, de la cancías al amparo de los cuadernos Orden de 12 de marzo de 1.987 por TIR : Hecho en Ginebra el 14 de la que se establecen las normas fito- noviembre de 1.975, enmiendas prosanitarias relativas a la importación, puestas por Suecia a los anejos 2 y 7 exportación y tránsito de vegetales y y puestas en circulación por el Secreproductos vegetales en aplicación de tario General de las Naciones Unidas la Direct iva 77/93/CEE y sus el 21 de enero de 1.992. (B.O.E. de 4 mod i ficaciones. (B.O.E. de 3 de de junio de 1.993, nº 133). junio de 1.993, nº 132).

mayo: Desarrolla determinadas dis- de Mi ni stros rel ativo a l a inforposiciones de la Ley 39/ 1992 de 29 mación al público de las medidas de de diciem bre, del Presu pues t o protección sanitaria aplicables y el General del Estado para 1.993, sobre comportamiento a seguir en caso de beneficios fiscales aplicables al "Año" emergencia radiológica. (B.O.E. de 4 Santo Compostelano 1.993" y deduc- de junio de 1.993, nº 133). ciones por inversiones en investigación y desarrollo. (B.O.E. de 3 de junio de 1.993, nº 132).

el uso pacífico de la energía nuclear entre el Gobierno de España y el Gobiern o de la República Europea y el Reino de Marruecos".

-Orden de 20 de mayode 1.993: Federativa de Brasil: Hecho en (B.O.E. de 4 de ju nio de 1.993, nº

-Acuerdo pa ra la protección y fomento recíproco de las inversiones entre el Reino de España y la Repú blica de Polonia: Hecho en Mad rid el 30 de ju l i o de 1.992. (B.O.E. de 4 de ju nio de 1.993, n°

-Convenio Ad uanero relativo al -Orden de 27 de mayo de 1.993: transporte internacional de mer-

-Orden de 27 de mayo de 1.993: -Real Decreto 736/ 1993 de 14 de Publicación del Acuerdo del Consejo

-Orden de 27 de mayo de 1.993: Ordenación de la actividad pesquera de las flotas españolas que operan al -Acuerdo de Cooperación sobre amparo del "Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica

-Real Decreto 766/1993 de 21 de mayo: Se incl u ye en el Rég imen General de la Seguridad Social a los jugadores profesionales de baloncesto. (B.O.E. de 5 de junio de 1.993, nº

-Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1.978 relativo al Convenio Inter nacional pa ra p reven ir la contam inación por los buq ues 1.973: Hecho en Londres el 17 de febrero de 1.978. (B.O.E. de 9 de junio de 1.993, nº 137).

-Real Decreto 726/1993 de 14 de mayo: Financiación de actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de i nm uebles y se modifican determ inados artícu los del Real Decreto 1932/1991 de 20 de diciembre. (B.O.E. de 11 de junio de 1.993,

-Real Decreto 765/ 1993 de 21 de mayo: Aprueba el Pl an Técn ico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Med ias. (B.O.E. de 1 1 de junio de 1.993, nº 139).

-Real Decreto 804/ 1993 de 28 de mayo: Aprueba el Reglamento técnico y de prestación de serv icios de telecom unicación de valor añadido de su m in i stro de conm u tac ión de datos por paq uetes o c irc u itos. (B.O.E. de 11 de junio de 1.993, nº

PISO

3620FAX 207.14.57 ² Z[≜] BARCELONA Difusión Jurídica nas de Actualidad 88 **Q** cO ça Z LO Temas (.)

Deseo suscribirme a la revista especializada ECONOMIST & JURIST por un período de un (1) año al precio de 6.000 pesetas + el 3% de IVA **9** Ju A P ELLIDOS NOMBR E CALLE / PLAZA NUMER O CIUDA D CODIGO POSTAL TELE FON S O m " '

Protino rimoto Economist & Jurist

Información jurídica y colegial

C..- Análisis sobre los servicios que presta la Mutua General de la Abogacía y otras mutualidades, estudio comparativo con otros seguros privados, ¿Pueden los Colegios de Abogados legalmente exigir a sus colegiados la inscripción obligatoria en las distintas mutuas y adoptar medidas coercitivas en su caso?

"... Las minutas de abogado. Cómo evitar el pago del IVA frente al impago del cliente. Acuerdo del Consejo General de la Abogacía sobre provisiones.

- El papel de los Colegios de Abogados ante los problemas de los colegiados: el riesgo profesional.
- "... Reforma de la atribución de salas en la Audiencia de Barcelona.

Artículos de doctrina jurídica

... La atribución, como derecho, del domicilio conyugal en los procedimientos matrimoniales. ¿Cabe cuándo ninguno de los consortes ostenta título alguno domicilial o posesorio? La nueva posición jurisprudencia! tendente a limitar el tiempo de otorgamiento del domicilio.

... Los embargos de las cuentas bancarias indistintas por la administración. Medidas a adoptar en tales situaciones.

"... Las cuestiones fiscales que hay que tener en cuenta ante la venta de inmuebles y demás operaciones

"... Nuevo estudio sobre los defectos más frecuentes detectados en los documentos sujetos a calificación en el Registro Mercantil.

- Regularización ¿es posible o no? ¿cuándo? Cuerpo de doctrina.
- Las habilitaciones

Monografía sobre suspensiones y quiebras

....¿Cuándo debe aconsejar el abogado generalista la suspensión de pagos o la quiebra? Criterios de oportunidad práctica.

 $bgD1larldIn, hllB1llMelID.lal.\,Dllll6n.bilcay'R1llm \bullet M..ll1Wll1canaapm$ •aa.1111111•....,canc:mgoallamaffl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lbllrla.nana.• 811811.

"... El pago de la pensión alimenticia por el concursado.

The pago de la pensión alimenticia por el concursado.

C..- Retroacción de compraventa de inmuebles en la quiebra.

JULIO, 1993

"... La frontera entre la suspensión y la quiebra.

"... Responsabilidad penal.

Información Jurídica

Más de la mitad de los abogados se opone a la colegiación obligatoria

Colegiación, intrusismo, formación, publicidad e informatización son algunas de las cuestiones que más preocupan a los letrados, según se deduce de una encuesta elaborada por Economist & Jurist y que permi-sidente del Consejo General de la te mostrar cuáles son las asignaturas pendientes a las que se enfrenta la abogacía española y las inquietudes al respecto.

Esta encuesta ha sido realizada a los que se encuentran miembros de los despachos m ás prest igiosos, abogados recien licenciados y representantes de medianos y pequeños fueron preguntados son las siguien-

- 1. ¿Si la colegiación fuera optativa y no obligatoria, se colegiaría
- 2. ¿Qué servicios echa de menos en su colegio profesional?. Lista de servicios que reclaman.
- 3. ¿Es partidario de la colegiación obligatoria?
- 4. ¿Cree que es conveniente que los abogados hagan publicidad en los medios de comunicación?

Organización útil

De las respuestas obten idas se deduce que la mitad de los letrados es contraria a la colegiación obligatoria y que la mayoría es partidaria de que este colectivo pueda hacer publicidad en los medios de comunicación. Asimismo, los entrevistados citan los servicios que requieren de una buena organización colegial para que ésta sea útil y eficaz, no una mera institución burocratizada. A la primera pregunta las respuestas estaban bastante divididas. Del conjunto de encuestados, un 35 por ciento respondió que sí se inscribirían en su colegio correspondiente, mientras que el 33 por ciento contestó que no.

Entre éstos, varios letrados piden que, ya que es obligatoria en el caso de los letrados, «que al menos sea única en todo el territorio nacional», algo que ya ha logrado el nuevo pre-Abogacía, Eugeni Gay, y que representaba uno de sus objetivo principales. Algunos letrados critican los elevados costes de colegiación

El resto de encuestados se mostrauna amplia muestra de letrados entre ron como los más prácticos y respondieron que estarían dispuestos a colegiarse, según los servicios que la organización colegial ofreciera.

En este sentido, las respuestas a la bufetes. Las cuestiones por las que segunda pregunta revelan l a gran importancia que los letrados dan a las prestaciones que su colegio les pueda ofrecer. La mayoría de los encuestados (el 73 por ciento) aseguró echar en falta sólo algunos servicios, el 12 por ciento dijo no echar en falta ningu no, y entre el resto hu bo algunos muy críticos que manifestaron echar en falta casi todos los servicios.

Las peticiones en este sentido son numerosas pero, en resumen, se centran en los siguientes servicios: Listas de morosos, formación de los recién licenciados, mutua médica, defensa del letrado, biblioteca defiinformatizado, dependencias dignas en los juzgados al servicio de los letrados, defensa del letrado contra el intrusismo profesional, cursos de reciclaje o formación gratuitos, asesoramiento fiscal, defensa del letrado ante las arbitrariedades de los jueces y la Administración pública, mejor gestión de los servicios que se prestan y una bolsa de trabajo más eficiente.

Morosidad

Algunos abogados profundizan en sus respuestas. Por ejemplo, uno de ellos pide un servicio que salvaguar-

JULIO, 1993

de la morosidad de tal forma que el cliente moroso fuese anotado en una especie listado nacional y no pudiera obtener defensa letrada alguna, salvo evidentemente, en el caso de la Justicia gratuita «que es distinto». Un letrado pide textualmente «perseguir» a los clientes morosos que «pasan de bufete a bufete endeudándose en todos». Este abogado pide que se publique una «lista negra» de morosos.

Las arbitrariedades de las que aseguran ser víctimas los letrados por parte de los jueces es otra de las denuncias constantes. En este sentido, piden una auténtica defensa del letrado, no sólo frente a los tribunales, sino también ante la Administración de Justicia.

Cursos de reciclaje

Los más prácticos piden cursos de reciclaje a precios asequibles, material de papelería, una cooperativa de libros, sistemas informáticos y, en definitiva, todos aquellos recursos de uso cotidiano que forman parte de la infraestructura necesaria para u n letrado. Tam bién ex igen u na puesta al día de las novedades legislativas mediante pubcaciones, semiciente, revista ju rídica y servicio narios y coloquios. Otros echan en falt a u na m ayor au todefensa del colecti vo ante la Ad ministración, mientras que una buena parte sugie-

Según una encuesta

elaborada por E&J, la mayoría de los letrados cree conveniente hacer publicidad y exige mayores servicios

re presionar para que se agilice la Justicia.

También se solicita una información veraz y concisa sobre cuestiones de interés que afectan a la chos los que exigen u na política de transparencia informativa en las cuest iones colegiales, especialmente en aquellas que afecten al propio letrado.

Esta transparencia se refiere, entre otros, a los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno y de los temas que se discuten en las juntas generales con la suficiente antelación.

Uno de los letrados entrevistados sugiere la creación de un fondo de inversiones, instalaciones deportivas, una mutua médica eficaz y una gestión de los «enormes rec ursos más rentable y eficaz».

La ayuda al recién licenciado es otra de las constantes. Gay ya ha advertido de que, ante el gran número de nuevos licenciados, es necesario regu lar el acceso a la profesión mediante cursos de especialización -que ofrecen Escuelas de Práctica Jurídica como la «Roda i Ventura» de Barcelona- de carácter obligatorio, o bien pasantías.

Parece ser que la primera opción es la más viable, ya que no existen un nú mero de despacho de abogados suficien te para acoger a jóv enes letrados.

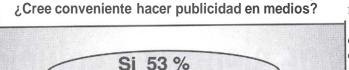
Los bufetes consideran que la formación universitaria es muy precaria y que la preparación para ejercer l a abogacía debe ser fru t o de u n especial aprendizaje prof esional. Son muy pocos los despachos dispuestos a acoger a recién licenciados, cuya demanda es enorme.

«Me sobra»

Con estas respuestas, los encuestados por Economist &

Jurist buscan cambiar la imagen de inst i tución burocratizada que determinados sectores críticos han reprochado a Eugeni Gay, recientemente reelegido como decano.

Respecto a 1 a tercera pregunta, más de la mitad de los encuestados se muestra en contra de la colegiación obligatoria,



un 66 por ciento frente al 33 por

ciento que está a fav or. «A mi, me

sobra el Colegio», afirma uno de los

entrev istados. La colegiación obli-

gatoria ha sido defendida por Euge-

ni Gay desde siempre, ya que, en su

opinión, se defiende la independen -

ma del régimen jurídico de los cole-

gios profesionales, momento en que

la amenaza de establecer la libre

colegiación se hizo muy patente,

aunque quedó en agua de borrajas.

Como se recordará, algunos grupos

radicales se mostraron contrarios a

la colegiación por considerar que

proporcionaba un privilegio injusto.

letrados encuestados pusieron de

manifiesto la necesidad de poder

hacer publicidad de sus servicios en

los medios de comunicación, mien-

trasel resto, concretamen te un 47

por ciento, expresaron lo contrario.

Matizaciones

No obstante, la mayoría de los abo-

gados que respondieron afirmativa-

mente matizan sus respuestas y con-

sideran que sería bueno hacer publi-

cidad, pero estableciendo unas limi-

taciones establecidas por un regla-

mento, estatuto o normat iv a ética.

Los abogados sugieren que estos lí-

mites sean de localización, cuantita-

Asimismo, el 53 por ciento de los

cia del letrado.

No 47 %

forma y contenido). Otros, opinan que la publicidad meior es la constancia en el trabajo bien hecho y la honestidad. Hay quien también se muestra partidario de efectuar un tipo de

> publicidad colectiva, pero se opone a que ésta sea individual. No falta el que, rotunda-

mente, opina que hacer

, tivos y cualitativos (de

publicidad en los medios de comunicación permitiría al cliente elegir al abogados que quisiera con toda la información posible. Un letrado asegura que hacer publicidad no es «ni conveniente ni necesario. Simplemente es un derecho que, como tal, no debe ser objeto, ni de limitación

ni siquiera de regulación. Así lo puso de manifiesto durante la elaboración del proyecto de refor-Derecho a informar

> Tradicionalmente, la publicidad de los abogados estaba consi derada poco ética. Sin embargo, un buen número de abogados ha comenzado a defender su derecho a informar.

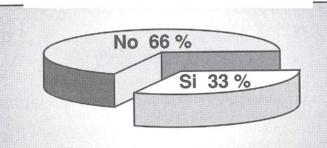
> El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña fue uno de los primeros de España en mod ificar 1 a normativa vigente, excesiv amente estricta, y procedió a la regulación de la publicidad institucional e individual de los colegiados.

> Segú n éstas, el abogado puede intervenir en conferencias y mesas redondas, publicar artículos periodísticos y dar opiniones personales, así como editar folletos explicativos de las características de su despacho que sólo podrá distrubuir entre sus clientes, no entre terceros.

> Asimismo, podrá colear rótulos y pl acas indicadoras en su despacho, pero sólo en la entrada del inmueble y en la puerta de la oficina. Está prohi bido hacer publ icidad sobre éxitos profesionales o sobre honora-

> > rios, así como intervenir en consultorios jurídicos. Quebrantar estas reglas conlleva la apertura de un exped iente sancionad or. Las respuestas obten idas por Economist & Jurist revelan que la m ayor parte del colectiv o es partidario de hacer publicidad de los serv icios que se ofrecen en los medios de comunica-

¿Es partidario de la colegiación obligatoria?



Doctrina Jurídica

Problemas de siempre y soluciones en la Ley de Sociedades Anónimas

Con motivo de la puesta en vigor y vigencia real de la Ley de Sociedades Anónimas, se han venido planteando algunas dudas que afortunadamente v ienen resol v iénd ose de manera razonable. En esta fase inicial la doctrina emanada de la Dirección General del Reg istro y del Notariado es fundamental para conformar un estado de opinión vinculante y resol utorio de ciertos problemas.

En este breve comentario vamos a fijar la atención en tres puntos concretos que han sido objeto de dudas con motivo de la adaptación de Estatutos al nuevo texto legal.

El primer supuesto es el relativo a si era necesario y obligado que con motivo de la adaptación de los Estat ut os se consignara la fecha de com ienzo de las operaciones de la sociedad

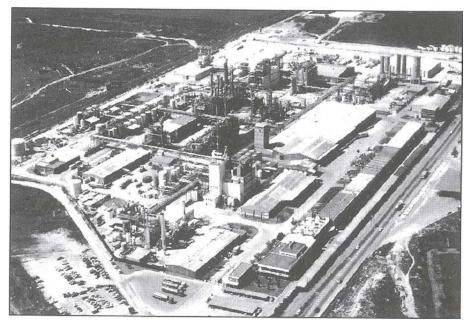
También en la práctica fue motivo de dudas la redacción del precepto estatutario regulador, en su caso, del derecho de adquisición preferente a favor de los socios en el caso de enajenación judicial o administrativa.

También moti vó post uras discrepantes el contenido del artículo estat u tario que estableciera la retri bución de los administradores de una Sociedad Anónima.

Me he permitido seleccionar estas tres cuestiones debido a que la realidad jurídica vivida me ha enseñado a percibir la disparidad de criterios y, afortunadamente, disponemos en fechas rec i entes de u na pos ición doctrinal al respecto emanada de la Dirección General del Registro y del Notariado.

Comienzo de las operaciones de la sociedad

1) En efecto, hay que afirmar respecto a la primera de las cuestiones planteadas que resulta innecesaria la mención de la fecha de comienzo de las operaciones sociales en los nuevos Estatutos de una Sociedad Anó-



En los Estatutos adaptados no es necesario fijar la fecha de comienzo de las operaciones

nima como consecuencia de la adaptación de los anteriores a la nueva normativa. La Dirección General del Registro y del Notariado, en resol uc10n de 1 de febrero de 1.993/(B.O.E. nº 71, de 24 de marzo de 1.993), se ha pronunciado en este sent id o. La Di recc ión General entiende que no es necesaria la concreción estatu tari a de 1 a fecha de comienzo de las operaciones sociales, con motivo de la adaptación de Estatutos. Revoca, consecuentemente, la calificación del Registro Mercantil que había suspendido la inscripción de los n uevos Estatutos en tanto no se consignara en aquéllos la referida mención.

De esta manera se aclara esta cuestión, que había pl anteado dudas y criterios dispares i nterpretando la letra d) del artículo 9 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Dirección General entiende que se trata de una mera ref erencia h ist órica y q ue dicho dato forma parte de la historia registra! con la innegable virtualidad publicitaria que ello tiene en dicho historial registra!

Entendemos que es u na posición razonada y razonable, que suponía u n exceso por parte del Regist ro Mercantil que lo entendió de forma distinta, y ello se ratifica por otro pronunciamiento de la propia Dirección General en i gual es térm inos q ue 1 os señal ados an ter iormente med i ante 1 a resol uc ión de 2 de febrero de 1.993 (B.O.E. nº 73, de 26 de marzo de 1.993).

Derecho de suscrpción preferente 2) Desde que se escribieron las primeras líneas, con motivo de la Ley de 1.951, sobre el derecho de sus-

Motivó posturas
discrepantes el artículo
que establecía la
retribución de los
administradores de una
Sociedad Anónima

cripción preferente (vid. especialmen te y como pu nto de referenc ia doctrinal más autorizado, la monografía del profesor Broseta) la doctrina se ha debatido en tomo a posiciones distintas sobre este capital asunto en la regulación de la Sociedad Anónima, por v ía de regl ament ación estat ut ari a. La n uev a Ley, en su red acción, facilitó la solución de algunos problemas y dejó abiertos, como es evidente, otros. La Dirección General del Registro y del Notariado, mediante resolución de 23 de julio de 1.993 (B,O.E. nº 71, de 24 de marzo de 1.993), ha abordado el supuesto del derecho de adquisición de acciones enajenadas en ejecución judicial o administrativa. La Dirección General admite la inscripción en el Registro Mercantil de una cláusula estatutaria en la que se establezca el derecho de ret racto a favor de los socios para el supuesto de ejecución forzosa de las acciones de u no de ellos resultante de un embargo o grav ám en. Pero es más, la Di recci ón General se pronuncia sobre un punto esencial, cual es la determinación del precio, estableciendo la doctrina que tal adquisición preferente se podrá efectuar "por el mismo precio, pactos y cond iciones" en los que haya adquirido el adjudicatario. Aún da un paso más adelante y fija el criterio de que ése debe ser el precio, y no, por el contrario, el que resulte conforme al procedim iento prev isto en el artículo 64.1 de la Ley de Sociedades Anónimas (Valor Real):

"I. Las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones sólo serán aplicables a las adquisiciones por causa de muerte cuando así lo establezcan expresamente los propios Estatutos. En este supuesto, para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro-registro de acciones nominativa s, la sociedad deberá prese nta r a l he red ero un adquirente de las acciones u ofrecerse a adquirirla s ella misma por su valor real en el momento en que se solicitó la inscripción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75.

S e entend erá como valor real el que el Aud itor d é cuentas de la sociedad y, si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, el Auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador M ercantil del domicilio social".

La Dirección General se decanta por aceptar

la previsión estatutaria de prevalencia del precio de remate

De esta suerte, la Dirección General se decanta por aceptar la previsión estat u taria de prevalencia del precio de remate, lo cual supone una punt ualización realmente importante.

No se trata, a nuestro entender, de rechazar el mecanismo legal del artículo 64.1, sino de ceñir el supuesto y abrir la posibilidad de que el precio sea el mismo que el que haya servido para la adjudicación.

Finalmente, entendemos coincidente con la opin ión de la Di recc ión General que dicho sistema tiene que figurar expresamente como prev isión estatutaria, pues de no ser así no sería aplicable la doctrina emanada por la resol ución que ha resuelto el supuesto que analizamos.

Retribución a los administradores

3) También reviste interés la resol uc ión de 23 de febrero de 1.993 (B.O.E. nº 7 1, de 24 de marzo de 1.993) por la que se aclaran algunas cuest i ones su rg id as como consecuencia de la difícil interpretación de los artículos 9 h) y 130 de la Ley de Sociedades Anón imas y 124.3 de Reglamento del Registro Mercantil, que se ocupan de la fijación y concreción de la retribución de los

La rigidez en
unos casos y las
excesivas facilidades
de la ley en otros,
obliga a operar con
realismo

adm i nist radores de u na Sociedad Anónima. Pues bien, en este supuesto, la Dirección General ha venido a confirmar la calificación del Registro Mercantil, que considera que la retribución de los administradores en los Estatutos objeto de inscripción no estaba suficientemente concretada para que se ajustara a las exigencias preceptivas anteriormente citadas. La Cláusula en cuestión se limitaba a establecer que "el cargo de administrador será retribuido con l as condiciones que establezca l a Junta General". El Registro Mercantil y la Dirección General, en nuestro criterio acertadamente, entiende que no se cu mplen las normas legales establecidas en los artículos antes indicados. La resolución argumenta que la compatibilidad del legítimo interés social y la expectat i v as económicas de los administradores imponen una prev isión estat u taria que exige mayor concreción. Y ello debido, por u n lado, al derecho de los accionistas a formarse una idea clara sobre la significación de l os derechos económicos de los admini stradores; y, por otro lado, a l a expectat iv a de los m ismos socios sobre la repercusión en los beneficios sociales d istribu ibles. La Dirección General entiende, coincidente con el Registro Mercantil, que la concreción debe realizarse en los térm in os ex i gidos por la Ley y el Reglamento, no siendo suficiente la mera remisión a la Junta General.

Interpretación razonada

Los su puestos antes anali zados, necesariamente de forma somera v procurando facilitar la síntesis de la solución, viene a confirmar que tanto l a Ley de Socied ades Anón im as como el Reglamento del Registro Merca n t i l irán conformando su ámbi t o y conten ido median te 1 a interpretación razonada y razonable que los profesionales del Derecho venimos haciendo de dichos textos· legales. La rigidez en unos casos, las excesivas facilidades discrecionales un otros y la novedad de problemas viejos, hacen de la Sociedad Anónima un sector del Derecho sobre el que hay que operar con realismo, facilitando la vida real de las empresas y evitando innecesarias rigideces en la aplicación de la norma.

Doctrina Jurídica

Agustín Jausas Martí/Jordi Faus Santasusana

A proximación al contenido jurídico del

l.Introducción

los doce Estados m iembros de la Com u n idad Europea firmaron en Maastrich t el Tratado de la U n ión Europea.

que se han producido en el proceso de de la Comunidad. ratificación del mismo han dado pie a m u ltitud de comentari os, especialmente de carácter político y económi- mera Parte son las siguientes: co. La decisión danesa de no ratificar por un nuevo referéndum, la apretada victoria del sí en Francia, las aprobaciones mediante procesos parlamentarios en España e Ita l ia, los últ imos acontecimientos en el seno del Siste- y monetaria: ma Monetario Europeo, la indecisión británica de gran actualidad en estos días, por poner algunos ejemplos, han desplazado, en cuanto a actualid ad del Tratado.

Consideramos que u na aprox imay pretendemos ofrecerla en estas pági- cer una moneda única. nas de la forma m ás sistemat i zada posible.

Tra tado de la Unión Eu ropea estabilidad de precios. (TUE).

Median te el TUE, los Estados Miembros de la Comunidad Europea constit u ven 1 a denom inada Un ión Europea.

prevista para el 1 de Enero de 1.993. balanza de pagos estable. Dado que todavía no ha sido ratificado por todos los Estados miembros, el TUE entrará en vigor el primer día del mes siguiente al depósito del i nstrumento de ratificación del ú ltimo del cual, en los ámbitos que no sean Estado miembro en hacerlo.

El TUE se compone de 8 títulos, 18 Protocolos y 34 Declaraciones. Los Protocolos y Declaraciones, como es sabido, no tienen valor normativo, si bien tienen un valor interpretativo.

En términos generales, las dis-

posiciones más importantes del TUE los efectos de la acción contemplada, El pasado 7 de Febrero de 1.992, los son aquellas que modifican el Tratado a nivel comunitario. Mini stros de Asun tos Exteriores de constituti vo de la Com unidad Eco- D) Se crean diversas instituciones y nómica Europea (TCEE).

2. Modificaciones del TCEE

2.1. Principios

La primera parte del TCEE (Arts. 1 a ciones consultivas. Desde entonces, los acontecimientos 7C), establece los principios básicos

> Las modificaciones más relevantes introducidas por el TUE en esta Pri-

- A) Se reconoce que la misión de la el Tratado posteriormente superada Comu n idad es la creación de u n a pea unión económica v monetaria.
 - Estados miembros y de la Comunidad para alcanzar dicha unión económica
- i) Implicará la adopción de una política económica basada en la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado informativa, a los aspectos jurídicos interior y en la definición de objetivos 1 a nacional idad de a lgún Estado comunes.
- ii) Incluirá la fijación irrevocable de ción a dichos aspectos es importante, tipos de cambio con objeto de estable-
- iii) Comportará la aplicación de una política monetaria y de tipos de cam-2. Alcance y entrada en vigor del bio cu yo objetivo pri mordial sea la
 - iv) Se llevará a cabo de conformidad con l os princip ios de econom ía de mercado abierta y libre competencia.
- v) Respetará los principios de precios estables, fin anzas pú bl icas y La entrada en vigor del TUE estaba cond iciones monetari as sólidas, y

C) Se ampl i a sustanc i alme nte el ámbito de competencias de la Comunidad, pero también se consagra el principio de subsidiariedad, en virtud de su competencia exc lusiv a, l a Comunidad sólo intervendrá en la medida en que los objetivos de la acción emprendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los EE.MM v consig uientemente sólo puedan lograrse meior debido a la dimensión o

- organismos comunitarios:
- i) Tribunal de Cuentas.
- ii) Comité de las Regiones, con fun-
- iii) Sistema Europeo de Bancos Centrales.
- iv) Banco Central Europeo.
- v) Banco Europeo de Inversiones.
- vi) Defensor del Pueblo.
- 2.2. Ciudadanía de la Unión Euro-

La segunda parte del TCEE (Arts. 8 B) Se seña la que la acción de los a 8E), t ras su mod i ficación por e l TUE, queda enteramen te dedicada a la ciudadanía de la Unión Europea.

> Los aspectos más relevantes en este terreno son los siguientes:

- A) Se crea la ciudadanía de la Unión Europea, siendo ciudadanos de la Unión todas las personas que ostenten miembro.
- B) Se establece un catálogo de derechos de los ciudadanos de la Un ión Europea, que incluye los siguientes:
- i) El derecho a circu lar y resid i r libremente en el territorio de los Estados miembros con sujeción a los límites y condiciones previstos en el TUE. Las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de este derecho serán normalmente adoptadas por el Consejo por unanimidad.
- ii) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro de residencia de acuerdo con las modal idades que el Consejo deberá establecer, por unanimidad, antes del 31 Diciembre 1994.
- iii) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado m iem bro de residencia de acuerdo con las modalidades que el Consejo deberá establecer, por u nanim idad, antes de 1 31 Diciembre 1993.
- iv) El derecho a acogerse, en terceros países donde no esté representado

el Estado m iembro de su nacionali dad, a la protección de las autoridades diplomáticas y consu lares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los n acionales de dicho Estado.

v) El derecho de petición ante el Parlamento Europeo y de dirigirse ante el Defensor del Pueblo.

2.3. Políticas de la Comunidad

La Tercera Parte del TCEE (Arts. 9 a 130Y) se divide en 17 títulos, cada u no de los cuales trata sobre una de las materias en las que la Comunidad ostenta competencias.

Los únicos títulos en los que no se produce modificac ión alguna del TCEE son los relativos a libre circulación de mercancías y agricultura.

Los aspec tos m ás relevantes del resto de títulos de esta Tercera Parte del TCEE son los siguientes:

A) Libre circulación de trabajadores y profesionales

Se establecen nuevos mecanismos para la adopción de decisiones del Consejo en estas materias, mecanismos que prevén una mayor intervención del Parlamento Europeo.

B) Libre circulación de capitales

Se consagra en el TCEE la prohibición de todas las restricciones a los m ov i mientos de capitales y pagos entre Estados miembros.

Esta prohibición alcanza igualmente a 1 os movim ientos de capitales y pagos entre Estados miembros y terceros Estados, si bien en este caso no quedarán afectadas las restricciones que ex i stan a 31 de Diciem bre de 1.993.

La total libertad de circulación de capitales no imped irá a los Estados miembros establecer medidas tendentes a impedir infracciones de las norm ativas nacionales (en especial de carácter fiscal), así como proced im ientos de declaración de dichos movimientos siempre que no constituyan u na discriminación arbitraria ni mendadas por el Consejo, el Consejo una restricción encubierta.

La posi bilidad de adoptar medidas de salv aguarda en circunstancias excepcionales queda limitada a los mov imientos con destino a terceros países o procedentes de ellos. Los Estados miem bros no podrán pues adoptar medidas de restricción de los movimientos intra-comunitarios aún cuando por circunstancias excepcionales, estos causen o amenacen causar dificultades graves para su economía. C) Política de Competencia

Una ú nica modificación en este terreno: se señala que las ayudas públiEl Consejo señalará los países cuyos nacionales necesitarán visado para entrar en la Comunidad

el mercado común. D) Aproximación de las Legislacio-

El Art. 100 C establece que el Consejo, por unanimidad, determinará los terceros países cuyos nacionales deberán estar provistos de un visado para entrar en la Comunidad.

E) Política Económica

Los Arts. 102A a 104C, disposiciones introducidas en el TCEE por el TUE, establecen la denominada política de convergencia, definida por los siguientes aspectos:

i) El Consejo adoptará por mayoría cualificada una recomendación sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros, y supervisará dichas políticas. En caso de que la política económica de un Estado miembro contradiga las orientaciones generales recopodrá formular las recomendaciones necesarias.

- ii) Las facultades del Consejo quedan pues limitadas al ámbito de las recomendaciones. El Art. 103 A, sin embargo, señala que el Consejo podrá acordar por unanimidad medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgen dificultades de suministro de algún producto. Obviamente, la facultad normativa queda mermada, en este caso, por el requisito de la unanimidad.
- iii) Se prohibe a los Bancos Centrales de los Estados miembros la autori-

cas destinadas a promover la cultura y zación de descubiertos o la concesión la conservación del patrimon io de créditos a instituciones, organispodrán considerarse compatibles con mos y empresas públicas (con excepción de las entidades de crédito públicas que recibirán el mismo trato que las entidades de crédito privadas).

iv) El apartado 1 del Art. 104 C establece que los Estados miembros evitarán déficits pú bl icos excesivos, diseñando medidas tendentes al control del déficit público por parte de la Comisión y del Consejo. En virtud de estas medidas el Consejo podrá, respecto del Estados miembros que no cumpla sus recomendaciones, exigir la constitución de depósitos no remunerados ante la Comunidad o incluso imponer multas.

F) Política Monetaria

Los Arts. 105 a 109D del TCEE diseñan los objetivos y actuación del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco Central Europeo (BCE).

El objetivo principal del SEBC será controlar la inflación.

Entre las funciones del SEBC se incluyen las de gestionar las reservas oficiales de divisas de los EE.MM así como la de definir y ejecutar la política monetaria de la Comunidad.

En cuanto al BCE, se le faculta para la emisión de billetes de banco y se le otorga la facultad de aprobar la emisión de moneda metálica por los Bancos Centrales de los Estados miembros.

Tanto el BCE como los Bancos Centrales de los Estados miembros serán independientes de las instituciones comunitarias y nacionales, de las que

Economist & urist

no podrán recibir instrucciones.

G) Realización de la Unión Económica y Monetaria en distintas fases

La Unión Económica y Monetaria se realizará, de acuerdo con lo establecido en el TUE, en tres fases.

1ª Fase

Se trata de una fase introductoria, en la que los Estados miembros intentarán crear dentro de sus fronteras las condiciones que les permitan acceder a la 2º Fase.

La 1ª Fase se desarrollará desde la entrada en vigor del TUE hasta el 1 de Enero de 1.994.

Las acciones previstas para la 1^a Fase son las siguientes:

i) Los Estados miembros adoptarán las medidas que sean necesarias para cumplir con la prohibición absoluta de restricciones a los movimientos de capitales y pagos.

ii) Los Estados miembros adoptarán igualmen te las medidas necesarias para cumplir con la prohi bición de autorización de descubiertos o la concesión de créditos por parte de su Banco Central a instituciones, organismos y empresas públicas.

iii) Los Estados miembros aprobarán un programa plurianual de convergencia.

2ª Fase

Se trata, sin duda, de la fase más importante, aquella en la que los Estados miembros y la Comunidad deben, de hecho, crear la Unión Económica y Monetaria.

La importancia de esta fase se traduce, de entrada, en la indefinición no de su inicio sino de su final.

Así, se señala en el TUE que la 2ª Fase se iniciará el 1 de Enero de 1.994 y con ti n uará hasta l a fecha que el Consejo decida por mayoría cualificada. La decisión del Consejo deberá adoptarse antes del 31 de Diciembre de 1.996. A más tardar, sin embargo, la 2ª Fase terminará el 31 de Diciembre de 1.998.

Durante la 2ª Fase se producirán los siguientes efectos:

- i) Entrará en vigor la prohibición de los Bancos Centrales de los Estados miembros de autorizar descubiertos o conceder créditos por parte a instit uciones, organismos y empresas públicas.
- Se prohibirá a las ii)) instituciones, organismos y empresas públicas cual-. quier tipo de acceso privilegiado a las entidades financieras que no se base en consideraciones prudenciales.
- iii) Se proh ibirá a la Comu nidad otorgar garantías en beneficio de los

El Consejo decidirá, por mayoría cualificada, qué estados miembros cumplen las condiciones para la adopción de una moneda única

Estados miembros y sus instituciones y a los Estados m iem bros otorgar garantías en beneficio de sus propios organismos y empresas públicas.

iv)) Cada Estado miem bro iniciará los procesos conducentes a asegurar la independencia de su Banco Central.

v) Se creará un Instituto Monetario Europeo (IME), formado por los gobernadores de los Bancos Centrales de los Estados miembros, entre cuvas funciones destacan la de reforzar la cooperación de los Bancos Centrales nacionales, superv isar el funcionamiento del SME y facilitar la utilización del ECU.

v i) Los Estados m iem bros podrán adoptar medidas de salvaguarda previa autorización de la Comisión Europea y previo recurso al mecanismo de la asistencia mutua del resto de Estados miem bros. Se reconoce, no obstan te, la facu ltad de los Estados m iembros de adoptar med idas provisionales con carácter cautelar en los casos de crisis súbita en la balanza de pagos. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá ordenar la modificación o supresión de estas medidas.

vii) El Consejo decidirá, por mayoría cualificada, qué Estados miembros cumplen las condiciones para la adopción de una moneda ú nica, es decir, qué Estados miem bros cumplen las condiciones para entrar en la 3ª Fase. Estas condiciones son, sin duda, las que mayor resonancia han tenido en las informaciones que se han publicado sobre el TUE, y son las siguientes:

..- Inflación. No deberá superar en más de 1.5 pu n tos 1 a inflación de, como máximo, los tres Estados miembros con menor inflación.

"..- *Déficit Público*. El déficit público previsto o real no podrá superar el 3% del producto interior bruto a precios de mercado; y la deuda pú blica no podrá su perar el 60% del prod uc to interior bruto a precios de mercado

f..- Estabilidad monetaria. La mo-

neda nac i onal n o deberá h aberse devaluado durante 2 años consecutivos respeta ndo pues su s márgenes normales de fluctuación en el SME.

"... Tivos de Interés. El tipo de interés no deberá superar en más de 2 puntos el de, como máx imo, los tres Est ados m iembros q ue tengan u na inflación menor.

El cumplimiento de estas condiciones marcará el fin de la 2ª Fase y el inicio de la 3ª Fase. Para que se inicie la 2ª Fase an tes del 1 de Enero de 1.999, será preciso que una mayoría de los Estados miembros cumpla con las condiciones establecidas.

¿Qué ocurrirá entonces con los Estados miembros que no cumplan dichas condiciones?

La respuesta se encuentra en el Art. 190 K del TCEE.

Los Estados miembros que no cumplan las condiciones, y aquellos otros que el Consejo decid a por mayoría, disfrutarán de una excepción, las cuales podrán ser suprimidas por el Consejo a petición del Estado miem bro que disfrute de dicha excepción.

La excepción supone que el Estado miembro beneficiario:

i) no se verá sometido a la disciplina del Consejo en cuanto al control de su déficit público. El Consejo no podrá, por ejemplo, imponer multas al Estado miembro en caso de incumplir las recomendaciones que el Consejo formule en relación con este aspecto.

ii)) no verá su política económica afectada por decisiones del SEBC.

iii) no verá sometida su facultad de emitir moneda metálica a la autorización del BCE.

iv) no se verá afectado por las decisiones de carácter obligatorio del

v) quedará excluido de los derechos y obligaciones correspondientes dentro del SEBC.

3ª Fase

La 3ª Fase es la culminación del proceso. En la 3ª Fase debería existir en Europa una Unión Económica y Monetaria.

Ya hemos visto anteriormente cuándo empezará la 3ª Fase, no más tarde del 1 de Enero de 1.999.

Véamos ahora qué ocurrirá en esta Fase:

i) Se fijará de forma i rrevocable el valor del ECU, es decir, el valor de conversión irrevocablemente fijo al cual el ECU sustituirá a las monedas nac ional es y se convert i rá en u na moneda en sentido propio.

ii) El Consejo decidirá, por mayoría

Economist & urist

cualificada, las reservas mínimas que las entidades de crédito de los Estados miembros deberán man tener en las cuentas del BCE y en los Bancos Centrales nacionales, así como los coeficie ntes má x imos admisi bles entre dichas reservas y sus bases.

iii) Se constituirá el BCE y el SEBC iniciará sus funciones de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos respecti-

H) Política Comercial Común

En esta materia, el TUE señala que las ex cepc iones que los Estados miembros deseen adoptar respecto de las decisiones comunitarias deberán ser previa mente aprobadas por la Comisión.

1) Política Social

En el ámbito de educación y formación profesional, el TUE otorga a la Comunidad competencias en diversas materias, sin que ello incluya la competencia para armonizar las legislaciones nacionales en la materia.

J) Política Cultural

La Comu n idad, señala el Art. 128 del TCEE, contribuirá al florecimiento de las cu lt u ras de los Estados miembros, dentro del respeto de su d iversidad naciona 1 y region al, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.

En este terreno, las disposiciones del TUE se refieren esencialmente a la cooperación de los Estados miembros en materias culturales.

Política San itaria Protección del Consumidor

El TCEE establece como objetivo comunitario la consecución de un alto nivel de protección de la salud humana, a cuyo efecto se prevé la coordinación de las políticas sanitarias

Igualmente se establece como objetivo comunitario la consecución de un alto nivel de protección de los consumidores. Las medidas que se adopten a nivel comunitario en esta materia siempre serán normas mínimas. Así, respeta ndo el TCEE, los Estados miembros podrán adoptar normas más estrictas de protección del consumi-

L) Política Industrial

El Art. 130 TCEE consagra la política industrial de asegu ramiento de condiciones para la competi tividad como uno de 1 os objeti vos de la comunidad

M) Política de cohesión económica v social

El Ar t. 130 B TCEE prevé la posibilidad de acciones encaminadas

social dentro de la Comunidad, prevevendo que las decisiones del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) sean adoptadas por e 1 Consejo por mayoría cualificada.

N) Política de desarrollo tecnológico Se establece que la Comunidad tiene como objetivo fomentar acciones de investigación así como la coordinación de las políticas nacionales en esta materia en busca de su coherencia.

N) Política de medio ambiente

El TUE consagra jurídicamente, en esta materia, el principio de que quien contamina paga, sobre el cual se basará la acción comunitaria de protección ambiental.

2.4. Instituciones Europeas

La Quinta Parte del TCEE está enteramente dedicada a las instituciones de la Comunidad, estableciendo normas relativas a su composición y funcionamiento.

Las modificaciones introducidas por el TUE son las siguientes:

A) Parlamento Europeo

Se prev é la posibilidad de que el Parlamento Europeo (PE) impulse la acción legislativ a de la Comunidad solicitando a la Comisión la presentación de l as propuestas oportu nas sobre cualquier asunto que a juicio del PE requiera de la elaboración de una norma comunitaria.

Se establece igualmente la posibilidad de creación de com isiones de investigación en el seno del PE siempre que lo solicite 1/4 de los miem bros del PE.

B) Comisión Europea

El nombramiento de los m iembros de la Com isión Europea se segu irá efectuando a propuesta de los gobierpartir de 1.995.

C) Tribunal de Justicia

En aquellos casos en que la Comisión demande a un Estado Miembro ante el Tribu nal de Justicia (TJCE) por incum pli m iento de l derecho comunitario, el TJCE podrá imponer a dicho Estado una sanción económica a propuesta de la Comisión.

Por otro lado, se otorgan competenc i as ju risdiccionales al TJCE para conocer de los litigios rel ativ os al cumplimiento, por los Bancos Centrales de los Estados Miembros, de las caso de incumplimiento de lo dispues- quen al Consejo de la Comunidad su a favorecer la cohesión económica y to en el TUE y en los Estatutos del intención de hacerlo.

SEBC. El TJCE, sin emba rgo, no ostentará competencia alguna respecto de los actos adoptados en ejecución de la política exterior, de seguridad y de cooperación judicial y policial en la Comunidad.

D) Toma de decisiones

El Art. 189 B TUE introduce u n nuevo mecanismo de toma de decisiones dentro de la Comu nidad, que refuerza los poderes del Parlamento Europeo, el cual queda investido con un verdadero derecho de veto en determinados casos.

2.5. Disposiciones financieras

El Art. 201 TUE consagra el principio de disciplina presupuestaria de la Comu n idad, la cual se financiará íntegramente con cargo a sus recursos propios. La Comisión, por su parte, no podrá hacer propuestas de actos comunitarios que puedan incidir en el presupuesto de forma considerable sin garan ti zar la posibil idad de financiación dentro del límite de los recursos propios de la Comunidad.

3. Otras cuestiones

3.1. Política exterior y de seguridad común

El TUE establece una política exterior y de seguridad com ún entre sus miembros con el fin de garantizar la acción combinada y convergente de los Estados miem bros en los foros internacionales.

En esta materia, el TUE establece los procedi m ientos para adoptar acciones comunes en los ámbitos de política exterior y de seguridad.

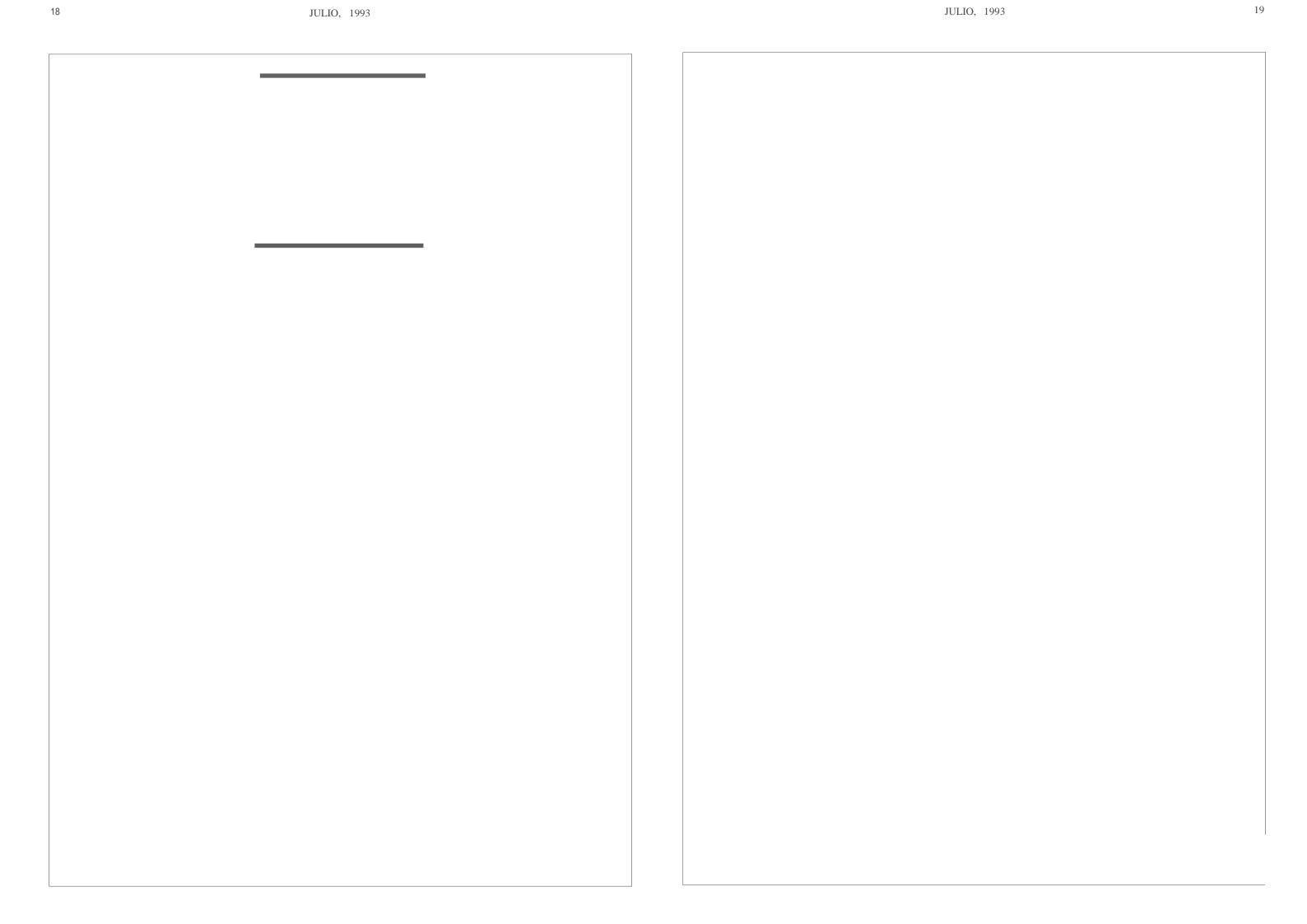
Sólo serán objeto de acciones comunes aquellas cuestiones que el Consejo decida de acuerdo con las orientaciones generales recibidas del Consenos nacionales, pero será siempre pre- jo Europeo (reunión de Jefes de Estaciso el voto de aprobación del PE a do o Gobierno celebrada semestralmente).

> 3.2. Cooperación en materia policial y judicial

El TUE incluye igualmente disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial dentro de la Comunidad, las cuales pretenden establecer u n régi men de coord inación de las políticas nacionales así como un régimen de colaboración entre las distintas administraciones.

3.3. Opting out

La facultad de "opting out" en el sentido de no pasar a la tercera fase de obligaciones derivadas del TUE y de la Unión Económica y Monetaria, se los Estatutos del SEBC. El TJCE, a reconoce en favor del Reino Unido y instancia del BCE, podrá condenar a Dinamarca, países que no estarán los Bancos Centrales nacionales en obligados al pase a menos que notifi-



Derecho Fiscal

Libros de Registro y Coeficientes de Amortización

Durante el período próximo pasado se ha reducido notablemente la producción de normas tributarias, posiblemente como consecuencia del período pre-electoral. No se puede mencionar ningu na disposición importante por sí mi sma, si bien cabe hacer referencia a dos ordenes ministeriales que desarrollando otras disposiciones anteriores son importantes por su trascendencia, nos referimos a la O.M. que regula la llevanza y diligenciado de libros registros en el I.R.P.F. de profesionales y empresarios (ver nº 19) y la O.M. por la que se aprueba la tabla de coeficientes de amortización a efectos del Impuesto de Sociedades nada, contenidas en los conceptos, (ver n° 20).

l.Impuesto sobre el Valor Añadido: Corrección de erratas de la Orden de 30 de diciem bre de 1.992 (B.O.E. del 31de diciembre) por la que se aprueban los nuevos evitar la doble imposición y prevemodelos 300, 310, 320, 330, 370, nir la evasión fiscal en materia de 308 y 309 de declaración-liquida- Impuestos sobre la Renta y Patrición del I.V.A. (B.O.E. del 3 de

Corrige diversas erratas aparecidas en la Orden que apobó los nuevos modelos del I.V.A.

2. Impuesto sobre el Valor Añadido: Resolución 2/1993, de 18 de febrero, de la Dirección General de Tribu tos. (B.O.E. del 4 de de Aduanas e Impuestos Especiamarzo).

Norma interpretativa relativa a la nistración Tributaria. (B.O.E. del aplicación del tipo impositivo del 3 por 100 en el Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con determinados productos alimenticios.

Aclara diversas cuestiones sobre la aplicación del tipo superreducido a diversos prod uctos al imentici os Intrastat), publicada en el B.O.E. de Impuesto sobre el Valor Añadido. tales como el pan, harinas, leche, 31 de diciembre. quesos, huevos, frutas, verduras y legumbres.

20

Decreto 258/1.993, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento provisional de los Impuestos Especiales de Fabricación. (B.O.E. del 6 de marzo).

Aprueba el nuevo Reglamento de los Impuestos Especiales de fabricación regulados en el título! de la Lev 38/1.992 (es decir, todos los impues- bienes entre los Estados miembros tos especiales, excepto el relativo a de la Comunidad Europea (sistema determinados medios de transporte). Instrastat), publicada en el B.O.E.

4. Impuestos especiales: Orden de 22 de febrero de 1.993. (B.O.E. de 8 de marzo).

Act ual iza l as referencias de los códigos de la nomenclatura combique se apr u eba el R eglamento definiciones y tarifas del Impuesto Especiales d e Fabricación. sobre Hidrocarburos.

5. Convenios Inter n acionales: Corrección de erratas del Convenio entre España y Austria, para monio. (B.O.E. del 10 de marzo). Corrige erratas del menc ionado Convenio Internacional suscrito con Austria el día 24 de marzo de 1.992 y publicado en el B.O.E. del día 21 de diciembre del mismo año.

11 de febrero, del Departamento les de la Agencia Estatal de Admi-16 de marzo).

Corrige y enmienda el texto de la Circular 10/1.993 de 15 de diciembre, relativa a la elaboración de las estadísticas de los intercambios de bienes entre los Estados miembros de la Comunidad Europea (sistema

intracomu n itario: Circu lar 3.Impuestos Especiales: Real 2/1.993, de 11 de febrero, del

Departam ento de Ad uanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (B.O.E. del 16 de marzo). Corrige y enmienda el texto de la Circular 10/1993 de 15 de diciembre, relativa a la elaboración de las estadísticas de los intercambios de de 31 de diciembre.

8. Impuestos Especiales: Corrección de errores del Real Decreto 258/1993, de 19 de febrero, por el provisional de los Im puestos (B.O.E. del 19 de marzo).

Corrige diversos errores apareci dos en dicho Reglamento provisional, publicado en el B.O.E. del día 6 de marzo y reseñado en el número 5 de este capítulo.

9. Cámaras de Comercio: Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (B.O.E. del 23 de marzo). Establece la nuev a regulación de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Conviene destacar, 6. Aduanas: Circular 1/1.993, de en su Capitulo III, los artículos 12 y siguientes, relativos al recurso camera) permanente.

> 10. Impuesto sobre el Valor Añadido: Orden de 16 de mar zo de 1.993. (B.O.E. del 23 de marzo). Aprueba el nuevo modelo 349, de declaración recapitulativa de operaciones intracom unitarias, derivada de las nuevas obligaciones formales establecidas en la Ley 37/1992, del

11. Impuesto sobre sociedades: 7. Estad ísticas de Convenio Orden de 16 de marzo de 1.993. (B.O.E. del 23 de marzo). Aprueba los modelos de declara-

ción del Impuesto sobre Sociedades, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciem bre de 1.992 y los modelos de pago a cuenta del ejercicio 1.993.

12. Impuesto sobre el Valor Añadido: Resolución de 4 de marzo de 1.993, de la Dirección Generala de Tributos. (B.O.E. de 1.993).

Establece los criterios de la Direcc i ón General de Tribu tos sobre diversas cuestiones relacionadas con la interpretación de los preceptos de la nueva Ley del LV.A. sobre aplicación del tipo reducido a las entregas de determinados bienes a personas con minusvalía, libros, periódicos y revistas y prod uctos y especial idades farinaceúticas y a la prestación de servicios agrícol as y culturales, así como aplicación de la exención relativa a los servicios de enseñanza.

13. Impuesto sobre el Patrimonio: Orden de 18 de marzo de 1.993 (B.O.E. de 23 de marzo). Aprueba la relación de valores negociados en Bolsa, con su valor de negociación o liquidación media correspondiente al cuarto trimestre de 1.992, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas F1sicas del año 1.992.

14. Im puesto sobre la Ren ta y sobre Sociedades: Resolución de 24 de marzo de 1.993 de la Dirección General del Tesoro y Política Fina ncier a (B.O.E. del 30 de marzo).

Establece el tipo de interés efectivo anual v igente para el segundo trimestre natural de 1.993, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.1. de la quienes realicen actividades empre-Ley 14/1.985, de Régimen Fiscal de sariales no mercantiles o actividades determinados activos financieros, empresariales en estimación objetiv álido para la calificac ión de los va mediante módulos. rendim ientos com o explíc i t os o implícitos.

15. Im p uesto sobre la Ren ta y sobre Sociedades: Real Decreto 475/1.993, de 2 de abril (B.O.E. de 6 de abril).

Mod ifica el Real Decreto 135/1993, del 29 de enero (B.O.E. del 2 de febrero), relativo a la Sociedad Estatal, para la Exposición Universal de Sevilla, Sociedad Anónim a, ampli ando sus actividades y m antenien to todos sus benefic ios fiscales.

16. Im puesto sobre la Ren ta y sobre el Patrimonio: Orden de 14 abril).

Esta orden aprueba los modelos de declaración de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio para el ejercicio 1.992, así como el lugar, formasy plazos de presentación de

sobre el Patrimonio: Corrección de errores de la Orden de 14 de abril (B.O.E. de 16 de abril), reseñad a en el nú mero an ter ior (B.O.E. de 17 de abril).

Corrige diversos errores aparecidos en la mencionada Orden, que aprueba los modelos de declarac i ón de esta campaña.

18. Contabilidad: Corrección de erratas de la Orden de 27 de enero de 1.993, pu blicada en el B.O.E. del 5 de febrero (B.O.E. DE 24 DE ABRIL).

Corrige div ersas erratas de 1 a Orden que aprobó l as n ormas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas constructo-

19. Orden de 4 de mayo de 1.993 por la que se regula la forma de Îlevan za y el diligen ciado de los

Se señalan los libros registros que han de llevar los sujetos pasivos que desarrollen activ idades empresaria-

> Las nuevas tablas de amortización recogen algunas de las sugerencias de las organizaciones empresariales

Se regu la igualmente la forma de efectuar las anotaciones en los misde abril de 1.993 (B.O.E. de 16 de mos y el procedimiento para el diligenciado.

> También se aprueban los modelos de impresos que son sustitutivos de la exhibición material de los libros para cumplir el trámite de diligen-

20. Orden de 12 de mayo de 17. Impuestos sobre la Ren ta y 1.993 por la que se aprue ba la tabla de coeficien tes anuales de amortización.

Nuevas tablas de amortización.

El Boletín Oficial del Est ado del pasado 20 de mayo publica la Orden de 12 de mayo de 1.993, que aprueba los nuevos coeficientes anuales de amortización, que serán de apli-Renta y Patrimonio a presentar en cación respecto de los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 1.993. Las tablas aprobad as incorporan determ inad as modificaci ones sobre el proyecto inicial, para recoger algunas de las sugerencias formuladas por las organizaciones empresariales a las que se sometió a información el provec-

La orden ministerial eleva los coeficientes de amorti zaciones máxi mos de forma significativ a, lo que permite acelerar la amortización de los activos en un 20 por ciento, por térm ino medio, e inc rementa l a correlación que existe entre el períolibros- regist ros en el Im puesto do mínimo de amortización (coefisobre la Ren ta de las Personas cientes máximos) y el número máxi-Físicas (B.O.E. de 6 de ma yo de mo de años en que debe q ued ar amortizado el elemento del activo (q ue determ ina la amort izac ión mínima anual obligatoria).

La estructura de las nuevas tablas les, así como los que corresponden a de amortización, que sustituyen a las que fueron aprobadas por la Orden de 23 de febrero de 1.965, se ajusta a la clasificación de los sectores económicos en el Impuesto sobre Activ idades Económ icas, y asigna a cada elemento amortizable un coeficiente máximo y un período máximo de amortización en años (y por consi guiente, u n período y coefi ciente míni mos de amort izaci ón, respectivamente).

La orden incluve, además ciertas instrucciones para aplicar los coeficientes en función de la actividad del sujeto pasivo, la calificación del activo como "elemento común" o la falta de coeficiente de amortización específico para el elemento amortizable de que se trate.

Derecho Bancario

Mª Teresa de Gispert Pastor/Sebastián Sastre Papiol

Mercado de Valores, Mercado de Deuda Pública y Entidades de Crédito

Mercado de Valores

I. Código de conducta de los agen-

1.- Disposiciones Generales

El Real Decreto 629/1.993. de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercado de v alores v reg istros obligatorios, constitu ye una medida más tendente a reforzar la transparen - cia de dichos mercados así como la protección de los inversores, objetivos ambos que conforman, con carácter fundamental, la nueva regulación de este sector en nuestro país.

Esta reciente disposición, mediante la que se establece el Código de conducta que deben observar los intervinientes en los mercados de valores, se estructura en tomo a tres Capítulos v un Anexo, que regulan su ámbito de aplicación, las normas de actuación de los profesionales de estos mercados, y por último, las relaciones que se puedan establecer entre éstos y sus

En pri mer l ugar, y por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la nueva normativa, hay que observar que, si bien ésta afecta primordialmente a las Sociedades y Agencias de Va lores, también se extiende a las Entidades de crédito y financieras y a todas aquellas personas que realicen actividades relacionadas con los mercados de valores (incluídas las actividades de asesoramiento y difusión de

La nueva normativa afecta primordialmente a **Sociedades y Agencias** de Valores, pero también aentidades de crédito y



La legislación tiende a reforzar la transparencia de los mercados y a proteger a los inversores

información).

Por lo que respecta a las <u>normas</u> de act uación a las que deben sujetarse dichos profesionales, el Real Decreto establece, por u na parte, u n cód igo general de conducta, que aparece con- tenido en el Anexo, y por otra, dispo- ne que todos los operadores económi- cos afectados deberán e l abora r u n Reglamento interno de conducta de obligado cumplimiento, que regulará la actuación de sus órganos de admin istración, empleados y representantes, y que deberá contem plar los extremos mínimos que la propia ley

Finalmente, la disciplina que regula las relaciones entre los profesionales del mercado y sus clientes contempla las siguientes cuestiones:

- a) rég imen de las órdenes sobre valores, que deberán ser claras y pre- do.
- b) registro de órdenes y operaciones; c) publicidad de las tarifas adopta-
- das por los agentes del mercado; d) operaciones que, por su difusión

e) información mínima que debe ponerse a disposición de la clientela en relación con las operaciones con-

2.- Código general de conducta.

Siguiendo las prev isiones contenidas en el Títu lo VII de la Ley del Mercado de Valores, el Anexo de la disposición que comentamos contiene el Código general de conducta que deben observar los profesionales del

En este sentido y en primer l ugar, ha y que poner de relieve que en el ejercicio de sus actividades deben respetar los principios de imparcialidad y buena fe, principios clásicos de los negocios mercantiles de gestión de negocios ajenos, y necesarios para la tutela de los intereses de los clientes y del buen funcionamiento del merca-

Deben actuar asimismo con cuidado y con la diligencia propia de un profesional del sector, disponiendo de la organización y de los medios y recurreses de los clientes queden salvaguardados.

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, tienen el deber de recabar de su s clientes tod os los datos relativ os a su persona, situ ación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. Y al propio tiempo tienen la obligación de proporcionar a su clientela toda la información que posean y que sea relevante a fines de sus decisiones de inver-

Tienen, por último, el deber de evitar los conflictos de intereses que se puedan susci tar entre sus clientes, deben gu ardar secreto de las operaciones realizadas, así como rechazar aquéllas que puedan infringir la ley o que les propongan intermediarios no autorizados.

Este Cód igo de conducta se ha lla integrado, en definitiva, por las normas que integran el estatuto general del comisionista, cualificados por las características y principios del mercado de v alores en el que inciden los profesionales que en el mismo actúan.

Mercado de Deuda Pública

11. Entidades Gestoras

Circu lar 6/1.993. de 26 de marzo, a Entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, sobre modificaciones de la Ci rcu lares

6/1.991 v 8/1.991 CE.O.E. n° 96. de 22 de abril).

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, mediante Resolución de 23 de marzo de este año, ha autorizado las operaciones de ven ta con pacto de recompra entre Entidades gestoras y terceros, respecto de saldos adquiridos temporalmente por las entidades vendedoras de aquellos valores de Deuda pú blica anotada, distin tos de las letras y pagarés del Tesoro, que ya gozaban de dicha posibilidad operativa.

Asimismo la citada Resol ución ha dispuesto que en las operaciones a plazo entre las Entidades gestoras y terceros, que de a voluntad de las partes la existencia de contratos que amparen dichas operaciones, dejando, por tanto, de ser obligatoria la previa autorización de los mismos por parte del Banco de España.

Esta n ue va normativ a ha hecho necesario modificar las Circulares 6/1.991 y 8/1.991 mediante la publicación de la Circular 6/1.993.

Deja de ser obligatoria la previa autorización del Banco de España en las operaciones a plazo entre entidades gestoras

Entidades de Crédito

y terceros

1.- Dete rminación y control de recursos propios mínimos.

En desarrollo de la legislación existente sobre recursos propios y superv isión en base consolidada de las Entidades de crédito (Ley 13/1.992, de 1 de ju ni o, Rea 1 Decreto 1.343/1.992, de 6 de noviembre, y Orden de 30 de diciembre de 1.992), el Banco de España ha publ icado la Circu lar 5/1.993. de 26 de m arzo (B.O.E. n° 84, de 8 de abril), mediante la que concluye el proceso de adaptación a las Direc ti vas comu nitarias vigentes en la materia.

A fin de fac il itar l a consu lta y el cumplim iento de esta norma tiva, la Circular ha incluído en su artículado buena parte de las disposiciones con-

tenidas en los textos reglamentarios dict ad os en desarrol lo de la Ley 13/1.992, a la vez que disciplina algunos aspectos técnicos de las mismas,

La Circular deja, no obstante, para un ulterior desarrollo las normas de solvencia relativas a la cobertura de los riesgos de mercado y ciertas limitaciones a los grandes riesgos, cuya entrada en vigor no se prevé hasta el 1 de enero de 1.994, conforme el Real Decreto 1.343/1.992.

2.- Normas de contabilidad.

Debido a las exigencias de adpatación a las Directivas comunitarias, ha sido necesario modificar las normas de contabilidad de las Entidades de crédito contenidas en la Circular del Banco de España 4/1.991. Esta modificación se ha llevado a cabo mediante la Circular 4/1.993. de 26 de marzo (E.O.E nº 84, de 8 de abril), que regula las revalorizaciones contables, especialmente las que puedan surgir en los procesos de fusión de esta clase de Entidades.

Por otra parte, las normas comunitarias sobre supervisión consolidada exigen la integración proporcional de las "entidades multigrupo". Se revisa el envío de datos sobre Empresas del grupo o relacionad as con él; se resuelve una asimetría existente en la contabilización de las diferencias de cambio en consolidación; se regula la contabilización de las cesiones temporales que puedan convenirse a precios inferiores a los de mercado; y

finalmente, se adapta la sectorización por actividades a lo dispuesto en el Real Decreto 1.560/1.992, de 18 de diciembre, sobre actividades econó-



sos adecuados para el ejercicio de sus actividades, de tal modo que los inteLos profesionales de las Sociedades y Agencias de Valores ya poseen un código de conducta

JULIO, 1993

23

Nueva directiva europea para la protección del consumidor

Un intento de acabar con la imposición de cláusulas abusivas en los contratos

I. Novedades Legislativas

- I. Protección del consumidor. Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con con-
- 2. Protección del consumidor. Resolución sobre futuras medidas de etiquetado de productos para la protección del consumidor.
- 3. Mercado interior. Reglamento sobre evaluación y control de las sustancias existentes.
- 4. Mercado interior. Reglamento relativo a las unidades estadísticas de observación y de análisis del sistema de producción en la Comunidad.
- 5. Mercado interior. Directiva relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles.

11. Novedades Jurisprudenciales

6. Ayudas del Estado. Sentencia en materia de ayudas de estado y política social.

- 7. Competencia. Rechazado el recurso de la empresa Peugeot contra la Comisión en el caso "Ecosystem" que refuerza la posición de los importadores de coches para-
- 8. Competencia. Sentenci a en los casos conjuntos "Pastas de papel", relativos a supuestas practicas concertadas entre empresas en países terceros reguladoras de los precios de venta de los compradores establecidos en la Comunidad.
- 9. Política de pesca. Sentencia en relación a una ayuda financiera comunitaria para la construcción de un nuevo buque atunero congelador.

1. Novedades Legislativas

Di- rectiva 93/13/CEE del Conse jo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusu las abusivas en los contratos celebrados con cons umidores (D.O.C.E .L. de 21.4.93).

La Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con l os consu m idores, supone una respuesta de la Com uni dad a la demanda social y a la exigencia moral de someter a un control más riguroso las disposiciones incorporadas a las condiciones generales de la contratación que, con frecuencia, consagran u n repa rto de obligaciones su contenido, aludiendo en particular poco equitativo para el adherente.

Esta Directiva se aplica a todos los contratos celebrados entre un profesional y u n consu midor, quedando le incumbirá la carga de la prueba. excluidos de la misma los contratos de trabajo, así como los relativos a los derechos de sucesión, estatuto familiar, constitución y estatutos de sociedades. Igualmente, las cláusulas conimperati vas, así como las disposi-

ciones o principios de los convenios internacionales en los que los Estados no están sometidos a las disposiciones de la Directiva.

La Directiva entiende por "cláusulas abusivas" las cláusulas contractuales suyas. que, no habiéndose negociado de forma individual, entren en contradicción con las exigencias de buena fe originando en detrimento del consuentre los derechos y obligaciones de más favorable al consumidor. las partes derivados del contrato.

ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el a los contratos de adhesión. Al profe-

La Directiva incluye en Anexo una lista de cláusulas abusivas. Se trata de una enumeración "numerus apertus" que describe sin carácter exhaustivo algunas cláusulas abusivas. Así, por

consumidor que no cumpla con su s obligaciones el pago de indemnizacio-I. Protección del consumidor. miembros o la Comunidad son parte, nes desproporcionadas; tampoco se podrá obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones cuando el profesional no haya cumplido con las

La Directiva impone la obligación de redactar las cláusulas contractuales de forma clara v com prensi ble. En caso de duda sobre el sentido de una m idor u n deseq u i librio importante cláusula, prevalecerá la interpretación

El artículo 6.1 de la Directiva esta-Se considera que una cláusula no se blece que no vincularán al consumi dor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y consumidor no haya podido influir en un profesional. En este caso, la Directiva se decanta por el "favor contracti", disponiendo que el contrato seguisional que mantenga que una cláusula rá siendo válido para las partes en los tipo se ha negociado individualmente, mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusu las abusivas. Las personas y organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, podrán acudir a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que éstos tractuales que reflejen disposiciones ejemplo, queda prohibido imponer al determ inen si ciertas cláusulas con-

Economist & urist

tractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de tales cláusulas.

Los Estados miembros, que podrán establecer o man tener normas más estrictas con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección, adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1994. Las disposiciones adoptadas se aplicarán a todos los contratos celebrados después de esa

En el derecho español se alude a las cláusulas abusivas en el artículo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LCU). El artículo 10.4 establece la nulidad de las cláusulas abusivas, además, cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa de las posiciones de las partes, éstas serán ineficaces.

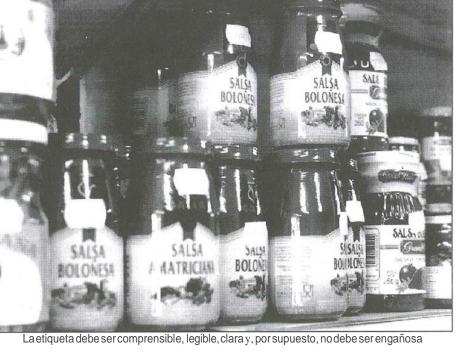
Existe, además, un anteproyecto de Ley de condiciones generales de contratación cuya vocación es proteger de las cláusulas abusivas tanto a consuhasta ahora no se veían amparadas por la normativa sobre defensa de los consumidores. Así, esta normativa ofrece una protección más amplia que la dis-

pensada por la Directiva que sólo califica como consumidor a las personas

2. Protección del consumidor. Resolución del Consejo sobre futuras medidas de etiquetado de productos para la protección del consu midor. (D.O.C.E. C 110 de 20.04.93)

Actualmente, la normativa comunitaria regul a el etiquetado de una manera parcial y referida a productos concretos, como los alimenticios, los preparados pelig rosos y el tabaco, mientras que para otros los requisitos de etiquetado resultan insuficientes o inexistentes. Dentro de la política de protección del medioambiente y del consumidor, se adoptó el año pasado un Reglamento sobre la concesión de la etiqueta ecológica que viene a completar el panorama legislativo, pero laciones nacionales puede acarrear que sigue teniendo u na aplicación muv limitada.

Ante esta situación el Consejo ha decidido invitar a la Comisión a que, en consulta con los Estados miembros y con las partes interesadas (organizaciones de consumidores, de la indus-



tria y del comercio), examine la necesidad y las ventajas de una solución a escala comunitaria y a que, sobre esta base, estudie la posibilidad de establecer un marco comunitario para requisitos en materia de etiquetado. Asimidores como a empresas, las cuales mismo, el Consejo invita a la Comisión a que presente propuestas adecuadas, a más tardar antes de junio del

La Resolución incluye en Anexo una

lista de todas las cuestiones que deberá abordar la Comisión. Así, fija los requisitos para que el etiquetado sea correcto y cumpla su misión de información para el consumidor. En primer lugar, la etiqueta debe ser comprensible, legible y clara. También ha de ser pertinente, entendiendo como tal, no ser engañosa. Por último, se exige que la etiqueta sea transparente, verificable, es decir, sometida a supervisión adecuada con arreglo a la normativa o a la práctica nacional, y v iable, de manera que sea fácil de aplicar por parte de los fabricantes, detallistas y entender los elementos químicos y sus servicios de control.

La Resol ución insta a establecer medidas en los ámbitos de la transparencia y la información, con vistas a una mayor armonización del etiquetado, que resultan sumamente necesarias, ya que la disparidad de las legisobstácu los para el comercio en la Comunidad y, por consiguiente impedir el funcionamien to del mercado

(CEE) nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993. sobre evaluación

de las sustancias y control existentes. (D.0.C.E. L 84 de 05.04.93)

El Consejo aprobó un Reglamento que pretende aminorar la diferente cobertura legislativa de aplicación en los Estados miembros en materia de evaluación y control del riesgo que presentan las sustancias existentes, en vigor o en preparación, circunstancia susceptible de oponer trabas al comercio en el interior de la Comunidad Europea, y de crear condiciones desiguales de competencia.

Este Reglamen to persigue una mayor eficacia y economía en la protección de personas, incluidos los trabaj adores y los consumidores, y del medio ambiente, por medio del establecimiento de la necesariedad de una evaluación sistemática a nivel comunitario de los riesgos que presentan las "sustancias existentes"

Por "sustancia existente" hemos de compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que inevitablemente produzca el procedimiento, y que figuran en el "inventario europeo de las sustancias existentes" (EINICS).

No cabe duda que un Reglamento es el instrumento jurídico más idóneo, pues supone la imposición de forma directa al destinatario (productores, importadores) de obligaciones preci-3. Mercado interior. Reglamento sas, que han de ser cumplidas al mismo tiempo y de forma idéntica en todo el territorio comunitario.

El presente Reglamento se aplica a la recogida, difusión y acceso a la información sobre las sustancias existentes, así como a la evaluación del riesgo de las sustancias existentes para las personas, incluidos los trabajadores y los consumidores, y para el medio ambiente, con el fin de poder gestionar mejor dichos riesgos en el marco de las disposiciones comunitarias.

Dos consideraciones merecen especial atención. Por un lado, se dispone que conviene establecer unos principios de evaluación del riesgo a nivel comunitario. Por otro lado, se entiendisposición jurídica no es óbice para que resulte de aplicación la legislación comunitaria sobre protección de los trabajadores y de los consumido-

4. Mercado Interior. Reglamento 696/93 del Conse jo. de 15 de marzo de 1993, relativo a las unidades estadísticas observación y de análisis del sistema de prod ucción en la Comunidad. CD.O.e.E. L 76. de

Este Reglamento tiene como objetivo posibilitar el que las empresas, las instituciones financieras, las administraciones y todos los demás agentes económicos del mercado interior dispongan de datos fidedignos y comparables. Esos datos son importantes para las empresas porque les permiten evaluar su nivel de competitividad, v son útiles para las instituciones comunitarias para prevenir cualquier distorsión de la competencia.

El Reglamento define una serie de unidades estadísticas del sistema de producción como "empresa", "unidad institucional", "grupo de empresas", siciones de la Directiva. Además, los etc,..., a partir de diversos criterios, explosivos deben ser conformes a las jurídico, contable o de organización, geográfico, o de actividad,

Dichas definiciones de u nidades estadísticas del sistema de producción se utilizarán por los Estados miembros y la Comisión para identificar las dos miembros están facultados para unidades con la intención de recoger, adoptar medidas provisionales que cuestiones prejudicial es planteadas transmiti r, pu bli car y analizar I as pueden dar lugar, incluso, a la retirada por el "Arbeitsgeri cht" de Bremen informaciones estadísticas sobre el sistema de producción.

5. Mercado Interior. Directiva del Conse jo . relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles. CD.O.C.E. L 121 de

Diversas disposiciones adoptadas van completando el marco iurídico del mercado interior previsto para 1993

15.05.93)

El objetivo principal de la presente Directiva es alcanzar una armonizade que lo que viene recogido en esta ción de las legislaciones relativas a la puesta en el mercado de los explosivos. Para ello, establece las condiciones necesarias para el reconocimiento de las homologaciones de comercialización de explosivos concedidas en

> En virtud del artículo 1 se entiende por explosivos las materias y objetos que figuran en las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas. En consecuencia, la Directiva no se aplicará a los explosivos, incluidas municiones, destinadas al uso de las fuerzas armadas o de la policía, a los artículos pirotécnicos y a las municiones (con algunas excepciones detalladas en el articulado).

Asimismo, la Directiva establece en el anexo I los requisitos que deben cumplir los explosi vos antes de su comercialización. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de tales requisitos y no podrán prohibir, restringir o obstaculizar la puesta en el mercado de aquellos que se ajusten a las disponormas nacionales que les afecten y jeros sin domicilio ni residencia fija que traspongan las normas armoniza- en la República Federal de Alemania das. Solamente en el caso de que un explosivo pueda suponer un peligro ción menos favorables que las de los para la seguridad nacional, los Esta- marineros alemanes. prohibición de libre circulación.

introduce como novedad la regulación nal de Justicia de las Comunidades en sus anexos de una serie de procedi- Europeas que se pronunciara sobre la mientos de declaración de conformi- compatibilidad con el sistema eurodad de los explosivos que deben ser peo de ayudas de estado y política

aplicados por los organismos que cada Estado miembro designe. Una vez realizada la declaración, se procederá al marcado CE de conformidad, fijándolo sobre el explosivo de manera fácilmente legible.

Respecto a los controles para transferencias de explosivos, estos no se realizarán en concepto de controles fronterizos interiores, sino únicamente en el marco de los controles normales aplicados de forma no discriminatoria en todo el territorio de la Comunidad. El destinatario deberá obtener una autorización de transferencia de la autoridad competente del lugar de destino y al mismo tiempo se le exigirá que esté facultado para la adquisición, es decir que posea todas 1 as licencias y autorizaciones necesarias. Los controles de las fronteras exteriores de la Comunidad no se verán afectados por la presente Directiva y hay que hacer hincapié en la necesidad los distintos Estados miembros, así crucial de que los Estados miembros como las condiciones de su transpor- mantengan unos controles efectivos sobre los explosivos destinados a atravesar dichas fronteras.

En cuanto a la entrada en vigor de la presente Directiva, está previsto un periodo dividido en dos fases, durante el cual los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones necesarias para dar cumpli miento a todos los artículos de la Norma v aplicarán dichas disposiciones a partir de 1 de enero de 1995. No obstante, se admitirá para un periodo que concluye a finales del año 2002, la puesta en el mercado de los explosivos conformes a las normativas nacionales vigentes el 31 de diciembre de 1994.

11. Novedades Jurisprudenciales

6. Ayudas de Estado. Sentencia en materia de ayudas de estado v política social.

Sentencia del TJCE de 17 de marzo de 1993. Empleo de marineros extranen condiciones de trabajo y de retribu-

Esta sentencia da respuesta a dos del mercad o del explosivo o a la (RFA), en virtud del artículo 177 del Tratado de Roma.

Es de destacar, que esta Directiva El Tribunal alemán solicitó al Tribu-

Economist & urist

social de un precepto de una Ley alemana. Esta disposición establece un registro complementario de buques para aquellos que naveguen bajo pabellón alemán en el tráfico internacional, que permite excluir de los convenios colectivos alemanes a aquellos marineros que carezcan de domicilio habitual o residencia en la República Federal de Alemania, de tal manera que pueden ser contratados por un "salario del país de origen" de menor importe y en peores condiciones laborales que los marineros alemanes que realizan un trabajo semejante.

El Tribunal de Luxemburgo ha estimado que la existencia de un régimen sociedad de distribución Carrefour, ha de remuneración sensiblemente inferior para los marineros de origen no equívoco dejando creer que Ecosys comunitario, que no tengan su domicilio o residencia fija en territorio comunitario, no constituve avuda de estado a efectos del artículo 92 del Tratado CEE, y no viola tampoco las disposiciones comunitarias de política

7. Com petencia. <u>Sentencia en el</u> recurso de la empresa Peugeot contra la Comisión en el caso "Ecosystem" que refuerza la posición de los importadores de coches paralelos.

El Tribunal de Primera Instancia ha rechazado el recurso de la empresa Peugeot contra la Com isión en el asunto "Ecosystem". La Comisión había estimado que una circular dirigida por Peugeot a sus concesionarios en Francia, Bélgica y Luxemburgo con el fin de dejar de entregar vehículos al importador paralelo francés "Ecosystem" constituía una práctica concertada prohi bida por las reglas comunitarias de competencia.

La sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas declara que Ecosystem nunca se excedió en sus poderes de mandatario que se reconocen en el Reglamento (CEE) nº 123/85, (relativ o a la aplicac ión del artículo 85, párrafo 3 del Tratado CEE a las categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y post venta de vehículos automóviles, D.O.C.E. L 15, de 18.01.85), al no haber ejercido "una actividad equivalente a la reventa", actividad prohibida a los intermediarios de automóviles, de acuerdo con la postura de la Comisión recogida en una comunicación de la misma fecha que el Reglamento.

El Tribunal insiste sobre el hecho de que Ecosystem puede, en el marco de

cliente durante algunos días, el tiempo que tarde en entregar el vehículo al cliente. Y además, añade que "la situación de Ecosystem no se distingue de cualquier otro mandatario que se obliga, por contrato, a efectuar los gastos que posteriormente el mandante le reembolsará, como así lo prevén la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros."

La sentencia señala que en la práctica, Ecosystem no se ha excedido en los límites de los mandatos escritos que le habían sido confiados, incluso si la portada de un folleto publicitario, editado bajo su propio nombre por la pod ido provocar en el público un tem hacia un reventa, actividad prohibida a los intermediarios de automó-

Recordar finalmente que el Tribunal en esta sentencia ratifica e incluso amplía los pri ncipios recogidos en u na Clarificación de la Comis ión sobre la actividad de los intermediarios de automóviles, que fue publicada el 18 de diciembre de 1991 con motivo precisamente de la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre en este asunto.

8. Competencia. <u>Sentencia en los</u> asuntos acum u lados "Pastas de papel".

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 31 de marzo de 1993 relativa a supuestas prácticas concertadas entre empresas en países terceros reguladoras de los precios de venta a los compradores establecidos en la Comunidad.

El Tribunal de Luxemburgo ha anulado las multas que la Comisión Europea había impuesto a los fabricantes de pasta de papel finlandeses, americanos y canadienses (unos cuarenta en total) por una práctica concertada en materia de precios en el período comprendido entre 1975 y 1981.

El Tribunal ha mantenido, sin embargo, la multa de 50.000 Ecus impuesta a la Sociedad finlandesa Fincell, en virtud de su "papel preponderante" en este acuerdo. A cuatro empresas canadienses las multas han sido red ucidas a 20.000 Ecus cada un a: La Canadian Products Ltd. 1 a MacMillan Bloedel, la St Anne-Nac kawick, y la Westar Timber.

Es preciso recordar que en una pride 1988 en este mismo asunto, el Trisu mandato, adelantar el dinero a su bunal había declarado que las reglas

europeas de competencia (artículo 85 del Tratado CEE) se aplican igualmente a los acuerdos que hubieran tenido lugar fuera de la CEE. El TJCE estableció que en materia de represión de acuerdos restrictivos de la competencia, lo determinante es el lugar en el que se ponen en práctica o ejecutan, y no el lugar donde se forman.

9. Política de Pesca. <u>Sentencia en</u> un asunto relativo a una ayuda financiera comunitaria para la construcción de un nuevo buque atunero congela-

Sentencia de 1 de abril de 1993 del TJCE en el asunto seguido por Pesqueras Echebastar, S.A. contra la Comisión de las Comunidades Euro-

Se solicitaba por la empresa española que el Tribunal declarase que la Comisión había violado el Tratado CEE al no dirigir a la demandante un pronunciamiento sobre la concesión de una avuda financiera comunitaria para la construcción de u n nuevo buque atunero congelador, en base al Reglamen to de estruct uras nº

El problema radicaba en saber si la Comisión había comunicado, dentro del plazo legal, su negativa a la ayuda financiera comunitaria porque "la partida del presupuesto disponible en 1989 para la financiación de proyectos era insuficiente". Pesqueras Echebastar, S.A. estimó que el plazo de dos meses posteriores al requerimiento previo exigido para presentar un recurso en carencia había transcurrido y, por lo tanto, la Comisión había omitido pronunciarse en los plazos legales.

El Tribunal rechazó los argumentos de Pesqueras Echebastar, S.A. indicando que el recurso de carencia se refiere a la omisión por abstenerse de pronunciarse o de definir su posición y no a la adopción de un acto distinto del que los interesados hubieren deseado o estimado necesario.

En conclusión, se debe estar muy atento al seguimiento que se hace de los expedientes de ayuda ante la institución comunitaria, para que justifique de forma motivada su negativa a conceder una ayuda y, sobre todo, a comunicar esa negativa en los plazos exigidos por la normativa.

Si no se procede de esta forma, nos podemos encontrar con que el Tribumera sentencia de 27 de septiembre nal desestime nuestro recurso de carencia e incluso nos condene en

JULIO, 1993

27

Derecho Constitucional

Miguel Montero Puerto

Articulación de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas

l. Legislación

I.Nota previa.

El precedente número de la Revista Economist & Jurist ponía de manifiesto la paralización de la actividad legislativa del Estado debida a la disolución de las Cortes Generales. Como es lógico v así se advertía en dicho nú mero, el habi t u al comen tario de Textos legales de recien te factura, queda interru mpido en tanto no se constituyan nuevas Cortes Generales v se reanude su actividad normativa.

Sin embargo, ha parecido conveniente aprovechar este margen temporal para introd ucir comentari os en orden a leves de l as Com u nid ades Au tónomas que puedan entrañar aspectos de los que, de ordinario, se contemplan aquí, como se hace en esta ocasión tomando un tanto al azar dos Leyes, en concreto, de las Cortes blemas recientes.

11. Ley 3/1993, de 15 de marzo, de administrados. modificación de la Ley 3/1984, del Presidente, de la Diputación General y de la Ad minist ración de la Ley 30/1992, se destaca la mecánica Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.E. n° 96, de 22 de abril de 1993.

1.- El punto de partida, y razón de ser de la norma, se encuadra, como pone de manifiesto en su Preámbulopor cierto extenso, detallado y concreto, cosa de no frecuente uso en la actualidad, aún cuando si bien deseable- en la pu blicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento riores "frente a cuyas resoluciones Administrativo Común.

El Texto Legal estatal, incide directamente en las normas propias de la Comunidad Autónoma que hasta ese momento tenían asiento en "los preceptos que operaban desde el punto de vista material como bases, y que ahora resultan ser derogados" y es esta incidencia la que aconseja a la C.A.A. a replantearse su propia normativa. Para ello siempre según el

Preámbulo- y ante el vacío normativo Administrativo de 1.958 y el amplio optar por una técnica de "interpretación jurídica" o por la "sustitución normativa".

Se rechaza la primera de las técnicas en cuestión desde el momento en que, en efecto, siendo la más sencilla, podía conducir, sin embargo a un cierto "grado de inseguridad" así como a dificultades para el devenir diario de la Administración, máxime cuando, según se pone de manifiesto "el cambio normativo de las bases estatales es bastante profundo".

En su virtud, se opta, no obstante sus dificultades por la "propia innovación norm ativ a". A hora bien en dicha "innovación, no solamente se tiende a un ajuste de la normativa propia a la legislación "básica", sino que, en cierta forma, se opera una atenuación de posiciones que derivadas de la Ley de Aragón por cuanto afectan a pro- 30/1992, pueden conllevar perjuicios tanto a la Administración como a los

2.- De entre los aspectos que busca, partida un aspecto fáctico: el incrematizar consecuencias derivadas de la seguida por la legislación innovadora de la CAA para superar la desaparición de concretos recursos -el recurso previo de reposición al contenciosoadministrativo, que ha dejado de ser obligatorio en muchos casos- permitiendo una "reconsideración" de los actos administrativos mediante proceso de "desconcentración administrativa" -concretamente en materia sancionadora - en favor de órganos infecabrá recurso ordinario ante el órgano jerárq uico superior", sin coste, por tanto, alguno, para el interesado. Se pretende conectar la actuación administrativa con "la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos".

Precisamente, en el ámbito del procedimiento "sancionador" - térm i no que utiliza la Ley en cuestión, - y ante las dudas y dificultades que la derogación de la vieja Ley de Procedimiento

que se estaba produciendo, había que abanico de normas atinen tes a t al materia, la Ley de la CAA opta por introducir, con carácter temporal, a través de la Disposición Transitoria Segunda un "Régimen Ju rídico del procedimiento sanci onatori o", de aplicación en todos aquellos casos en los que las leves respectivas no contengan un propio procedimiento de tal naturaleza. El criterio parece oportuno y sería de desear que, al mismo tiempo se uti l izara para config urar procedimientos sancionadores unitarios, como tantas veces hemos pro-

111.- Lev 5/1993, de 29 de marzo, por la que se establece el régimen de inspección y procedimien to en materia de disciplina turística de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.E n° 107 de 5 de mayo de 1993.

1.- La Ley 5/1993, viene a tratar ex novo la materia, hasta el momento no específicamente regulada en la CAA, y para ello toma como elemento de men to turístico de la región; y otro jurídico: tanto las competencias exclusivas asignadas en la materia por su Estatuto de Autonomía, como las previsiones de los artículos 25.1 de la Constitución y los de la Ley estatal 30/1992 en cuanto han fijado los principios que deben informar el derecho administrativo sancionador. "La presente Lev- se afirma en el Preámbulose inspira en los mismos, estableciendo un importante régimen garantista". 2.- No se pretende aquí llevar a cabo una exégesis del texto legal de la CAA en la materia, sino única y exclusivamente destacar que, en esta ocasión, no obstante la remisión a los

preceptos de la Constitución como de la Ley 30/1992, se va más allá en algunos casos introduciend o tratamientos que pueden ser discutibles si a la última Ley la CAA le reconoce el carácter de básica, como se desprende de las dos normas legales que aquí han sido traídas a comentario.

Particularmente conviene detenerse atentan peligrosamente a la realidad en el art. 13 de la Ley 5/1993. CAA. regu l ador de la Prescri pción de la ción de las sanciones - puesto que tras a las muy graves -un año-. señal ar los plazos de prescri pción ves, en el nº 4 fija el plazo de caducidad de los expedientes sancionadores -tres meses- terminando por afirmar. en el inciso último, que "La caducidad del expediente supondrá la prescripción de la infracción".

Sabido es que, la Ley 30/1992, artículo 92, regula cuanto atañe a la caducidad de los expedientes - Títu lo VI, en el que se contienen las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, sin que al tratarse del procedi miento sancionador se incluya salvedad o matiz alguno acerca del aspecto que ahora se comenta. Pues bien, entre las normas relativas a "caducidad" en el art. 92.3, se determina que la caducidad, por sí sola no prod ucirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, si bien los procedimientos caducados no i n terru m pen el plazo de prescripción, que continúa corriendo. dejando, sin embargo, a las autorida-Es decir, que, en materia sancionadora, por ejemplo, l a cadu cidad no y de los medios". impedirá persegu ir la infracción, si El tratado sobre la U n ión Eu ropea bien habrá de operarse por medio pro- (T.U.E.) suscrito en Maastricht el 7 de cedimental d istin to del cad uco; en febrero de 1.992, si bien modifica el todo caso, el plazo de prescripci ón art. 189 del T.C.E.E. no afecta al conresultará afectado por el tiempo que cepto de "Directiva" que mantiene en duró el expediente cuya caducidad se ha producido. Es más, en el nQ 43 del propio art 92, se excluye de posibilidad de caducidad "en el supuesto de y llevado a cabo sus comentarios coque l a cuest i ón suscitada af ecte al interés general, o fuera conveniente suscitarla para su definición v esclarecimiento". Obviamente la caducidad no es un instrumento que pueda quedar en manos de la falta de diligencia de la Administración, de sus órganos al cumplimiento de una determinada o funcionarios.

3.- Sin embargo, dados los términos de la Ley 5/1993 de la CAA, aquí las cosas van a operar de modo radicalmente opuesto a lo establecido en la Ley 30/Q992, tratamiento no solo discutible, sino incluso netamente perjudicial para los intereses generales a que debe atender la Admin istración insoslavablemente, por imperativo del art. 103.1 de la Constitución. La caducidad, -tres meses - podrá servir como vehícul o exculpatorio, en su integridad, respecto de las infracciones leves que prescriben a los tres meses, pero STC-de carácter general, así como de

sancionadora en orden a la prescripción de las infracciones graves -seis infracción - se olvida de la prescrip- meses- y en mucha mayor intensidad

El tratam ien to de la norma de la aplicables según el grado, dos meses, CAA no parece correcto, desde el plaseis meses y un año, según se trate de no normativo y constitucional, y no infracciones leves, graves o muy gra- es difícil anticipar que será la propia Administración de la Comunidad la ración de quiebra o a probar que poseque propugnará su modificación.

11. Jurisprudencia

"DIRECTRICES COMUNITARIAS" Y DISTRIBUCION COMPETENCIAL DE DESARROLLO YEJECUCION ENTRE ESTADO Y COMUNIDADES AUTONOMAS.

Sentencia del Tribunal Constitucional-Pleno- 80/ 1993, de 8 de marzo. B.O.E n° 90/ 1993, de 15 de abril. 1.- Antecedentes.

1.- El tratado constitutivo de la C.E.E. - art. 189 - en su párrafo tercero dispone que, y entre otras fuentes normativas:

"La directiv a obligará a 1 Estado miem bro destin atario en cuanto al resultado que debe con segu irse. des nacionales la elección de la forma

su integridad.

2 .- En v arias ocas iones han sido aportadas citas de Sentencias del TC, rrespondien tes en torno a eficacia, ejecución y otros aspectos de los Tratados Comunitarios y de su derecho de desarrollo. Hov. la STC referida ofrece la oportunidad de insistir en dichos temas y en concreto en orden "Directiva" del Consejo de la C.E.E. relativa a facilitar el establecimiento y libre prestación de servicios en los diferentes Estados miembros, en cumplimiento de la cual el Estado Español dicta los RR.DD. 1.063/1986, de 9 de mayo y 2225 / 1986, de 3 de octubre, modificativo éste del anterior y que se promulga incluso con posterioridad al momento en que se plantea conflicto positivo de competencia en los términos que seguidamente se relatan.

Un amplio abanico de "Directivas" que se relacionan en el FJ. I. de la

índole especial por razón de la materia, disponían que los nacionales de un Estado miembro que deseen ejercer tales actividades en el territorio de otro Estado miembro, en el caso de que estuvieran obligados a probar en ese Estado, según se trata de unas u otras actividades, su honorabilidad v el no haber sido objeto de una declaen una cualificación req uerida para ejercerla, podrán acreditarlo mediante la presentación de determinados documentos y certificados que expedidos por las autoridades y organismos competentes del Estado miembro de origen o procedencia del interesado, las propias Directivas especifican.

Las "directiv as" en cuest ión, por otra parte, obligan a los Estados miembros a comunicar a los demás Estados miembros y a la Comisión de las Comun idades Europeas la designación de las autoridades u organismos nacionales que expedirán dichos documentos y certificaciones.

En desarrollo de tales normas, el Estado español, por v irtud del R.D. 1.063/1986, designó a la Dirección General de Comercio Interior de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Hacienda, como organismo competente para la expedición de documentos y certificados en cuestión, señalando, al propio tiempo, qué tipos de documentos serían los que deberían obtenerse y aportar el interesado.

Promovido conflicto competencia! frente a dicha norma, el R.O. 2.225 / 1986, añadió un precepto, con modificación del art. 4 del citado anteriormente, estableciéndose que tratándose de documentos o certificaciones que por razón de materia deben ser acreditadas por las Comunidades Autónomas, la Dirección General del Comercio Interior recabará de los órganos competentes de aquéllas, su remisión antes de proceder a la expedición de los certificados. Se abría paso hasta un cierto nivel a la competencia de las Comunidades Autónomas, si bien la expedición de los documentos y certificaciones con eficacia en el ámbito de la CEE continuaba correspondiendo a los órganos Estatales.

- 11.- Planteamiento de conflictos positivos de competencia. Sus tér-
- 1.- Contra dicho RR.DD, inicialmen te re specto del pri mero y por extensión después en orden al segundo, reaccionan tanto el Consejo Ejecutivo de la Geralidad de Cataluña, en

2 de octubre de 1986, como el Gobierno Vasco, en 13 de marzo de 1987. procedimientos que en su momento do las disposiciones de los Tratados o son acumulados, para fina l izar en demás normas comunitarias recono-STC 80/1993.

El planteamiento de ambos conflictos, con su posterior extensión al segundo de los RR.DD, es sustancialexpedir finalmente dichos documentos y certificados y aun para designar las autoridades que hayan de expedirlos, pues por razón de su contenido, a juicio de qu ienes instan el proceso constitucional, esa actividad certificante debe reconducirse a la materia de <u>comercio interior</u>, que en una y otra de las Comunidades Autónomas recurrentes les corresponde en virtud de competencias asumidas en v irtud de sus respectivos Estatutos.

2.- La respuesta del Abogado del Estado se centra, sustancialmente, en la idea de que la competencia estata l viene deducida del hecho de tratarse de materia a enmarcar en el contexto de relaciones interestatales que postulan u ofrecen un aspecto básico relativo al principio de unidad de los Tratados, que exige la intervención estatal, modulando el contenido de las competencias de las CC.AA.

111.- Posición y argu men tos del Tribunal Constitucional.

1.- La STC - FJ.3. - comienza rechazando la alegación básica del Abogado del Estado afirmando que la competencia en orden al tema debatido no puede encontrar cobertura en el título por el que al Estado se le reconoce la competencia exclusiva en la materia de relaciones internacionales - art. 149.1.3. CE - A tal efecto, señala "notorio es - así lo venimos advirtiendo desde la STC 125/ 1984 - que la dimensión exterior de un asunto no puede servir para realizar una interpretación extensiva del art. 149.13. CE que venga a subsumir en la competencia estatal toda medida dotada ción de competencias entre de distri- cio tenga competencia prevalente el bución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (en la misma línea SSTC 153/1989, 54/1990, 76/1991 v 100/1991)".

A mayor abundamiento, v con asiento en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entiende ha quedado consagrada doc- tri na según la cual el principio de

autonom ía insti tucional v procedimental conduce a entender que cuanla aplicación del Derecho Comu ser confiadas por los Estados miembros a determinados órganos internos, depende únicamente del sistema constitucional de cada Estado miembro.

Por ello, va a concluir que, partiendo de nuestro ordenamiento constitucional "La competencia corresponderá ... a quien por razón de la materia y del contenido de dichos documentos, el orden interno de distribución de competencias, venga a atribuírsela". 2.- Al propio tiempo "tampoco pue-

de reconocerse que corresponde al Es-

tado, por razón de lo dispuesto en el art. 149.1.3 CE "la competencia para designar a las autoridades y órganos que habrá de expedir los documentos acreditativos de los extremos a que se refieren las Directivas Comunitarias. La ordenación general de la economía no legitima que sea un órgano estatal el que expida de manera centralizada esas certificaciones, ni siquiera que sea el Estado el que deba designar siempre y en todo caso, las autoridades u órganos que deban expedirlas. La expedición de los documentos en cuestión "se configura como una activid ad pública certificante que entronca directamente con la materia de comercio interior y que no supone, por ello mismo, quedar al margen de las competencias que, en relación a dicha materia han asumido las Comunidades de Cataluña y del País Vasco" por lo que, "es obligado admitir que en las Comunidades con competencia en la referida materia o en su caso a los órganos o autoridades que ellas designen debe corresponderles esa acreditación de la forma y manera en de una cierta incidencia exterior por que se ha desarrollado la actividad remota que sea, ya que si así fuera se comercial o de prestación de servicios produciría una reordenación del pro- en sus ámbitos territoriales, salvo pio orden consti tucional de distribu- aquellos productos sobre cuyo comer-

> Por todo ello, será a las Comunidades Autónomas que tengan competencias asumidas en la materia y en concreto a las dos que instaron el conflicto, a las que corresponde la actividad certificante en cuestión, con lo que las prev isiones del inicial R.D. 1.063 /1986 no son de aplicación a las Co-

Estado".

munidades Autónomas mencionadas.

3.-La incidencia del R.D. 2.225 / 1986, si bien matiza la materia, en cen poderes a los Estados miembros o cuanto competencia para emitir los les imponen obligaciones en orden a documentos y certificaciones requeridos desde el punto en que reserva en nitario, la cuestión de saber de qué favor del Estado la competencia para mente básico, consistente -FJ.2.- en forma el ejercicio de esos poderes y la expedir, finalmente, los documentos y cuestionar la competencia estatal para ejecución de las obligaciones pueden certificaciones que deban prod ucir efectos ante los organismos comunitarios, resulta "superflua, cuando no contradictoria en sí misma" por lo que tratándose de "cuestiones directamente relaci onadas con la act i v idades comerciales de los solicitantes y, por tanto, con la materia de comercio interior que a las Comunidades Autónomas constitucionalmente les corresponde, éstas, n ing u na remis ión de tales documentos deberán efectuar al señalado órgano estatal. De manera que si las Comunidades Autónomas ostentan la competencia en materia de comercio interior, ellas deberán expe- dir con plena eficacia los documentos y certificados, pero, por el contrario, si no ostentasen dicha competencia, la expedición que de los mismos deba efectuar la Direcc ión General de Comercio Interior, ninguna acredita- ción prev ia por parte de aquellas necesitará". "El precepto - art. 4 aña- dido por el R.D. de ú ltima cita - queda, en definitiva privado de toda ef ectividad y resulta de aplicación imposible". FJ. 6.-

> Sin embargo, "no es necesario declarar l a nu lidad de pleno derecho de aquel precepto, bastando con la declaración de inaplicabilidad en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas promotoras del conflicto".

> En todo caso, queda a salvo "el deber general de colaboración que necesariamente ha de presidir las relaciones entre el Estado y las Comunidades Au tónomas, máxime cuando de actuaciones y actividades como las ahora examinadas se trata".

> 4.- Los términos del Fallo se presumen dados los fundamentos jurídicos y arg u mentos en que se ha puesto

> En efecto, el TC declara que corresponde a las Comunidades Autónomas promotoras del conflicto, "la titularidad de las competencias controvertidas y que, en consecuencia, el Real Decreto 1.063/1986, de 9 de ma yo, con la modificación efectuada por el Real Decreto 2.225/1986, de 3 de octubre, no es de aplicación directa en el territorio de dichas Comunidades Autónomas".

Inversiones Extranjeras

Carlos García de Ceca

Control de cambios e infracciones administrativas

El control de cambios hace referencia a los actos, negocios, transacciones y operac i on es de toda índ ole entre residentes y no residentes, que supongan o deriven cobros o pagos exteriores.

Las formalidades, requisitos, verificaciones y autorizaciones exigidas por la Adm inistración en relación con la materia enunciada, se contienen en 1 a Lev 40/79, de 10 de diciembre, en el Real Decreto 1816/91, de 20 de diciembre y disposiciones que lo desarrollan a las que, en números anteriores de la revista, hemos hecho referencia suficiente.

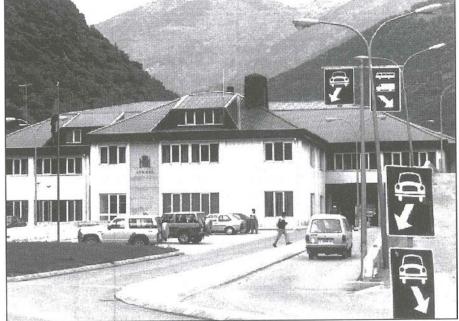
La contravención de las disposiciones pertinentes se sanciona de conformidad con lo preceptuado por la Ley 40/79, de 10 de diciembre, Capítulo III, arts. 10 a 15, ambos inclusive, dedicado a las infracciones administrativas.

Las infracciones administrativas se clasifican en graves y leves, definiéndose las primeras como las conductas previstas en el art. sexto -relativo al del ito monetario- cuando su cuantía supera las veinte mil pesetas, sin exceder de cinco millones.

Las infracciones leves contemplan cualquier conducta no tipificada en el art, sexto pero comprendida en el art. segundo de la Ley 40/79, ejecutado sin la preceptiva autorización administrativa.

La nueva Ley de Procedimiento administrativo y su influencia en las infracciones de control de cambios

La Ley 40/79, de Control de Cambios, en su art. 13 ap. 2° dispone que "las infracciones administrativas previstas en la presente Ley prescriben a los tres años y las sanciones correspondien tes impuestas en virtud de resolución firme, a los cuatro años". Este precepto ha de ser puesto en relación con el art. 132 de la Ley 30/92, de 26 de septiembre, de Régi-



Es necesaria la autorización administrativa para sacar más de 5 millones fuera del país

men Jurídico de las Administraciones Públ icas y del Proced im iento Administrativo Común, que dispone: "Las infracciones y sanciones prescribirán segú n lo dispuesto en l as leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos, l as infracciones m u y graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos y las impuestas por faltas leves al año".

El primer problema que planteamos es el de que, en tanto en cuanto la nueva lev fija plazos más breves para l a prescripción de l as infracciones na posibilidad a la duda. Es decir, el graves y leves a diferencia de la Ley artículo 13, ap. 2 de la Ley 40/79, a 40/79, que establece un único plazo de tres años, parece que habría de estarse a lo dispuesto en el art. 132 de la nueva Ley 30/92 puesto que es posterior y más favorable, principio éste de la retroac t i v idad de l a ley ulterior y más beneficiosa aplicable en el ámbito del derecho penal y, en consecuencia, también aplicable en el orden sancionador administrativo,

según disponen las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1950, AR 936; de 19 de octubre de 1964, AR 4622; 21 de mayo de 1965, AR 2397; 11 de diciembre de 1978, AR 4084; 21 de marzo y 29 de mayo de 1979 AR 997 y 2113; 28 de febrero de 1985, AR 855; 4 de junio de 1986, AR 4612 y 11 de febrero de 1987, AR 537, entre otras muchas.

La tendencia que defiende la aplicac ión de los principios penales al Derecho administrativo sancionador viene siendo proclamada por el T.S. tanto en base a la cobertura del art. 27 de la LRJAE, como del art. 25 de la Constitución que ya no deja ningunuestro juicio, habría que entenderlo modificado en el sentido que se ha

Por lo que se refiere al inicio del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones, la nueva Ley 3/92 ind i ca que "comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere cometido" (Art. 132.2).

El examen del principio de legali-

con anterioridad.

Así pues, afirmamos que la publicación del R.O. 1816/1991, ha tenido como consecuencia la desaparición en múlti ples supuestos de las infracciones graves, en aplicación del principio de legalidad antes exam inad o y sobre la base de no ser necesaria la autorización administrativa, para llevar a cabo los distintos supuestos del art. 6º de la Ley sobre Rég imen Ju ríd ico del Control de Cambios.

Los artículos en los que las Leyes 40179 y 10/83, tipifican las infracciones que por su gravedad merecen l a cal ificación de del ito, art. 6° y siguientes, establecen con claridad, que el presupuesto básico, la condición sine qua non para que un acto pueda ser tipificado como del ito, es que se hayan efectuado "sin obtener la preceptiva autorización previa".

De igual manera, la Ley 40/79,

como ya hemos dicho, en su art. 10 uno, para cal ificar un hecho como infracción vuelve a exigir la falta de autorizac ión ("cuando se haya ejecutado sin la autorización administrativa prescrita expresamente en las normas de control de cambios"). Sin embargo, en la nueva legislación cuyo origen está en el Real Decreto liberalizador tantas veces citado, 18 16/91, la exigencia de autori zación administrativ a ú n icamente se mantiene para la exportación física de pesetas, billetes, etc, en cuantía superior a los 5 millones de pesetas, supuesto éste que constituye el único hoy tipificado como delito. Para las restantes conductas contrarias a los preceptos del nuevo Real Decreto, sólo cabrá, en consecuencia, la cali- la iniciación, con conocimiento del ficación de leves.

Est a conclusión, a su vez, es de enorme interés, ya que si en la actualidad sólo existe la infracción leve, aquellos comportamientos que fueron objeto de Diligencias Prev ias o Sumarios Judiciales y que, por causa de la liberación del R.O. 1816/91, se remi ten por los Tribu n ales a l a Administración "por si los comporta m ientos fueren constitutivos de infracción", la ú nica consecuencia cua lq u ier tran sacción ex cepto l a que pueden comportar será la apreexportación física de billetes, etc.) y, ciación de infracciones leves a las que se les aplicarán las normas de la peor de los supuestos, serían califi- prescripción según lo señalado con

> Otra advertencia será la de señalar que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, publicada el día

27.11.92, entró en vigor a los tres meses de su publicación (disposición final) y que su art. 134, señala que cripción administrati va las diligen-"el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o de 15.10.79 Ar. 3452 y 26 de mayo regl amentariamente establec ido". Como quiera que el proced imien to aquellos casos de intervención judisancionador en el régimen de Con- cial en los que posteriormente, se trol de Cambios era exclusivamente

La autorización administrativa sólo se mantiene para la exportación de dinero en cuantía superior a cinco millones de pesetas

el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que quedó derogado, la Administración debería h aber pu blicad o u n tex to legal con el nuevo régimen sancionador, antes de la fecha de entrada en vigor (28.2.93) y no habiéndolo hech o, entendemos que existe u n vacío legal cuya consecuencia legal es la imposibilidad de tramitar el expediente administrativo en cues-

Nos qued a por examin ar la interrupción de la prescripción en la nueva Ley de Procedimiento Administrati vo y su posi ble repercusión en materia de Control de Cambios. La Ley 30/92, en su art. 132.2, indica que "interrumpirá la prescripción interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable".

Este principio también plantea alguna cuestión. ¿En aquellos casos en que las Diligencias Prev ias o los Suma ri os de los Ju zgados h ay an estado paralizados, más de un mes, esta paral ización juega a favor del pres un to responsable en el m i smo sentido de computarse el tiempo de parali zación como de no interrupción de la prescripción?. Parece que la respuesta sería la de estimar que, efectivamente, el tiempo de inactividad judicial no interrumpe la prescripción. De otro lado hay que tener

en cuenta, que el Tribunal Supremo afirmó que no interrumpen la prescias prev ias, como en las sentencias de 1987 Ar. 5850 y, en definitiva, en declara la inex i stencia de del i to, habría que estimar que no se interrumpió el plazo de prescripción de la infracción administrativa correspondiente.

Hast a el momento, exponem os u nas t eorías que no hemos tenido ocasión práctica de hacer valer ante la Administración. En poco tiempo, sin embargo, tendremos esta oportunidad y conoceremos el resultado de su pl an t eami en to. A través de la revista comentaremos oportunamente las resoluciones de la Administra ción sobre los particulares expresados. Cuestión de poco tiempo.

Economist & urist

Derecho Laboral

Manuel García Fernández

La reforma del mercado de trabajo

l.La reforma del mercado de tra- visto actualmente, con resultados bajo y el documento del Gobierno. El Gobierno de la Nación ha dado amplia publicidad, sobre todo durante la campaña electoral, al documento que ha sometido a la consideración del Consejo Económico Social bajo la titulación que encabeza esta colaboración. Se supone que dicho documento contiene las claves de la modificación de la legislación laboral que apoya la hasta ahora mayoría parlamentaria, que puede volver a serlo según sea el desenlace de las elecciones convocadas para el seis de

Pudiera parecer que el citado documento contiene medidas concretas que es, por lo demás, lo que piden lo sectores afectados, especialmente los empresarios, y lo que se afirma en la difusión publicitaria de aquél efectuada por el Gobierno. Lejos de ello, repre- sentantes de los trabajadores y, el documento consiste en un análisis un tanto superficial de la situación económica del mercado de trabajo y u na especie de apun te -pero sólo apunte- de medidas a adoptar para corregir las deficiencias de este mercado. Señalaremos las que mayor concreción adquieren en el texto

sometido al Consejo:

- Regulación de las empresas de trabajo temporal. Se admite la oportunidad de permitir el funcionamiento de estas empresas. De hecho, el Gobierno había presentado ya un proyecto de Ley en las Cortes, proyecto abortado por la disolución de las mismas.

- Supresión del contrato de fomento del empleo. Tal supresión se conecta con la reforma de los despidos por causas económicas o tecnológicas; pero l a conexión no se concreta en medidas para esta reforma. Antes, al contrario, parece querer mantenerse la preceptiva autorización adminis- trativa en estos despidos.

-Supresión de las Ordenanzas laborales para facilitar la movilidad funcional y geográfica. Ello no obstante, la supresión tendría que venir por lo que se acuerde en convenio colectivo; con lo que la propuesta gubernamental no avanza nada de lo ya prenegativos

-Potenciación del contrato a tiempo parcial. Este contrto está ya regulado actualmente. El documento no dice nada sobre la naturaleza de las medidas que ayuden esta potenciación.

-La vinculación del salario a la productividad, en los términos en que se establezcan en los convenios colectivos. La indicación del Gobierno no pasa de ser una recomendación a los agentes sociales, recomendación que compartirá, sin duda, cualquier persona sensata; otra cosa es que los sindicatos vayan a seguir esta recomen-

-Mayor flexibilidad en la modifica - ción de las condiciones de traba jo con una reforma del artículo 41 del Estat u to de los Traba jad ores que preve el consentimiento de los en su defecto, la autorización administrativa cuando empresario pretende modificar aquellas condiciones por causas técnicas u organizativas. sustitiuirían estos requisitos, especialmente la autorización administrativa, por lo que el documento denom ina "denuncia mod ificativa", sin

concreta r en qué consi ste dicha denunci a. De atenernos al derecho comparado, se entendería por tal el derecho del empresario a modificar las condiciones por causas económicas o técnicas, que de no aceptarse por los afectados, dará lugar a la rescisión del contrato con indem nización. Ahora, si esto fuese así, el propósito del Gobierno no sería congruente con el sostenimiento de la autorización administrati va en los despidos llamados económicos.

- Parece que se pretende reformar la prestación de desempleo (ya refor- mada por la Ley 22/1992, de 30 de julio) y no precisamente al alza. Tampoco se concreta el alcance

de la reforma, salvo sobre la excención de las prestaciones del I.R.P.F., que se considera

inoportuna. Se insinúa asi- mismo la supresión de las prejubila- ciones o las jubilaciones anticipadas entre los 60 y 65 años, por el peso que han adquirido en el gasto social. Esto

sería, en síntesis, la propuesta gubernamental. Como se observará, rodeada de cautelas y sin que pueda extraerse medida efectiva alguna con seguridad. El debate electoral ha puesto en evidencia que lo que se

Una de las propuestas del Gobierno es la regulación de las empresas de trabajo temporal



2. La Seguridad Social de los Administradores y Altos Cargos. Una serie de resoluciones judiciales ha venido considerando que los administradores de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada no podían considerarse trabajadores por cuenta ajena, por lo que su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social era improcedente, con la consiguiente pérdida del derecho a las prestaciones otorgadas por este Régimen. La Jurisprudencia de los Tribunales contradice la práctica de la Administración -práctica bien fundamentada en el art. 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores - de exigir la afiliación y cotización de los administradores que desempeñasen funciones de gestión en las sociedades dirigidas por ellos a este Régimen. Desde luego, el criterio judicial ha causado un enorme revuelo entre los afectados, quienes han venido cotizando para un Régimen que ahora les niega la protección que hubieran debido causar sus cotizaciones

Una importante Circular interna de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, la número 2-034, establece los criterios en materia de afiliación a seguir, vista la doctrina jurisprudencia! a que hemos hecho mención. Conste que las Circulares internas no son normas iurídicas v alguno de estos criterios es muy discutible jurídicamente. He aguí sus aspectos más significativos:

- Los administradores de empresas que rev istan la forma jurídica de sociedad v que ejerzan exclusi vamente dichas funciones, deberán afiliarse al Régimen de autónomos, salvo que sólo ejerzan como consejeros, en cuyo caso no deben incluirse en ningún régimen.
- no tenga atribuciones delegadas del se al Régimen General de trabajado-

res por cuenta ajena.

- aun con contrato de alta dirección, Económico y Social no supera este ejerza atribuciones delegadas por el órgano administrador, pertenezca o no ha ocasionado alteraciones de no al mismo, deberá afiliarse al Régimen de Autonómos.
 - Finalmente, los trabajadores con relación laboral "común", pero que sean socios en un porcentaje significativo de la sociedad en que desempeñan sus servicios, deberán afiliarse al Régi men de Autónomos, en la legislación destinada a fomentar la medida en que no hay ajenidad en su

Lo discutible jurídicamente es que una relación de servicios profesionales retribuidos pueda asimilarse al trabajo por cuenta propia (actividad profesional de producción de bienes el hecho de que los representantes y servicios abierto al público en del personal conozcan la retribución general) que constitu ye el hecho o supuesto base para la afiliación al Régimen General de Trabajadores

Una de las medidas que propone el Gobierno es la supresión del contrato de fomento del empleo

Autónomos (art. 2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto). Esperamos que, en su día, la jurisdicción social no entienda que la inclusión de estos servicios, que sean o no "laborales" son por cuenta ajena, en el R .E.T.A. es tam bién una inclusión improcedente. Porque todo pudiera ser. Desde luego, dada la doctrina sentada sobre la improcedencia de la inclusión de los administradores en el Régimen General, es conveniente que los afectados soliciten la devolución de cuotas correspondientes con derecho de huelga configurado por el la mayor premura posible.

3 Dos sentencias del Trib u nal Constitucional.

La sentencia 142/1993, de 22 de abril (B.O.E. 28 de mayo) confirma la const itucionalidad de la Ley - El personal de alta dirección, que 2/1991, de 7 de enero, sobre dere chos de información de los represenórgano administrador, deberá afiliar- tantes de los trabajadores en materia de contratación, mas conocida como

- Por el contrario, el personal que, que fue en su día objeto de duros ataques por las asociaciones patronales. Su puesta en práctica, sin embargo, importancia en las relaciones laborales, salvo la multiplicación del papeleo hasta situaciones absurdas, tal como entregar la enteridad de ciertos contratos y su copia básica, al mismo tiempo, en las Oficinas del I.N.E.M. La Sentencia se extiende sobre la activ idad sindical que, en n ingú n caso, según el Tribunal, ha de considerarse atentatoria contra la libertad de no sindicarse. Entiende el Tribunal que la protección de la intimidad del trabajador no queda afectada por pactada, por cuanto ya deberían tener conocimiento a través de los boleti nes de cotización a la Seguridad Social. Apunta un criterio interesante al respecto, a saber: que el propio trabajador puede exigir la supresión en la copia básica de aquellos datos que considere afectan a su intimidad personal. Recuerda, finalmente, que el deber de sigilo que pesa sobre los representantes del personal se extiende también al conoci miento de la copia básica del contrato, aunque la Ley 2/1991 no lo diga expresamente. La Sentencia 36/ 1993, de 8 de febrero (B.O.E. 11 de marzo) reitera la doctrina de que el preaviso en caso de huelga de alcance nacion al, se cumpla por el que efectúen las cúpulas de los centrales sindicales convocantes a la Autoridad Laboral y a sus correspondientes de las Asociaciones Patronales. Añade, sin necesidad por cierto, pron u nciamientos rot undos sobre la licitud de las huelgas de protesta contra la política gubernamental en nuestro Ordenamiento Jurídico, o, en otros términos, sobre la licitud de las huelgas políticas (se trataba de la huelga del 14 D, 1988). Licitud derivada directamente de la cobertura del artículo 28. 2 de la Constituc ión Española. Aun cua ndo el razonamien to juríd ico del Tribunal sea impecable, si se t ienen en cuenta anteriores pronunciam ientos, tan amplia configuración del derecho de huelga constituye poco a moderar su ejercicio, moderación que parecen desear los agentes sociales y los propios Poderes Públicos.

de "control sindical de los contratos",

JULIO, 1993

Economist & Jurist

Derecho Matrimonial

Antonio Pérez Ramos y Gregario Delgado del Río

La incapacidad psíquica matrimonia

Sentencia: 27-12-91 (Ponente: Manuel Calvo Tojo, de Santiago de Compostela)

absoluta, de laboratorio, "cláusula de dureza". Su prueba, una cuestión de hecho.

Jurisprudencia de los Tribunales eclesiásticos españoles

Sentencia: 27 diciembre 1.991 Ponente: Ilmo. Don Manuel Calvo Tojo, de Santiago de Compostela Publicación: En REDC nº 133 1.992, pp. 763-829

Razones jurídicas

- 1. La distinción entre incapacidad absoluta y relativa no es admisible en la práctica porque para diagnosticar tal incapacidad como absoluta sería preciso una comprobación prelógico del sujeto. Lo cual equivaldría de hecho a desviar la cuestión a los números 1º y 2º del can. 1095, o sea a la deficiencia de uso de razón o a la de discreción de juicio.
- naturaleza psíquica" con enfermeda- tructo dual y hipersonal y la capacia, se repelan

La incapacidad psíquica matrimo- des de naturaleza psíq u ica: si se dad o incapacidad para asumir y nial, en sede canónica (can. 1095.3° diagnostica a priori o antema- cumplir los deberes esenciales del CIC): sólo y siempre es relativa; la trimonialmente, sin l a adecuad a estado de casado únicamente podrán comprobación, una incapacidad psíquica como absoluta se enerva el biar, o lo que es lo mismo, se comete del CICO). una contravención de los ce. 219 y 1058 del CIC, y de los ce. 22 y 778 del CICO.

> 3. Lo más frecuente es que la incapacidad se realice dentro del matri-

monio concreto; y por ende sólo se ese demostrará su existencia en el "in

proceso correspondiente. Por eso es celebrar esa persona, que son entes arriesgado y confuso hablar de inca- de razón. todavía inexistentes. pacidad absoluta aprioriscamen -

saber, desde el hoy de la ruptura, misma o individualmente sopesadas,

2. No cabe identificar "causas de monio es sólo y siempre un cons- de dos personas que conyugalmente

ser enjuiciados desde esa alteridad concreta de persona a persona, irrederecho natural y eclesial a connu- petible (ce. 1055.1 del CIC y 776.1

> 5. Si la tal incapacidad se descubriere después del matrimonio, como estado de vida, individual o radicalizada en uno de los conyugados, cabría calificarla de absoluta;

pero mientras se circunscriba a matrimonio concreto, no a

facto esse" y a través, en su día, del hipotéticos matrimonios pudiera

te. Lo propio de este capítulo es 6. Si la incapacidad es recíproca o contemplar la incapacidad, de tracto radicalizada en los dos cónyuges, via al matrimonio del estado psico- sucesivo, retrospec tiv amen te, a aunque no revistan gravedad en la paso a paso, hasta el ayer de la boda. a veces no se compensan sino que llegan a descompensar destructiva-4. De ahí se deduce que la in- mente a la pareja. Se daría entonces capacidad psíquica es sólo y siem- el supuesto de una incapacidad relapre relat iv a porque el matritiva recíproca, invalidante por razón

Sentenc la c iertamen te novedosa bajo el Nos parece de gran mérito, por su solidez, la punto de vista jurisprudencia! y doctrinal, la argumentación en que fundamenta el Ponente mas avanzada, a nuestro entender, en línea su inter pretac ión del can. 1095 .3Q, ponpe sonalista, en esta materia de incapacidad deradamente valiente su actitud ante el mal ps1qu1ca. Toca un asunto eclesial bien conoci- uso que algunos hacen del magisterio pontifido incluer nor en divulgación nariodística de alla internatación de acta narros en al

toda vez que el punto de la relatividad, que foro; y muy puestas en razón las conclusiones lleva como de la mano al de la incompatibili- que hemos acotado -la larga sentencia abarca dad de caracteres, es poco pacífico a nivel de también el tema del error personal-, tanto en lo técnicos y además peligroso por sus conse- concerniente al derecho sustantivo como al cuencias jurídicas y pastorales, de modo que procesal. Asimismo, el acierto del Ponente al sobre el partic ular el propio Papa viene lla- invocar a favor de su tesis la autoridad del mando frecuentemente la atención, por temor propio derecho constitucional eclesial y las a las llamadas "nulidades fáciles".

concordancias con el reciente código oriental.

Derecho Mercantil

J. v A. Garriques

Resoluciones de la Dirección General de Registr os y del Notariado

Frente a la falta de novedades legislativas que reseñar en el ámbito mercantil, se han dictado por el contrario numerosas resoluciones por la Dirección General de los Registros y del Notariado que, por su indudable interés, merecen ser objeto de comentario.

Resolución de 10 de Noviembre de 1992 (BOE núm. 8 de 9 de Enero de 1993; núm. marg. 603).

La Dirección General acordó en esta resolución estimar el recurso interpuesto contra el acuerdo y la nota del Registrador, en el que éste último denegaba la inscripción de un poder general (que inclu ía l as más amplias facultades para actuar en nombre del representado tanto en la esfera judicial como en la extrajudicial, y así en la obligacional como en la dispositiva) otorgado por el Administrador Unico de una Sociedad Anónima en el que se comprendía también la facultad de "asistir a Juntas y reuniones de Sociedades, Com unidades y cualesquiera otras En tidades ...", por entender el Registrador que esta facultad contrariaba el artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, v porque tratándose de Sociedades personalistas resultaba incompatible con la propia naturaleza de las mis-

Interpretación estricta

La Dirección General fundamentó la estimación del recurso y la revocación de la nota del Registrador sobre la base de que es necesario hacer una interpretación estricta de toda restricción al instituto de la representación voluntaria en el ámbito patrimonial (arts. 1712 del Código Civil y 281 del Código de tales restricciones o exclusiones no dades Anón imas, y la Dirección

objeti vos diferen tes de los que determinaron su formulación. Interpretando así el artículo 16 in fine de la Ley de Régimen Ju rídico de Sociedades de Respon sabi l idad Limitada, que impone la exigencia de representación especial para cada Junta, la Dirección General entendió que parecía razonable y conveniente no aplicar la exigencia contenida en dicho precepto a la hipótesis pl anteada en l a que el socio representado era, a su vez, u na Sociedad Anón ima que pretendía valerse de un Apoderado con poder conferido en documento público y dotado de las más amplias facultades para actuar en nombre de aquélla, por no concurrir en tal supuesto las razones específicas que justifica ron la implantación de aquella res-

Resolución de 30 de Marzo de 1993 (BOE núm. 94 de 20 de Abril de 1993; núm. marg. 94).

En el recurso que dió lugar a esta resolución se debatía sobre la inscripción en el Registro Mercantil de una escritura en la que se documentaba el acuerdo de disolución de una Sociedad Anónima, el cese de sus Administradores y la aprobación del Balance final de la Sociedad, y en la que se solicitaba del Registrador la cancelación de los asientos relativos a dicha Sociedad, habida cuenta de que, según la certificación que se protocolizaba, no se tenía constancia de la existencia de acreedores sociales, y de que todos los Socios que adoptaron por unanimidad tales acuerdos renunciaron al derecho de impugnación del Balance.

El Registrador suspendió las operaciones registrales solicitadas por no acreditarse que se hubieran efectuado los anuncios prevenidos en el Comercio) a fin de garantizar que artícu lo 275 de la Ley de Socie- verse la actuación de la Sociedad en

se extiendan a hipótesis distintas y a General acordó confirm ar el acuerdo y l a nota del Registra dor, desestimando el recurso interpuesto, por entender que las especiales garantías de publicidad que la Ley prevé en este punto no son ajenas a la protección de los acreedores sin que, por tanto, puedan ser omitidas ante la sola afirmación por los Organos Sociales de la inexistencia de acreedores soci ales al tiempo de acordarse la disolución y de la unánime adopción de este

> Resolución de 5 de Abril de 1993 (BOE núm. 114 de 13 de Mayo de 1993; núm. marg. 12541).

El Registrador había suspendido en este caso la inscripción de una escritura de adaptación de Estatutos por entender que la inclusión en el objeto social de "... todas las actividades relacionadas con ..." era contrario a lo dispuesto en el artícu lo 117 del Reglamen to del Regist ro Mercantil.

Delimitación del ámbito

La Dirección General acordó estimar el recurso interpuesto y revocar el acuerdo y la nota del Registrador pues, aun cuando la transcendencia del objeto social tanto en el ámbito externo como en las relaciones internas societarias fundamenta la exigencia de determinación precisa y sum aria de l'as actividades que hayan de integrarlo, sin embargo tal exigencia entendía que no quedaba vulnerada por la frase cuestionada por cuanto la misma hacía inmediata referencia a la "compra y venta de vehículos, automoviles, accesorios, recambios y complementos para los mismos", delimitando así de modo suficientemente preciso el ámbito de actividad en que debía desenvol-

Doctrina Jurídica

Francisco José Barbancho Tovillas

Contrato de segur o y responsabilidad civil

Entre las vías naturales de obtención de la reparación del dañonse encuentra la

reclamación judicial.

ámbito surge la polémica que la reciente sentencia del T.S. de 2 de febrero de 1993 contempla y que pretendo analizar. No obstante, no podemos olvidar que la responsabilidad de las Compañías de Seguros, atendida la convención o contrato estipulado con el asegurado, viene recogida en el artículo 73 de la Ley del Contrato de Seguro (en adelante LCS) definiéndola como aquella por la cual "el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero de los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado conforme a derecho".

Sobre la base de este precepto legal el T.S. ("ad exemplu rn" ssts. de 27 de enero de 1990, 27 de noviembre de 1991, entre otras), en u na auténtica "communis opinio", no ha encontrado contrato como auténtico contrato de adhesión dada la distin ta y diferente posición económica entre las partes, pues, se nos dirá, no hay duda que la Compañía aseguradora, más fuerte económicamente, impone sus condiciones a la más débil. De esta forma, las condiciones generales no son, en ningún caso, producto de una previa concurrencia de voluntades expresadas voluntariamente sino, m uy al contrario, prefijadas de

Lo anterior nos introduce en la reciente sentencia del T.S. (aún no pu blicada) Veamos:

• Hechos •

En la provincia de Zaragoza se produjo un incendio en la discoteca "Espejo". El copropietario de dicha discoteca interpuso demanda en ejercicio del contenido del contrato de seguro reclamando la cantidad de 24. 789. 757 pts., más los intereses que procediera en virtud de la L.C.S., más la indem nización de los daños y perjuicios, irrogados al demandante como consecuencia de la demora del pago de la indemnización. El juzgado de primera instancia de Tarazona

dictó sentencia, en fecha 17.2.89, estimando, en parte, la demanda y condenando a la aseguradora a abonar al demandante la cantidad de 16. 878. 729 pts., más los intereses legales del 20% desde el momento en que se produjo el siniestro hasta que se abone y, por últi mo, condenando a que se abonaran los daños y perjuicios irrogados por incumplimiento del contrato.

La Audiencia Provincial de Zaragoza, con fecha 19.9.90, dictó sentencia estimando parcialmente el rec urso inter puesto por la aseguradora entendiendo que el Devengo de los Intereses se produce posteriormente al momen to del evento, deiando sin efecto la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de la inexistencia de incumplimiento contractual.

• Doctrina judicial •

El T.S. cuestiona el momento en el vengo de intereses ante el incumplimi cargo del asegurador (Art.18 y 19

inconveniente en calificar a este tipo de la doctrina que el mismo T.S. había ex- actuación diligente para determinar peripuesto en ssts. del 3 del 10 de 1991; 21 del 12 de 1991; 31 del 1 de 1992. Efectivamente, existe una necesaria distinción entre los artículos 20 y 38 ("in fine") de la L.C.S. Por una parte, el Art. 20, incremento del 20% de la cuantía adeudada al asegurado si en el plazo de tres meses judicial? A mi entender, como ya anticidesde la producción del siniestro no se hubiese indemnizado o reparado al asegurado, parte de la idea de que la falta de pago proceda de causa no justificada o que cuanto menos le fuera imputable a la aseguradora. Por otra parte, el Art. 38, "in fine", plantea la ausencia de pago cuando no existiera acuerdo en la valoración del daño entre los interesados. En este caso, el incremento, asimismo del 20%, se inicia desde que la valoración es inatacable. Inatacabilidad que indiscutiblemente se produce cuando el Juez fija la cuantía de los daños conforme a los medios de prueba, normalmente de peritos, contemplados en los Arts. 616 ss. Lec. Por último, cabría cuestionarse si el asegurado nada puede pretender del asegurador mientras la cuantía de daño no quede plenamente justificada. Sobre esta civil.

cuestión no cabe la menor duda de que el asegurador, conforme al Art. 18 L.C.S., está obligado a abonar, a cuenta de la indemnización definitiva, el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber según las circunstancias por él conocidas. Otra solución produciría la injusta situación de admitir que el asegurador no tenga que pagar nada mientras no exista una sentencia judicial firme, es decir, le bastaría con dilatar el proceso para no pagar hasta su conclusión definitiva.

El comen tario anterior obtu vo el refuerzo del T.C. en la sentencia del 14 de enero de 1993, que resolvía el conflicto de inconstitucionalidad promovido por el Juzgado de primera instancia de Ordes (La Coruña), siendo ponente Don José Gabaldón López, que considera que no existe vulneración del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectique se debe iniciar el cómputo del de- va cuando la Ley impone a la Compañía de Seguros el pago de la indemnización, ento de la obligación de indemnizar a con el 20% de recargo, desde "la fecha del siniestro". En concreto, razonamien to que aceptamos plenamente, se entien-La solución ofrecida por el T.S. reitera de que: "es exigible al asegurador una cialmente la cuantía del daño; la inicial iliquidez no impide la consignación en el plazo exigido del importe de la tasación; la consignación previa protege el derecho a una eficaz y rápida tutela del perjudicado". ¿Quid de esta interpretación paba, la solución es coherente. No hay que olvidar, y nos introducimos en el ámbito de la eficiencia en los criterios de reparación del daño, que la función de la normativa de la responsabilidad civil. corno anticipara Paz-Ares ("La economía política como jurisprudencia} racional", Anuario de Derecho Civil, 1981, pp. 601 a 707), se explica desde el punto de vista de la función de prevención general, es decir, como entiende De Angel Yaguez (Tratado de Responsabili dad Civil, Civitas, 1993, pp. 70 y ss.), en la función de reducción de los costes primarios del ilícito.

En suma, hay que celebrar el acierto de esta doctrina judicial que proporciona mayores grados de eficiencia en la reparación del daño producido por ilícito

Economist & urist

Doctrina Jurídica

L. M. García López/Lupicinio Rodriguez



Reflexiones sobre la liberalización de las telecomunicaciones

CJI S({))N({)) NI({))JLIr]J | IBTIJ({))N]]_
IRJJS1f (())JRAN1rII | JJTAJLIIANJJ

A | BA|RGEILLONA...

WJA ii II !Pii rl! JI[JT JEN JI'JJC(())
iill !Pii rl! (())JR JJ GJI NAJLJE
iill JPii rl! SJEJLJE1r1fff_W(())

JJN IP(())CJBJ JE IPAIIf& ({))JLJE

JJJL JMIIGJLJJ(())JR JE JE SJENZAI J]))TIJJEJE JJ({))



Travesera de Gracia, 86, entre Balmes y Vía Augusta 08006 BARCELONA - Teléfono 237 51 33

Con la Comunidad Europea presionando en favor de la liberalización, las grandes operadoras públicas de telecomunicaciones empiezan a no tener garantizado el maná del cielo, como han venido teniéndolo vía tarifas oficiales desorbitadas, auténticas exacciones parafiscales que muchas veces carecen de rel ación con los costes reales del servicio prestado y pasan a engrosar las arcas del Estado o se reinvierten por las Operadoras al dictado de los incontestables criterios emanados por organismos oficiales de planificación, con el grave riesgo de ineficiencia fácilmente inherente a la planificación económica pública: un riesgo casi inev itable cuando se invierte con dinero de otros, en vez de con el propio o con el de los accionistas, a quienes hay que rendir cuentas en términos de rendimientos reales todos los años.

La recien te reforma de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), operada por la Ley 32/1992 de 3 de Diciembre pasado, mantiene todavía que "las telecomunicaciones tienen la consideración de

servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público", en lo que parece una clara muestra de falta de adaptación a las circunstancias de los tiempos por parte del legislador.

Cualquier observador podía apreciar ya en 1987, cuando se promulgó la LOT, lo insostenible, en un contexto europeo dirigido al Mercado Unico que entró en v igor el pasado 1 de Enero, de una situación en la que las grandes operadoras públicas de telecomunicaciones tenían garantizado el maná del cielo, en régimen de monopolio, a través de unas tarifas oficiales que carecían de relación con los costes reales del servicio prestado.

Así, acabaron viendo la luz las Directivas de la Comunidad Europea de 1988 y 1990 sobre competencia en mercados de terminales y servicios de telecomunicación. La liberaliza-

El Gobierno intenta por todos los medios que Teléfonica se convierta en un monopolio de hecho

ción de los equipos terminales (centralitas privadas, aparatos de teléfono y contestadores) se completó en España el año pasado. En cuanto al grueso de los servicios regulados por la LOT, la reforma de Diciembre pasado -que transpone a prestro

ordenamiento las Directivas

das- establece las bases para una profunda transformación del sector entre 1993 y 1994.

Desde el 1 de Enero pasado estaba liberalizada la conmutación de datos, el principal negocio de las comunicaciones empresariales, pero hastratera apenas unos días -sin tiempo

para entrar en su análisis antes de entregar estas líneas a la imprenta- no se ha aprobado el Reglamento de desarrollo que, entre otras cosas, debe regular las condiciones de alquiler por Telefónica de su red de transmisión de datos.

No obstante, es tal el cúmu lo de requisitos, controles, derechos de veto del Delegado del Gobierno en las compañías concesionarias, y otras restricciones varias al acceso de la iniciativa privada que contiene la Ley, que a veces da la impresión de que lo que se pretende es, o bien convertir a Telefónica en un monopolio de hecho, ya que no puede seguir siéndolo de derecho, o asegurar a Telefónica, via fijación oficial de tarifas, cánones y alquileres varios, unos volúmenes de ingresos que Telefónica no obtendría en condiciones normales de mercado.

Baste pensar, por ejemplo, en qué quedaría la liberalización si Telefónica argumenta que, por puras cuestiones técnicas, no dispone de capacidad de red de transmisión de datos sobrante para algundata auna competi-

dad como éstas necesitan. Las operadoras privadas podrían intentar pedir autorización para crear sus propias redes especiales, para no tener que depender de Telefónica, ¿pero quién se atrevería a hacerlo si el artículo 23 de la LOT establece que esas redes especiales deben clausurarse si se crean servicios finales o portadores (que no están liberalizados) que puedan sustituirlas, y la decision sobre la creación de esos nuevos servicios corresponde al Gobierno?

Si el Estado juega limpio, no habría



razones para temer medidas arbitrari as en estos campos, pero es que hasta ahora no ha dado motivos para la confian za: el Gobierno no hace mucho declaró desierto "por falta de garantías técnicas de los licitadores" el concurso para la adjudicación de las dos licencias de radiobúsq ueda (los famosos "buscas")... al que se presentaban consorcios en los que participaban las más poderosas multinacionales del sector. Todo para dar t iempo a Telef ón ica a ponerse en cond ici ones de obtener una de las licencias.

Otro ejemplo de lo mismo: el Gobierno debe convocar este año un concurso para adjudicar dos licencias de telefonía móvil, ya que este servicio deja de ser monopolio a partir del próximo 1 de Enero de 1994. Pues bien: el Gobierno ya ha anunci ado por anticipado que "muy probablepara Telefónica. O sea, que será para Telefónica, que por cierto ya ha lanzado una super-campaña de publicidad de su nuev a filial ded icada la telefonía movil ("TS-1"), una inversión publicitaria no van a hacer sus competidoras hasta que no se sepa qu ién obtiene la segunda l icenci a. Eso es jugar limpio.

El último caballo de batalla de la liberalización es el servicio de telefonía vocal, es decir, el simple y primitivo hecho de hablar por teléfono sin más. La reforma de la Ley de Ordenación de 1 as Telecom unicaciones (LOT) real izada en Di ciembre de 1992 mantiene el régimen de monopolio para este servicio, pero entretanto ya la CE ha decidido su liberalización para 1998, con u n período transitorio de dos años para España.

La Dirección General de la Competencia de la CE, en su Informe 1992 sobre la Liberalización de las Telecomunicaciones, se queja de las distorsiones a la libre competencia que provoca este monopolio, sobre todo en dos aspectos: el llamado "efecto fronterizo", y la falta de instalaciones de transmisión de datos de alta velocidad v con tarifas razonables.

El "efecto fronterizo" consiste, en pocas palabras, en que el coste para el usuario europeo de una llamada internacional (dentro de la CE) puede ser hasta 5 o 6 veces superior al de la llamada nacional más cara. Además, la disparidad de tarifas es absoluta: por ejemplo, llamar a Alemania desde España cuesta el doble que

esto produce son, entre otros:

espacial de algunas compañías, ya que por ejemplo los ordenadores centrales de las bases de datos, o los servicios de telebanco, tenderán a instalarse en países con menores tarifas.

b) Distorsiones en las prácticas normales de la telefonía, como la "falsa llamada a cobro revertido" (llamar al otro país y pedir que devuelvan la llamada desde allí, porque es más barato), que ya practican sistemáticamente muchas empresas, o el "efecto centralita", consistente en una vuelta al tradicional sistema de la conferencia internacional a través de operadora. En este caso, la operadora se encuentra en el país de destino de la llamada. donde las tarifas son más baratas; se le da el número de teléfono deseado. mente" una de las dos licencias sea y la operadora llamará después desde

> La CE establece la liberalización de las telecomunicaciones para 1998, pero España tiene además un período transitorio de dos años

destino para establecer la conferencia con la tarifa más baja, que se carga a l a ta rieta de créd i t o del llamador. Algo de este estilo ya lo intentó en España ATT para llamadas a EEUU: no sé con qué éxito.

c) La imposibilidad comercial de implantar nuevas tecnologías ya disponibles, como por ejemplo las denominadas "redes corporativas v irtua-

En cuanto al segundo fenómeno citado, la falta de instalaciones de transmisión de datos de alta velocidad con un coste razonable se ve propiciada por la obsolescencia de muchas de las actuales redes públicas de telefonía v ocal, en régimen de monopolio, y que pese a poseer una capacidad muy limitada para transmisión de datos, son la única alternativa viable para muchas empresas, ya que el coste de las redes de datos dedicadas es prohibitivo. Este factor, aparte de suponer un handicap para las

hacer la llamada inversa (Alemania - empresas europeas en general, dispa-España). Los efectos perniciosos que ra también los costes de los servicios de telecom un icaciones, ya que se a) Distorsiones en la localización ocupa mucho más tiempo la línea en transmitir datos a menor velocidad, y además satura la red telefónica conmutada. Una m ultinacional de este sector estimaba que, por este motivo, sus costes de operación en Europa eran por térmi no medio dos o tres veces más caros que en Estados Unidos o Japón.

> Lo triste de todo esto, ya ciñéndonos al caso español, es que se suele funcionar a golpe de evento y a toro pasado: se l an za el Hi spasat. Pues bien, sólo m uchos meses después tenemos Ley de TV por satél ite, y todavía más meses después la convocatoria de las correspondientes concesiones. A la vez, se retrasa casi sine die la prometida regulación de la televisión por cable, cuando se calcula que unos 600.000 hogares españoles están ya conectados a sistemas (alegales o ilegales, según se quiera) de cable o vídeo comunitario. Otro caso de inutil obstinación en poner puertas al campo, a la vez que se fomenta indirectamente una cierta especie de "piratería" tolerada (que no autoriza-

El último ejemplo de intento de control estatal, que roza ya lo ridículo, nos lo ofrece la nueva redacción dada al artículo 10 de la LOT por la Ley de Dic iembre pasad o: las compañías eléctricas que necesiten crear redes propi as de telecom u nicación en el normal desarrollo de su actividad tendrán que pedir autorización administrativa, que se denegará si la red prev é u n a capacidad mayor de la estrictamente necesaria para la actividad. Es decir, se impide la creación de una infraestructura extremadamen te util con visión de futuro. porque es "de doble uso" y puede ser "mal" utilizada por el sector privado.

Tod os estos fenómenos enseñ an algo de lo que parecen no darse cuenta los gobiernos europeos reacios a la liberal ización: que no se pueden poner puertas al campo de las nuevas tecnolog ías. Pri mero, porque casi siempre hav forma de burlarlas, como hemos visto. Segundo, porque periudican a los usuarios en general. Y tercero, porque hacen perder competitividad a las empresas europeas frente a sus rivales norteamericanas y japonesas. A la larga, más vale enfrentarse a la competencia que intentar impedirla a toda costa.

Doctrina Jurídica

Pascual Martín Villa

Las litis expensas en la actualidad

tratar sean tan machacones y reitera-

hasta interesante. Esta noche he topado con un matrimonio, va separado judicialmente, que litigaba en un pleito aparte sobre la división de una finca común, en el transcurso del cual la esposa, carente de medios económicos, solicitó del órgano iurisdiccional la concesión de unas litis expensas que le permitiesen afrontar los gastos del proceso. La primera observación de la cuestión me hizo fijarme en el hecho de que, con anterioridad al pleito que estudiaba, existía un pronunciamiento judicial que disolvía el régimen económico matrimonial, cual era el de separación, por lo que, lógicamente, disuel to aquel régimen, no

cabía ahora la posibil idad legal de

sumar los ingresos del marido a fin de denegar a la esposa el derecho de la justicia gratuita. Rápidamente concluí que las litis expensas sólo podrían concederse constante matrimonio. v hasta el mismo momento del pronunciamiento judicial que disolviese el régimen matrimonial. Por lo tanto, una vez decretada la separación, o el ingresos y los bienes del otro, a fin divorcio, en su caso, no cabe que los de saber si procede o no el reconocicóny uges se reclamen entre sí percepciones económicas que les permitan entablar un procedimiento contra el otro o contra un tercero. Esto es to del derecho de la justicia gratuita una consecuencia del pron uncia- y, consecuentemene, el otro cónyuge, miento de disyunción que, sobre con- con las limitaciones que ya veremos, llevar una debilitación o una desaparición del status consorcial, somete expensas. Por este motivo se ha de los bienes de cada cónyuge a un régimen totalmente diferenciado, que no cabe reputar aunados a los efectos de conceder o denegar el derecho a la justicia gratuita. Apurando las cosas, ta, el cual es primordial a la ciudadaaunque no es éste el planteamiento nía y a los fines del proceso matrifundamental del presente escrito, monial, que rara vez lleva aparejada

No quisiera que los temas jurídicos existiría el derecho a solicitar las litis ceso, según una práctica judicia l ya que la práctica cotidiana me obliga a expensas desde el momento en el que se pronuncia judicialmente la disolitivos, en definitiv a tan aburridos, ción del régimen económico matricomo los recientes debates televisa- monial y hasta el de la efectiva liquidos entre los dos candidatos a la Pre- dación de los bienes consorciales. sidencia. A veces, cuando la impe- Aunque este supuesto extremo, y un riosa práctica te coloca delante de tan to impensable, pod r ía suscitar una institución, surge una idea que te alguna dud a, creo que 1 as m i smas permite contemplarla con ojos nue- deberían de ser resueltas en un sentivos que la tornan lógica, racional, y do negativo, por considerar que la liquidación del régimen no afecta, en ningún caso, a las rentas que el trabajo o los bienes privativos les produzcan cada cónyuge tras el pronunciamiento de disolución del régimen, por lo que no podrán sumarse entre sí las de los dos cónvuges, a los efectos de estimar si concurre o no el reconocimiento del derecho a la justicia

Justicia gratuita

Y con ello llegamos a la idea que consideramos nuclear de estas notas, y es la de que la institución de las l i t i s expensas tiene u na carácter supletorio respecto del derecho de justicia gratuita, verdadero derecho social a cuyo través se obtiene más dignamente la tutela del cónyuge que se ve en la precisión de litigar contra el otro en un pleito matrimonial. Si uno de los cónyuges solicita el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente en estos procedimientos, habrán de ser tenidos en cuenta los miento del derecho. Si los bienes del otro consorte exceden del mínimo legal, no procederá el reconocimienvendrá obligado a satisfacer las litis cons iderar que 1 as litis expensas constituyen una institución procesal subsidiaria respecto del derecho al reconocimiento de la justicia gratuicabe plantearse la pregunta de si una imposición en las costas del pro- expensas en estos procedi mientos

inveterada.

Pero con lo hemos d icho casi no hemos av anzado nada. Hay que señalar que, sobre la institución de las litis expensas gravita ineludiblemente la naturaleza del régimen económico matrimonial existente, y que no es lo m ismo a estos efectos un régimen de ganaciales que uno de separación de bienes. Ninguna duda ofrece que en los proced im ientos matrimoniales la existencia de bienes en el consorcio hace que procedan las litis expensas en favor del cónyuge que no tenga, de hecho, la administración de los bienes consorciales. Aunque cabe plantearse la naturaleza iurídica del gasto, a fin de determinar si la entrega de las expensas al cóny uge no administrador de hecho tiene el carácter que primaria y aparentemente suele atribuírsele de litis expensas, o, por el contrario, constituye un pago de la sociedad consorcial al cónyuge que lo reclama con la obligación de aquél de restitu ir su importe. A los efectos de estas notas, nos conformamos con dejar planteada la cuestión.

Separación de bienes

Otra cosa distinta acontece en el régimen de separación de bienes, en el que ex i ste, al menos hasta el momento, lo que se denomina por la doctrina científica el régimen económico-matrimonial primario, caracterizado por el hecho de que cada cónyuge ha de contribuir al levantamiento de las cargas de la familia en proporción a sus bienes. A pesar de los términos aparentemente generales, en orden al reconocimiento del derecho de justicia gratuita, de la obligación de computar los rendimientos de ambos cónyuges, cabe plantearse la cuestión de si, en un pleito matrimon i al pueden com pu tarse como carga de la fam i lia los dispendios procesales de las partes. Al entender de quien estas líneas escribe no cabe esta conceptuac ión, y, por lo tanto, no cabría nunca conceder las 1 i ti s

Doctrina Jurídica

Eulalia Pascual

La sociedad de socio único

los que el cóny uge que lo precise podrá obtener sin limitación alguna el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita siempre que sus bienes, individualmente considerados. no rebasen en mínimo legalmente establecido para el reconocimiento aquel derecho.

matrimoniales, cu ando existe u n

régimen de separación de bienes, en

Protección

Si hasta ahora nos hemos referido ú nicamente a los procedimientos matrimoniales es debido a que son ción de las litis expensas, sin duda, reconocimiento de este derecho en otorgamiento de las litis expensas. los procesos matrimoniales no se computarían los ingresos de ambos cónyuges en discordia. Además, en los procesos entre ambos cónyuges, el cómputo de los bienes es distinto de como lo verifica el legislador, ya que no sirve la regla de la suma de los ingresos de ellos para compararla con el mínimo legal, puesto que, a fin de denegar el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita, debe de poseer uno de los cónyuges ingresos que excedan del cuádruplo del mínimo legal, ya que el cónyuge que ha de satisfacer las litis expensas debe de superarlo en lo que respecta a él y también en lo referido al otro, cuyos gastos procesales debe de abonar. Con el actual sistema legal se ha de concluir que, para los supuestos en los que proceda el reconocimiento de las litis expensas (ya hemos visto que nunca, bajo el régimen de separación de bienes) existe una laguna legal en lo tocante al cómputo de los ingresos necesarios para la obtención del derecho de justicia gratuita en pleitos seguidos entre los cónyuges.

Pero las litis expensas durante el matrimonio no sólo deben de existir en los pleitos seguidos entre los mismos cónyuges. Cabría también preguntarse por la aplicación de la institución a otros pleitos seguidos por uno de los cónyuges contra un tercero. Bajo el régimen de gananciales, quedarían ya al margen los gastos de defensa de los bienes privativos o de

los consorciales que, en la primera de las hipótesis, generarían un crédito del consorcio frente al cónyuge titular de los bienes. Pero, ¿qué pasaría en el supuesto de reclamación de un de que no existe la obligación de crédito -o exigencia de una obligación- generada por la existencia de una culpa extracontractual, que afectase activa o pasivamente sólo a uno de los cónvuges?. Tampoco en estos supuestos entra en juego el instituto de las litis expensas, que se caracteriza por la no existencia de una obligación de rest ituir a quien realizó el dispendio. Estos supuestos de culpa extracontractual se podrían resolver los únicos en los que el legislador pensando que se genera un crédito en contempla expresa verbis la institu- favor del consorcio o del cónyuge que anticipa la impensa, distinto de con la intención de proteger a la las litis expensas. Lo que acontece en parte más débil y necesitada de pro- el régimen de separación de bienes es tección; protección que, tras la refor- que ninguno de los casos más arriba ma llevada a cabo en el derecho de enunciados podrían ser considerados justicia gratuita, se hubiera consegui- como cargas matrimoniales, y, por lo do mejor estableciendo que para el tanto, no cabe reputar que proceda el

Papel limitado

que en los regímenes de separación de bienes estos pleitos intramatrimoniales no merecerían la concesión de las litis expensas por cuanto que los gastos del proceso no pueden ser considerados como carga de la familia. Y, en los de ganaciales, el cónyuge que no admini stre de hecho el consorcio podrá solicitar la correspondiente habilitación de gastos judi-

La litis expensa tiene un sólo campo de aplicación: el proceso matrimonial y en él hay que distinguir el régimen de separación de bienes y el de gananciales

ciales, que generaría el correspondiente crédito en favor de la sociedad conyugal, distinto de las litis expensas, que se caraterizan por el hecho restituir su importe.

Carácter subsidiario

Por último, en los limitados y cuestionados supuestos en los que proceden las litis expensas, el derecho afecta de manera personalísima a ambos cónyuges entre sí, sin que se extienda a sus sucesores, ya que, si uno de los cónyuges falleciese y se suscitase litigio en orden a la liquidación del régimen, o de los derechos sucesorios, como quiera que las litis expensas tienen un carácter subsidiario respecto del reconocimiento del derecho de justicia gratuita, no sería lógicamente posible sumar los ingresos de ambos cónyuges, por lo que el cónyuge supérstite carente de medios económ icos tendría que acudir al reconocimiento de su derecho a la justicia gratuita.

De lo dicho se desprende que la ins-Así pues, las litis expensas juegan titución de las litis expensas no tiene un papel muy limitado, y sólo en los otro campo de aplicación que el de supuestos de litigios intramatrimo - los procesos matrimoniales, y que, niales, mientras perdure el vínculo. aún dentro de éstos, cabría distinguir Estos procedimientos son los de el régimen de separación de bienes, naturaleza matrimonial, pues no cabe en los que tampoco procedería -por concebir, salvo en hipótesis de labo- no constituir los gastos judiciales una ratorio o de mero divertimento, que carga familiar-, y el régimen de los cónyuges mantengan entre sí liti- gananciales, en el que más propiagios judiciales mientras perd ure el mente existe un derecho del cóny uge vínculo. Hemos reiterado más arriba que carezca de la administración de hecho de los bienes consorciales a solicitar del órgano jurisdiccional los necesarios para proseguir el procedimiento, generándose u n crédito en favor del consorcio convugal. Y aún en éste supuesto, de dudosa calificación jurídica, habría que modificar, para estimar la procedencia del reconocimiento de las litis expensas, el actual régimen legal en cuanto a los mínimos requeridos para el reconocimiento del derecho de justicia gratui-

Creo que más valdría modificar los preceptos atinentes al derecho de la justicia gratu ita, en el sentido de excluir, en procesos conyugales, la obligación de sumar los caudales de ambos para obtener el reconocimiento de la justicia gratuita y, con ello, desaparecería de nuestro derecho positivo una institución anacrónica y poco acorde con los tiempos que

1.- Planteamiento

La causa de la creación de esta contradictoria forma de sociedad, podemos hallarla en la necesidad de establecer una limitación a la responsabilidad del comerciante individual, y a que, en muchos sitemas jurídicos, no existen fórmulas legales que conduzcan a tal fin.

Al no utilizarse en el tráfico económico actual las tradicionales sociedades de tipo personalista (Colectiva y Comanditaria), por implicar en mayor o menor grado, una responsabil idad personal de los socios, la forma más habitual de sociedad es la de la Sociedad Anónima, modelo creado como base para grandes entidades mercantiles, y cuya aplicación a pequeñas y med ianas empresas crea grandes inconvenientes. Por ello, ten iendo en cuenta que en nuestro país casi el 98% de las empresas son pymes y que, además, éstas constituyen el principal motor de incentivación económica, puede comprenderse la importancia de esta figura jurídica.

Las ventajas del implantamiento de l a sociedad u nipersonal podrían exponerse así:

- 1.- Est imulación del espíritu de empresa en virtud de la limitación de responsabilidad.
- 2.- Toma de conciencia de los intereses de la empresa puesto que, al separarse éstos de los intereses personales del empresario, el enfoque se hace más objetivo.
- 3.- Estabilidad de la Tesorería: al no existir ya una unidad patrimonial entre la Caja de la empresa y el patrimonio del empresario, se suprime el peligro de desinversión.
- 4.- Continuidad de la empresa que queda desvinculada de las vicisitudes de la vida del empresario.
- 5.- Mejoría en la gestión. La independencia entre patrimonio personal y patrimonio empresarial, mejora la gestión financiera y contable, y permite delimitar meior los obietiv os de la empresa.

En cuanto a los inconvenientes de la sociedad de socio único, se deri-

van de la aplicación del privilegio acciones, es corrientemente admitide la responsabilidad lim itada en cuanto a la garantía de acreedores y de la falta de voluntad social.

11.- Concepto y clases

La sociedad unipersonal puede

- cuando jurídica y realmente exista un sólo socio.
- cuando ju ríd icamen te existan varios socios pero con vinculación a u no de ellos, de forma que éste actúa como único (filiales o conyú-
- cuando jurídica y realmente existen varios socios pero ocupando uno de ellos una posición de predominio. El socio único puede ser persona física o sociedad.

Clases

Sociedad Anónima de favor o conv eniencia: se d a cuando en el momen to de la fundación hay u na pluralidad de socios fundadores ficticia (un socio fundador y testafe-

Sociedad Anóni ma u n ipersonal sobrevenida: ocurre cuando, por determinadas vicisitudes, todas las acciones se re únen en una sola mano. La práctica totalidad de las legislaciones y de la doctrin a no impone la disoluc ión "ipso iure" según estudiaremos más adelante.

Sociedad Unipersonal Pública: La fundación de una sociedad por un ente pú blico o por testaferros que luego le transmitirán a ésta su s

Holanda, Dinamarca, Alemania, Francia Portrugal y Bélgica han admitido la sociedad unipersonal en sus ordenamientos jurídicos

da en los ordenamientos de influencia germánica y excepcionalmente en los latinos.

En nuestro ordenamiento jurídico, hoy por hoy, no existen las bases legales para construir el Estatuto de la empresa individual. Sin embargo, tras la 12ª Directiva de la CEE y la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 21 de Junio de 1.990 ju nto con la estructura creada anteriormente por la jurisprudencia y la doctrina españolas (Trias de Bes, Vicent Chulia, Giron, Soto Bisq uert) permi ten hablar de un cierto asentamiento de esta figura en nuestro país.

Directiva de la CEE

Los motivos que han inspirado la 12^a Directiva de la CEE, han sido más bien de política ju rídica que económica. Se establece en la misma que la sociedad podrá constar de un socio único en el momento de su constitución así como mediante la concentración de todas sus partici- paciones sólo tit u lar. La Directiva fija además cinco princi- pios bási cos de armonización y coordinación de las garantías esta- blecidas para las sociedades de capi- tales en los sistemas jurídicos de los Estados miembros, y los régimenes fijados para dichas sociedades en otras directivas comunitarias y en la Resol ución del Consejo de 3-11-1986, imponiendo fundamentalmente la necesidad de pu blicid ad en registro público como garantía de terceros y la exigencia de que consten en Acta las decisiones adoptadas por el socio único cuando ejerza los poderes atribuídos en la Junta Gene-

Derecho Comparado

Han admitido la sociedad unipersonal en sus ordenamientos jurídicos los siguientes países: Holanda (desde 1986); Dinam arca (desde 1973); Alemania (desde 1989); 43

Economist & urist

Franc i a (desde 1985): Port ugal (desde 1986); Bélgica (desde 1987). En Estados Unidos, la sociedad unipersonal se halla totalmente implantada.

Sociedad unipersonal en España

Debemos distinguir tres fases:

1. Ré gimen anterior a la Ley de Sociedades Anónimas de 1951.

Vi gen te el Cód i go de Comercio como norma reguladora, fueron la doctrina y la jurisprudencia las que se interesaron por la cuest ión, abriéndose paso la tesis favorable a la m ism a en base a la posibil id ad regulada en los arts. 578.579 y 587 del Código de Comercio, de que el comerciante individual limite su responsabilidad económica, y asimismo, en base a la falta de prohibición legal expresa o disposición que

impusiera su disolución.

2.- Régimen posterior a la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de Julio

La Ley modifica la situación anterior, al fijar en su art. 10.1, un mínimo de tres socios fundadores para la fundación simultánea, exceptuando las sociedades constituídas por organismos estatales, prov inciales o municipales.

Por otra parte, la Ley toleraba la Sociedad A nóni ma uniperson al sobrevenida, al no considerar causa de disolución (cuando menos inmediata), la reunión de todas las acciones en una sola mano.

La jurisprudencia vino a cubrir el vacío legal subsistente respecto de la responsa bi l idad y la garan tía de acreedores, estableciendo la responsabilidad personal del único accionista.

3.- Régimen actual: R.O. 1564 /1989 de 22 de Diciembre y Ley 19/1989 de 25 de Julio.

Esta Ley no ha venido en principio a clarificar el tema, sino que ha

único responderá, en todo caso, ili-socio único y dos testaferros, salvo mitadamente, de las deudas sociales, en la med ida que el patri mon i o social sea insuficiente.

La Sociedad Unipersonal deberá acceder al Registro Mercantil

La confusión apuntada anteriormente, surge en torno al art. 34 d), que establece como causa de nulidad constitutivo la voluntad efectiva de, do. al menos DOS socios fundadores, en el caso de plural idad de éstos. La redacción del artículo sorprende: en primer lugar, choca frontal mente con el art. 14 de la misma Ley, que "en el caso de pluralidad de socios" ya que, siendo éstos un mínimo de tres, la pluralidad se dará siempre.

Las conclusiones de la doctrina son varias:

a) La Ley admitiría que uno de los tres socios fundadores fuera un testaferro (sociedad anónima de favor o

conveniencia).

b) La Ley establece la nulidad

en el caso del art. 16 de la Ley Sociedad Anónima irregular.

De todo lo expuesto se evidencia una falta de certeza jurídica que ha venido a paliar la Resolución de 21 de Jun io de 1990 de la Direcc ión el no haber concurri do en el acto General de Registros y del Notaria -

Resolución de 21 de junio del 90

La Resolución sienta las bases definitivas de la sociedad unipersoexige la presencia de TRES socios nal de acuerdo con una serie de fundadores. En segundo lugar, no se razonam ientos ju rídicos sobre los entiende el porqué de la expresión problemas fundamentales que plantea esta figu ra. Respecto de la incompatibilidad entre el concepto de sociedad y la situación de unipersonalidad (alegato fundamental en la doctrina adversa a este tipo de sociedad), la Resolución concluve que el substrato de la persona jurídica corporativa no es la realidad

> aso-ciativa en sentido sociológico, sino la UNIDAD ARTIFICIAL DE IM-

introducido un elemento de confusión al respecto, como veremos. En relación a la fundación, sigue sin admitirse la constitución por socio único, pues los fundadores habrán

tanto para las sociedades originariamente de un socio único (unidad for-

de ser un mínimo de TRES, exceptuándose las sociedades PUTACION válidamente constituida (art. 35.1 del Código Civil). La constituídas por el Estado, las Com u nidades

Economist & urist

consagrado por e 1 art. 1911 del capital no se funda en su estructura lo que parece suicida. corporativa sino en la creación de u n fondo de responsa bilid ad impugnación).

Principio de correlación

Finalmente la Resolución de la Dirección General de Registros y del Nota ri ado de 21/6/90, zanja también otras dos cuestiones polémicas surgidas en torno a la figura de la sociedad un ipersonal: la correlación entre el poder del empresario y la responsabilidad y el tema de la Junta en la sociedad de socio único.

El principi o de correlación poder/responsa bilid ad justifica el poder del empresario de organizar ción 21/6/90, entienden que no debe los factores de prod ucción y sus exigirse pluralidad física sino forpropios beneficios, en el riesgo que mal: el art. 102 de la vigente Ley de asume de tener que pechar con l'as S.A. considera válidamente constitesis, de hondas raíces históricas, no 25% del capital suscrito con deretiene vigencia en la realidad econó- cho a voto (y, con otro quoru m, se mica actual. Por una parte, el poder reconocía asim ismo en l a antigua del empresario h a qued ado m u y Ley). Es fundamental, en cambio, mediatizado por la creciente intervención estatal, la importancia de los representantes del personal de la empresa sobre las decisiones que afectan al devenir de la misma, y la tendenci a cad a vez mas generalizada a despersonalizar la empresa separándola como ente autónomo requisitos necesarios para la válida de la persona de su fundador. Por constitución de la misma. otro lado, el mantenimiento del

general de responsabilidad universal principio de responsabilidad ilimitada en una época de desaceleración Código Civil, y su correlativo, el art. económica constituye una traba al 127 del Código de Comercio, debe- impu 1 so de creación de n uev as mos concluir que la limitación de la empresas por suponer u n riesgo responsabilidad de las sociedades de excesivo para el nuevo empresario,

En cuanto a la cuestión de la Junta. recordemos que la 12<i Directiva de ade- <u>cuado</u> (autonomización de la C.E.E. 89/67, establecía que el patrimo- nios y esferas de socio ú n ico ejercerá los poderes atribuídos a la Junta General y deberá constar así en Acta. De acuerdo con el criterio tradicional, la Junta sión de J a vol u ntad social y debe formarse ésta por una plu ralidad de personas. Así, e l socio ú nico no podría adoptar acuerdos sino llevar la contabilidad así como los tomar <u>decisiones sociales</u> necesarias Libros correspondientes. para superar una situación determinada (Sentenc i as de 5-4-1960; 27 - 11 - 1985). Sin embargo, una reciente jurisprudencia (vid. S. 28-12-1985

por ejemplo) y la repetida Resol u- la y a a l udida const i t ución de la que el socio único se constituya formalmente en Junta general, preferi blemente ante Notario, quién levan-ACTA haciendo constar expre- samente el carácter de Junta de la actuación del socio único y la legiti - midad y demás

En resumen, todo lo expuesto

constit uye la base decisiva para el desarrollo de un derecho "practer legem", de la sociedad unipersonal, admitiéndose esta figura de la que quedarían por articular sus reglas de funcionamiento, que serían básica mente las mismas que para la Sociedad Anónima.

PUBLICIDAD: La sociedad unipersonal deberá acceder al Registro Mercan t i l. De hecho el R D. 671/ 1986, de 21 de Marzo sobre Regist ros Mercan tiles im pone al registrador la obligación de calificar General es el medio para la expre- los documentos que se le presenten y conocer todas las incidencias referentes a los mismos.

CONTABILIDAD: exigencia de

Limitación de autocartera

Se imponen además dos requisitos:

Junta bajo legitimación Notarial y como garantías adicionales: póliza de corredor de comercio acreditan do la adquisición de todas las acciopérdid as de la explotación. Est a tuida la Junta si concurre al acto el nes por un sólo socio sin nota relativa a una venta posterior y certificación del registro sobre ampliaciones de capital posteriores.

Fina lmen te, según entiende la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia, debe hacerse constar que la no admisión de esta figura, además de constituir, como y a hemos apuntado un grave factor de desaceleración económica, al desm otiv ar l a creac ión de n uev as empresas, resulta también una puerta abierta, en la práctica, a numerosos fraudes.

TIf. 457.48.88 - 207.38.20 FAX 207.14.57

C/ Nápoles, 272 - 4º 2ª BARCELONA

Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.

Deseo suscribirme a la revista espeializada ECONOMIST & JURIST por un período de un (1) año, al precio de 6.000 pesetas + el 3% de IVA

APELLIDOS

NOMBR E

CALLE ! PLAZA

NUMER O

PISO

CODIGO POSTAL

Autónomas

etc, es decir

Provincias.

CIUD A D

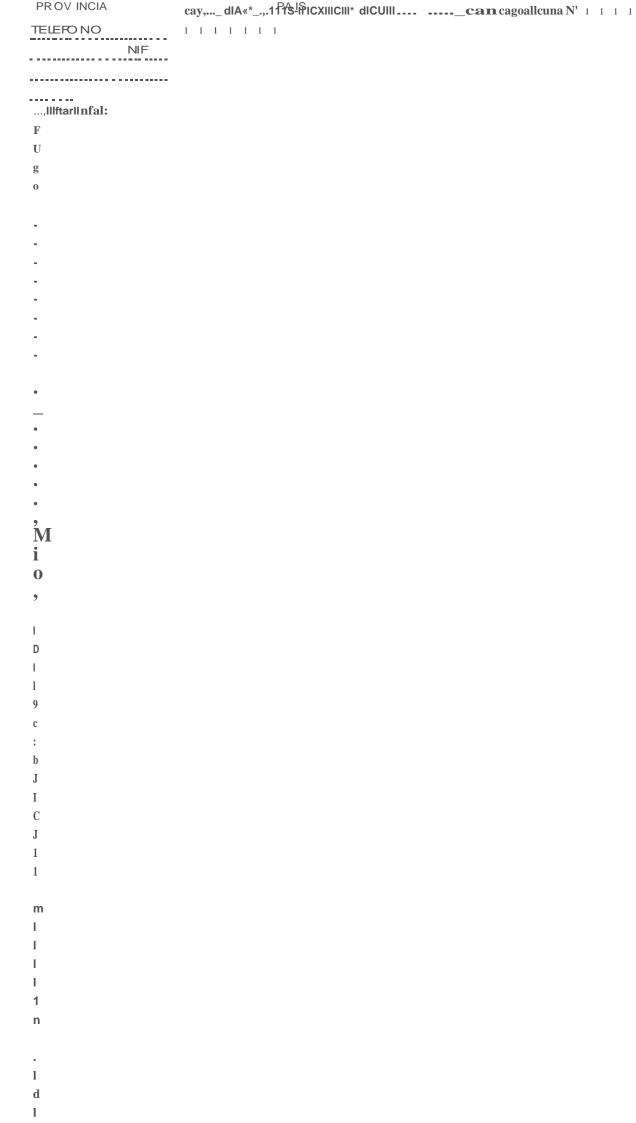
mal) como para aquéllas en que hay pluralidad de socios pero son testaferros (unidad material).

Para SANCHEZ CALERO, lo esencial no es la concurrencia física sino la voluntad expresada de constituir una sociedad por lo que el tes-

sociedad unipersonal constituiría así una "contradictio in terminis" pero no una "contradictio in substantia". La pluralidad de socios constituye pués una condición de la fundación de la persona jurídica corporat iva pero no es una condición de subsis-

---- С.

CD -



44

la Sociedad Anóni ma Unipersonal Pública. Se admite asimismo la fundación por Sociedad Anóni ma a siempre que ésta asuma la totalidad del capit al social. El accionista da social del capit al social del ser admitido por manifestar una volun tad real de fund ar una sociedad (en este sentido v id. art. 18.2 de la Ley). Así, parece pues posible admitir la fundación por un sociedad unipersonal y el principio

IIIIIIIaaIIII'D9dI8rJSra,

NIdHlllldlld 1 1 1 1 1



- X 	N'dlalll*B 1 1 1 1 1		Ama	\neg
77				
	JUL	IO, 1993	2	45
				-
			1	
d e				
0,0				
and teams in the		-		
			_	
				
<u> </u>				

11'1lllaIUCllllll

Doctrina Jurídica

Adecuación de la legislación y lucha contra el fraude en el tráfico inmobiliario

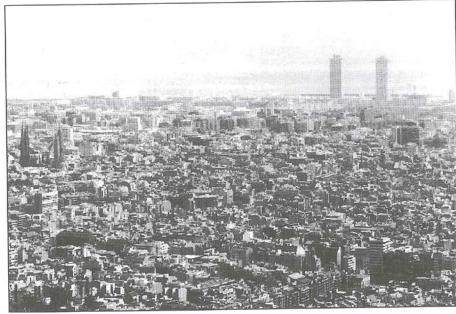
Dificultades en su aplicación

Actualmente en las relaciones que afectan a los bienes inmuebles, consecuencia de cualquier acto jurídico en el que deba otorgarse una escritura pública susceptible de ser inscrita en el Registro de la Propiedad, y a sea compra -v enta, grav amen etc., se está produciendo en algunos supuestos una cierta sensación de insegu ridad que puede tener su reflejo en la realización de cu alquier negocio derivado del tráfico comercial, unas veces mediante una acción fraudu lent a real izad a por parte de alguno de los intervinentes en la relación jurídica, otra consecuencia de las acciones de salvaguarda de unos derechos legítimos por parte de terceros ante el riesgo de ver desaparecer o alterarse de forma sustancial las garantías con las que estos contaban. Tanto una como otra son situaciones que repercuten en el resultado de actos jurídicos efectuados de buena fe.

Ganar prioridad en la inscripción

Esta situación ha obligado al legislador a la publ icación del Real Decreto 1558/1992 de 18 de Diciembre, el cual entrará en vigor el próximo d ía 18 de Junio y de acuerdo con la exposición de motivos, la finalidad es ganar prioridad en su inscripción en el registro de la propiedad por parte de las escrituras públicas que afecten a bienes inmuebles, y es precisamente esta prioridad que presupone que tiene el adquirente del bien inmueble, lo que debe mantenerse y respetarse, este actúa (o debería actuar) en base a una situación registra! de la finca en un momento concreto, previo a la formalización de la escritura pú-

En este Real Decreto, se pretende crear una relación beneficiosa "a



La finalidad de la nueva normativa es ganar prioridad en la inscripción de los bienes inmuebles

priori" para el buen fin de la in-(nueva redacción del art. 175.1 del Reglamento Notarial) de la finca.

Otro aspecto a destacar son los nuevos párrafos incorporados al art. 249 del mismo reglamento, en el que se establece que en el plazo de 5 días hábiles desde el otorgamiento cte la escritura, el notario tendrá a disposición del adquirente el docu-

Comentarios a la aplicación del Real Decreto 1558/1992

Al termin ar la lectura surgen dudas, precisamente consecuencia del redactado del Real Decreto 1558/1992, que hacen temer la ineficacia del mismo, al menos en la medida que presumo se pretendía.

JULIO, 1993

En priI?er lugar cuando se le/gi sla cripción registra!, como es la obh- presumiendo fraude en el trafico gación de obtener previamente (por inmobiliario, como en este.supuesparte del Notario) al otorgamiento to, el. d sponer l neces1d ad . e de la escritura de transmisión o gra- conocimiento previo de la s1tuac10n vamen de bienes inmuebles, infor- registra! por parte del notario y al mación del registro de la propiedad mismo tiemp? (art. 175 b Reglamento Nota ri al) establecer que cu ando el adqui:ene decla re su voluntad de prescmdir de tal mformación, el notario queda exento de su verificación. Me pregunto ¿en

> En el plazo de 5 días hábiles desde el otorgamiento de la escritura, el notario tendrá a disposición del adquiriente el documento

qué m omento se manifesta rá tal vol untad? ¿será en el momento de solicitar los servicios del notario? ¿Se prod ucirá en el acto de la firma?. Obviamente la manifesta-

ción de la voluntad de eximir de este requisito al notario se ha de manifestar previamente, ya que en el acto de la firma de la escritura pública el notario ha debido ya efectuar la gestión de obtención de información sobre la situación registra!. ¿El notario ha de presuponer una manifestación que le ha de ser ratificada en el acto de la firma?.

el registro de la propiedad es público y la inscripción de los documentos es constitutiva, estando obligados las partes en un acto de enajenación o gravamen de un bien inmueble a aceptar la situación registra! del bien consecuencia de esa publicid ad, no es menos cierto que un nucleo importante de los titulares de estos bienes inmuebles o solicitantes de los servicios notariales desconocen esta situación y por el acto de la un notario se consideran salvaguardados.

Si puede existir fraude y/o engaño por la parte enajenante ya que éste puede convencer al beneficiario de l a escritu ra de su bond ad, y si el leg isl ad or pretende precisamen te evitar este fraude, no sería tal vez más conveniente en aras a un mejor

Siel otorgamiento de la escritura es en plaza distinta, se obtiene mayor rapidez ya que la

presentación se efectúa el mismo día de la firma

Por otra parte, si bien es cierto que tráfico juríd ico y en evitación de situaciones fraudu lentas como ya han sido reconocidas, establecer que todos los casos la necesidad de la información registra! de la finca en los plazos que establece el Real Decreto, mediante nota simple del regi stro de la propiedad, que por cierto deberán inclu i r como es obvio, nota marginal de las escrituras presentadas al libro diario y pendientes de calificar e inscribir, manífest ando el notario la situación firma de un documento público ante registra! de la finca según la mencionada nota simple, no quedando condicionada la libertad de las partes para decidir el concluir o no el acto jurídico.

Art 249 del Reglamento

Otra de las reflexiones o dudas que

ción el mismo día de la firma, y en caso contrario de coincidencia de Notario y registro en la misma plaza, la presentación se produciría a los 5 días. Me temo que una vez más nos vamos a encontrar con una legislación que puede res u ltar inoperante al menos parci almente con los fines para los cuales se redactó, si bien es cierto que la disposición final primera autoriza al Ministerio de Justicía a dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y la ejecución del Real Decreto, éstas se deberán limitar a cuestiones tales como la Orden de 24 Febrero 1.993 (BOE 5 Marzo 1.993) en la que se establece que todos los registros de la prop iedad deberán dotarse de telefax. Temor que por otra parte es compartido por, al menos, algunos m iem bros de l os dos colect i v os más directamente afectados, nota-

rios V registradores.

redactado del art. 249 del Regl a-

mento Notarial, en el que se establece que en 5 días hábiles las escritu-

ras estarán a disposición del adqui-

rente. Sí partimos de la base que la

sobre bienes inmuebles en el regis-

tro de la propiedad es constitutivo,

que sucede en este plazgada tiempo que medía entre el de

la escritura pública y la presentación

en el libro diario. Si en este intervalo

de tiempo, mientras se esperaba la

entrega de esta escritura por parte

del notario se produce una presenta-

ción o inscripción que altere la situa-

ción registra! y perjudica al adqui-

Mayor rapidez

Porq ué no se puede incl u i r la

opción contemplada en párrafo 2º

del mismo art., que permite sí así lo

solícita el interesado, la presenta -

ción de la escritura en el registro de

la propiedad, mediante telefax, el

mismo día del otorgamiento, aun-

que tan sólo para los supuestos de

registros en plazas distintas a la del

De algun a form a se produce un

agravio comparativo, ya que en el

supuesto de registro de la propie-

dad en pl aza distinta, se obtiene

una mayor rapidez y mejor seguri-

dad jurídica, mediante la presenta-

otorgamiento de la escritura.

de los derechos reales

inscripción



se plantean en la lectura del nuevo

JULIO, 1993



Para evitar el fraude o engaño es conveniente exigir información registra! sobre la finca

Doctrina Jurídica

Los delitos cometidos contra los derechos de autor

Especial referencia a las «importaciones paralelas» de soportes fonográficos

A los efectos de dar una necesaria coherencia a nuestro derecho interno, va impracticable frente a los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país v principios de derecho comunitario vigentes por aplicación directa, la Ley 22/1.987 y la Ley Orgánica 6/ 1.987, ambas de 11 de noviembre, supusieron el asentamiento definitivo de la protección de los derechos de

En e l ámbito ju ríd ico penal, se abandona a nuestro entender la técnica de la Ley Penal en blanco (en éste sentido Quintero Olivares y Romero Casabona; pronunciándose en contra Arroyo, García R iv as, Rodríg uez hoy aplicables. Devesa), para adentrarnos en u na Ley penal que define " per se" las conductas sancionadas y las penas aplicables, si bien debiendo acudir a la normativa extrapenal (Lev de Propiedad Intelectual, Tratados Internacionales) a los efectos de interpretar los elementos normativos de los que v iene impregnada nuestra v igente regulación penal.

Tanto la Ley de Propiedad Intelectual, como los preceptos penales prom u lgados por la Ley Orgánica 6/1.987, no lim i tan como sujetos pasiv os ti t u l ares del bien ju ríd ico t u tel ado a l os autores en sent id o estricto, sino que crean los llamados derechos conexos y, consecuen temente protegen a los t i t u l'ares de éstos. Si bien, debemos avanzar, que la imposi bilidad de otorgar protección penal por vía de analogía -y por a los suyos propios, sin que en nintanto ampliar la esfera de lo prohibido-, nos impide ubicar en sede penal a cualesq u iera sujetos pasi v os, debiendo de 1 imitarnos a aquel los expresamente citados por n ues tra norma, cuales son los autores de una parte, y dentro de los titulares de los derechos conexos, de forma exclusiva a los intérpretes y ejecutantes (en éste sentido Quintero Olivares),

debiendo de excluirse por tanto, en mas, beneficiándose de la protección respeto al pri nc ipio de legal idad constitucional a los demás titulares, entre ellos a los productores de fonogramas (en este sentido Ferré Olive, en contra Jorge Barreiro y Carmona Salgado).

Esta distinc ión entre derecho de autor en sentido estricto y derechos conexos al autor no resulta baladí, ni por supuesto es invención programática de nuestro legislador, sino que obedece a un proceso de adaptación de nuestra legislación interna a los principios reguladores que surgen de los diversos Tratados Internacionales

Tratados Internacionales

Efectivamente, ya el Con venio de Roma de 26 de octubre de 1.961 dota clara preeminencia a los derechos de autor frente a los derechos conexos, ción del derecho de autor en relación a las obras literarias y artísticas. En consecuencia, ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada como lesiva a dicha protecc i ón". Siendo part icularmente esclarecedor asimismo el artículo 10 de dicho Convenio, al circunscribir el derecho de prohibición que se concede a los Productores de Fonogramas gún caso dicha prohi bic ión pueda alcanzar a fonogramas lícitamente

El mismo "iter argumentativo", se asienta en el Convenio de Ginebra de 29 de octubre de 1.971, -lex especialis, respecto al de Roma referenciado-, cuyo núcleo material se encuentra en sus artículos 2 y 3. El primero define quién es productor de fonogra-

de la norma internacional y en qué circunstancias, mientras que el artículo 3 enumera los mecanismos a los cuales los Estados firmantes pueden recurrir en orden a dicha protección; siendo a la postre la protección esencial los llamados actos de piratería, en el sentido de copia no autorizada o "duplicate".

En suma, los derechos conexos, en cuanto der i v ados del derecho del autor, no pueden ir más allá del derecho originario, debiendo aceptar las consecuencias derivadas de su ejercicio por el autor. Como dijo FROTZ "El autor, y los productores, editores o distribu idores, están en el mismo barco, pero a l os autores debe de reservárseles las meiores plazas".

Llegado a este pu nto, es hora de adentrarnos en el ámbito de protección jurídico-penal de los Derechos de Autor, para centramos en el objeto así en su artículo primero señala que del presente trabajo, cual es la averi-"La protección establecida en la preguación de si la mera comercializasente Convención deja inalterados y c i ón de soportes fonog ráficos en no afecta en ningún caso a la protec- ámbito extrafronterizo, puede considerarse ilícita y/o sancionable penal-

Ambito jurídico-penal

Para ello, debemos de centrarnos en el artícu lo 534 bi s.a) de n uest ro vigente Código Penal, el cual castiga con pena de multa "al que intencionadamente reprodujere, plagiare, distribuvere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica o su transformación o una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".

En su segundo párrafo; "La misma

pena se impondrá a quien intencionadamente importare, exportare o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización", dicho precepto castiga una conducta postdelictual, con la cláuque no debe

sula general del encubrimiento, ni con la del encubrimiento con ánimo de lucro (receptación), suponiendo. "per se" una antijuricidad

y siendo su formulación, u n claro avance en el criterio hasta hov sostenido por la doctrina en España, de una tipificación por "numerus clausus" de las conductas postdelictuales.

¿Qué es lo que el legislador pretende castigar a través de éste segundo párrafo? Dos únicamente son las respuestas posibles: a) Se castiga la utilización de ejemplares plagiados o fraudulentos; o b) Que se castiga la utilización de ejemplares producidos legít i mamen te, pero faltando u na autorización del titular referida a estas actividades de comercialización o almacenamiento.

A nuestro entender, solo la primera tiene sentido, y ello por mú lt iples

1) No tiene sentido castigar con la misma pena, el plagio de una obra y la comercialización de la lícita o legítimamente producida. Y no tiene sent ido, tan to desde u na perspecti v a polít ico-criminal, como desde u n análisis lógico-conceptual de los Tratados Internacionales reguladores, los cuales, nos dan el marco o fundamento teleológico de lo lícito o ilícito, y cuya finalidad es en suma, la lucha contra el plagio en clara protección de los prod uctores de fonogramas, más en ningú n caso la instauración de un monopolio comercial de dichos productos en el mercado.

2) Una interpretación lógico-sistemática nos pone de manifiesto, que el legislador a l redact ar el párrafo segundo del artículo 534.bis.a) tenía in mente las copias o ejemplares ilícitos, como lo demuestra la cualificación o agravante incluida en el articulo 534 bis a), 2b), en virtud de la cual se aumenta la pena en función de que la cantidad de las copias ilícitamente producidas o el valor de las mismas, posean especial trascendencia econó-

3) Un nuevo argumento, en favor de la postura aquí mantenida, nos la da a nuestro entender- la adecuada interpretación del término "autorización" del articulo 534 bis a) segundo párra-

fo, el cual no puede ni debe interpretarse como una advertencia inútil por ser las copias ilícitas obviamente no autorizadas; sino en el sentido de que dicha autorización transforma en lícita y por tanto no punible a la conducta de "importar, exportar o almacenar" dichas copias, pues no olvidemos que el titular de derechos conexosiaponeeitalerechoendsobroichighas

le entreguen como parte de la reparación del daño causado (articulo 124.3 de la Lev de Propiedad Intelectual), con independencia -por supuesto- del régimen general del comiso del articulo 48 del Código Penal.

En tal supuesto, la "autorización" del segundo párrafo afectaría a los actos de importación, exportación o almacenamiento, subsistiendo, por supuesto, la cond ucta inicial ilícita del plagio, piratería o usurpación, a solventar de acuerdo con la legislación del país en la que se hubiere llevado a cabo la acción antijurídica, en su caso.

Dicha perspectiva internacional, nos adentra aún más en la razón de nuestra postura, pues en caso contrario, al no existir una legislación un iforme en materia de actos postdelictuales en derecho comparado, podrían darse importantes lagunas punitivas en esta materia, y quedar impunes conductas de importación o exportación vincu-1 ados a actos de piratería, además -por supuesto- de que nuestros Tribunales no serían competentes para juzgarlas, por la vigencia del principio de territorialidad en derecho Español (art.23 LOPJ).

En consecuencia, no estamos ante una du plicidad de conductas pu nibles, quedando el segundo párrafo del artículo 534 bis a) subordinado al primero de dicho precepto (en este sentido Circu lar de la Fiscalía del Tribunal Supremo nº 2/1.989, de 20 de abril).

4) Quizás y, como más importante, cuando acudimos a la interpretación de los elementos normativos del tipo, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual y Tratados Internacionales v. en concreto, al concepto de distribución, debemos de necesariamente apuntar al artículo 19 de la Lev de Propiedad Intelectual "Cuando la distribución se efectúe mediancia, si un almacenista Español, adquiere a otro extranjero o a un licen-

ciatario no nacional u nos soportes fonográficos lícitos, dicha venta extingue cualesquiera derecho de control comercial del productor o sus licenciatarios. No pudiéndose afirmar chorenes en esede penalueur derdere

originario del autor, pues ambos se agotan con la primera venta.

Importación de obras ilícitas

Concluyendo pues, tanto el tipo básico, articulo 534 bis a) como el agravado del 534 bis b) protegen aspectos personales y patri moniales de los derechos de autor. En el tipo básico se intenta proteger el plagio. Respecto a los intereses patrimoniales tutelados, se sancionan algunos derechos de explotación (artículos 17 a 23 de 1 a LPI), sumándose a éstos otros comportam ientos que s i bien no constituyen per se "derechos de explotación" sí se relacionan directamente con estos, cuales son la importación, exportación y almacenamiento de obras ilícitas (Ferré Olivé en el m ismo sentido Qu intero Oliv ares Gómez Benitez, Fiscalía del Tribunal Supremo).

Un último comentario qu izás nos resta, y es el que deriva de nuestra ubicación como Estado en el ámbito de la Comunidad Económica Europea. Este hecho nos marca unas finalidades v prioridades, entre las que se encuentra "la prohibición de eliminar, restringir o desv irtuar la libre competencia por medio de acuerdos pri v ados o práct icas concertadas paralelas, así como la prohibición de abusar de posiciones de dom inio alcanzadas en el mercado" (FONT GALAN). Naciendo, en su ma, u n Derecho de la Competencia, que tanto nuestro Estado como los países miembros de la CEE, han declinado su soberanía programático-legislativa en favor de esta Comunidad.

Por tanto, cualquier restricción a las actividades comerciales entre los Estados, enarbolando como bandera justificadora la protección de los esfuerzos creadores (derechos industriales o de autor), no deia de ser una posición dominante abusiva de quien la pretende, combatida hasta la saciedad por la legislación y Jurisprudencia Comunitari a (En este sentido . te venta, este derecho se extingue a Caso Deutsche Grammophon, o Senpartir de la primera", en consecuentencia del TJCE de 20 de enero de 1.981).

Doctrina Jurídica

Camil Raich Puyol

Administr adores y socios de compañías mercantiles

Relación laboral o mercatil. Cotización

Introducción

El régimen de la Seguridad Social en que deben cotizar los socios y los miembros del Organo de Adminis tración de las sociedades mercantiles, ha sido una materia sobre la que la Administración no ha podido mantener un criterio definido y uniforme. Entiendo que ello ha sido debido pri ncipal mente, a la dificultad de definir la naturaleza de la relación, y a las consecuencias que para la Tesorería de la Seguridad Social tiene la ubicación de los socios y administradores de las compañías mercantiles en el Régimen General o bien en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La Administración, a partir de la Resolución emitida por la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 23 de junio de 1.992, se ha propuesto clarificar los criterios que venía manteniendo hasta el momento en cuanto al régimen en el que deben cotizar las personas que prestan sus servicios en compañías de las que sean socios y/o ostenten el cargo de Administrador o miembro del Consejo de Administra ción. En la mencionada Resolución, se señala que la causa de la misma se halla en los pronunciamientos juris -

La administración va clarificando los criterios que mantenía para la cotización de los que trabajan en empresas de las que son socios

prudenciales que sobre la materia se han venido produciendo.

Jurisprudencia

La jurisprudencia, consolidada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de septiembre de 1.988, ha definido la naturaleza de la prestación de servicios realizada en las bros del órgano de administración, no por la clase de funciones o faculmiembro del Organo de Administración con la empresa.

o vínculo entre trabajador y comparemunerabilidad, ajenidad y dependencia. De dichos requ isitos, son estos dos últimos principalmente en los que se basa la jurisprudencia para excluír o incluír la relación de trabajo en el ámbito laboral.

1.- Nota de ajenidad

La jurisprudencia excluye la nota de ajenidad, y con ello la consideración de la relación como laboral, en los casos en que el socio aporta su trabajo como aportación societaria, o bien en los casos en que el socio-trabajador es ti tular mayori tario del capital social de la compañía, como señala el Tribunal Central de Trabajo en su Sentencia de 9 de marzo de 1.988 "...que no existe la nota de ajenidad cuando la entidad societaria capitalista es en su mayor parte de la titularidad del alto directivo."

2.- Nota de dependencia

La nota de dependencia, no existe en la prestación de servicios que realiza un Administrador o un miembro del Consejo de Administración que

ejerza funciones ejecutivas, ya que en dichas situaciones no existe un órgano superior bajo la subordinación del cual se actúe, sino que las personas integrantes del órgano de administración actúan en virtud de sus propias facultades y bajo su responsabilidad. Así se señala entre otras en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y compañías por sus socios y/o miem - León en la que se resuelve la desestimación de la afiliación como Alto Cargo en el Régimen General de la tades que ostenta la persona, sino a Seguridad Social, de un trabajador, partir fundamentalmente del carácter socio y Administrador único de la del vínculo que une al socio y/o compañía "... ante ello (el ejercicio de las facultades de Administrador) mal puede hablarse de dependencia Para que la prestación de servicios alguna frente a los superiores órgase entienda como laboral, la relación nos de dirección, exigencia ineludible en toda relación laboral aún espeñía deberá contener los requisitos de cial al encamar el recurrente el superior órgano de gestión, dirección y representación social".

En esta materia es importante analizar la figura del Consejero Delegado, ya que debido a su condición de apoderado del Consejo de Administra ción se hace difícil el decidir si la naturaleza de la prestación es laboral o mercantil, va que el ejercicio de las facultades lo delimitan como Alto Cargo (relación laboral) pero el carácter de miembro del Organo de Administración configura la relación

No hay «ajenidad cuando la entidad societaria capitalista es, en su mayor parte, de titularidad de un alto directivo»

como mercantil.

La jurisprudencia, resuelve la situación en base al vínculo a partir del cual se estructura la delegación de facultades por parte del Consejo de Administración. El Tribunal Supremo, en la Sentencia ya mencionada de 28 de septiembre de 1988 resuelve "a) Toda la actividad de los Consejeros, en cuanto a administradores de la sociedad, está exclu ída del ámbito de la relación laboral b) La comisión ejecutiva y los Consejeros Delegados, siguen realizando funciones que les son propias (de naturaleza mercantil) c) En cambio en el apoderamiento a cualquier persona ajena al Consejo, se establece una relación laboral de carácter especial, como Alto Directivo".

En resumen, si el Consejero Delegado lo es en virtud de su cargo de miembro del Consejo de Administración, la relación será mercantil, no obstante si la persona en la que se deleguen facultades del Organo de Administración, no es miembro del mismo, la relación será laboral de Alto Cargo.

Conclusión

Con el fin de clarificar lo anteriormente comentado, paso seguidamente a analizar de forma breve, algunos de los casos más comunes con los que podemos encontrarnos, así como la situación en que se encuentran las cotizaciones realizadas en un régimen incorrecto.

1.- Comentario sobre el régimen correcto de afiliación de los socios y /o miem bros del Organo de Administración, a partir de situaciones concretas.

Sin ánimo de intentar contemplar las múltiples posi bilidades que la realidad puede ofrecer sobre el tema, y teniendo en cuenta que la interpretación que se hace de los mismos no es pacífica, intentaremos seguidamente analizar alguna de las situaciones que pueden ser más comunes:

a) Trabajador que ostenta la titularidad del 50% o más del capital social de la compañía. Deberá cotizar en el Régimen Especial de Autónomos, pues debido a la titularidad del capital social, su relación de trabajo no puede ser considerad a por cuenta

b) Administrador único solidario de la compañía. Deberá cotizar en el

Toda actividad no

gerencial o ejecutiva supone una relación laboral normal, con lo que cotizará en el régimen general

Régimen Especial de Autónomos, pues debido a que no está sometido a las órdenes de ningún cargo con categoría superior, su relación laboral no puede ser considerada como depen-

c) Miembro del Consejo de Admi nistración que además es Consejero Delegado v que realiza labores gerenciales y ejecutivas. Deberá cotizar en el Régimen Especial de Autónomos pues debido al vínculo que le une con el órgano de Administración se entiende que no existe en la relación de trabajo, el req u isito de dependencia.

d) Miembro del Consejo de Administración que tan solo ejerce funciones consultivas. Al no ejercer facultades ejecutivas, no deberá cotizar a la Seguridad Social en régimen alguno. Si además, de su actividad como mero Consejero (con funciones consultivas), ejerce un trabajo específico en 1 a empresa, que no pued a entenderse como una activ idad gerencial o ejecutiva derivada de su vinculación con el órgano de administración, nos encontraremos con una relación laboral normal, (con los requisitos de ajenidad, dependencia y remunerabilidad) que deberá cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social.

En el apoderamiento a cualquier persona ajena al Consejo, se establece una relación laboral de carácter especial, como alto directivo

2) Cotizaciones realizadas con anterioridad en el Régimen Gene-

Actualmente, podemos encontrarnos con multitud de situaciones en las que personas que debían cotizar en el Régimen Especial de Autónomos, vienen cotizando en el Régimen General. En estos casos, existe el importan te riesgo de que en el momento de solicitar cualquier prestación derivada de su acción protectora (pe. desempleo) sea ésta negada por la Entidad Gestora, y ratificada posteriormente dicha resolución por la jurisdicción laboral al no existir relación laboral por cuenta ajena.

Respecto de las demás prestaciones fuera de la prestación de desempleo (pe. jubilación), y en la medida en que hubiera correspondido cotizar por su actividad en el Régimen especial de Autónomos, cabría la obtención de dichas prestaciones.

Por todo ello, entendemos que debido a que la cotización realizada en un régimen equivocado, no ha sido realizado con mala fe ni ánimo fraudulento, ni ha supuesto u n perju icio económico al Sistema de la Seguridad Social (al contrario, ya que se han pagado conceptos como el desempleo que no deberían haberse satisfecho), y ello unido al hecho de que las propias Entidades Gestoras aceptaron en su día la afiliación al Régimen General como correcta, y han venido aceptando a su vez l as cotizaciones, supone que presumiblemente, para el caso de que se devengara el derecho a subsidio o prestación (suscepti ble en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) se produciría si se hu biera cambiado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el cómputo de las cuotas reali zadas en los diferentes regímenes de la Seguridad Social.

Dicha interpretación, ha sido ratificada por la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona, que en la Resolución de fecha 23 de junio de 1992 señala, "Cuando como consecuencia de los criterios interpretativos emanados de la presente resolución procediera el cambio de régimen de los interesados, el alta y las cotizaciones efectuadas en el anteri or régi men tendrá plena validez a efectos de la acción protectora del régimen que proceda".

Doctrina Jurídica

Alfonso de Ochoa Martínez

Las Agrupaciones de Interés Económico en el marco del transporte marítimo

Introducción

Con la entrada en vigor del mercado único europeo, el reto de la competitividad ha pasado a ser la principal preocupación de las empresas, cualquiera que sea el ámbito en el que se desenvuelva su actividad. Se trata de prod ucir u ofrecer u n producto al menor coste posible, con la máxima calidad y en condiciones que posibiliten la competitividad con el exterior y, porqué no, también en el interior. El sector marítimo, en ningún caso, puede ser ajeno a este proceso, por ello es de aplaudir la iniciativa tomada por un grupo de empresarios canarios que han decidido unirse con el fin de solucionar los problemas que tienen individualmente para el transporte de sus productos a la península y al exterior.

Se establece, con carácter general, que la competitividad de una empresa consiste en la capacidad de hacer de su producto la mejor alternativa posi ble para los consum idores o usuarios. De igual forma, se argumenta que las fusiones o uniones de empresas mejoran su competitividad al permitir una mejor utilización de sus recursos. Y, precisamente a este

asociativa que nos proponemos analizar en este artículo -la Agrupación de Interés Económico -. Analizando no sólo las características generales de este tipo de sociedades, sino también las características y requisitos que deben cumplir específicamente aquellas agrupac iones que pretendan dedicarse al transporte marítimo de mercancías, poniendo especial énfasis en su relación con las conferencias marítimas existentes en España y, los requisitos legales que ordenan el tráfico marítimo a los que acaso deberán someterse.

La Agrupación de Interés Económico (AIE). Las Agrupaciones de Interés Económico se encuentran reg u ladas en España por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico (B.O.E. núm. 103, de 30 de abril)Cl).

De la lectura de la propia Ley (arts. 1 a 4) se puede dar la siguiente definición de la AIE; figura asociativa creada con el fin de facilitar o desarrollar la actividad de sus miembros, por tanto, tiene carácter auxiliar, lo cual implica la imposibilidad de sustituir la actividad de sus miembros. permitiendo cualquier actividad vin-

orden de ideas responde la figu ra culada a la de aquéllos que no se oponga a esa limitación.

> De la definición, se pueden extraer las siguientes características que reúne toda AIE: se trata de una técnica jurídica -societaria que tiene por objeto la consecución en común de un beneficio también común; y, se trata de u n t i po societario que no tiene ánimo de lucro.

> La finalidad de la AIE consiste en facil itar el desarrollo o mejorar los resultados de la activ idad de sus socios. Se limitará exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen los socios, sin que la Agrupación pueda tener participa ción, dirigir ni controlar las actividades de sus socios ni de terceros.

> En lo que hace referencia a la cualidad de los socios, éstos serán necesariamente personas físicas o iurídicas que desempeñen actividades empresariales, agrícolas o artesanales, entidades no lucrativas dedicadas a la investigación y quienes ejerzan actividades liberales.(2)

> La cond ición de socio de la AIE conlleva una serie de derechos y obligaciones. Entre los derechos de los socios, además de los políticos, destacan los económicos que, entre otros

(1) La AIE es una nueva forma societaria que tiene como antece- | de la sociedad colecti va, estableciendo el régi men de éstas como dente la vieja figura de las Agrupaciones de Empresa reguladas primero por la Ley 196/1963, de 28 de diciembre, sobre Asociaciones y Uniones de Empresas (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre de 1963) y en segundo término por la Ley 18/1982, de 26 de mayo, de régimen fiscal de Agrupaciones y Uniones temporales de Empresas y de Sociedades de desarrollo Local (B.O.E. núm. 137, de 9 de ju nio de 1982). No obstante el an tecedente más próxi mo lo consti tuye el Reglamento (CEE) 2137/85 del Consejo, de 25 de julio, que regula Ja figura de la Agrupación Europea de Interés Económico (A.E.LE.) que habi lita a la legislación de los Estados miembros para el desarrollo o concreción de sus propias previsiones. De este modo España promulgó la Ley 12/1991 que supone la adaptación de la legislación española al citado Reglamento comunitario.

No obstante, la configuración de ambas figuras no coincide plenamente. Así, mientras la figura europea se inspira en el derecho francés que había creado una figura del mismo nombre aunque mante niendo su autonomía de otros tipos societarios, la figura española aun respondiendo a los mismos objetivos, se entronca dentro del marco

supletorio, del mismo modo que la figura española tiene carácter supletorio respecto de la europea. Con ello se logra, como establece el propio Preámbu lo de la Ley, una mayor economía normativa y una mayor cohesión de nuestro derecho de sociedades, perfilando un régimen completo de la Agrupación de Interés Económico, que es especialmente necesaria pues se trata de una figura totalmente nueva dentro de las formas asociativas.

(2) La condición de socio de la AIE se adquiere originariamente a través de la participación en la celebración del contrato de agrupación y, con posterioridad, por la modificación del mismo, bien como consecuencia de la transmisión de la participación de un socio a un tercero, bien por el acuerdo de admisión de un nuevo socio en la AIE por unanimidad de los socios. La modificación del contrato de agrupación deberá elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil y posterior publicación en el BORME. Por tanto, únicamente se adquiere la condición de socio, a todos los efectos, una vez cumplidos todos los requisitos legales.

beneficios obtenidos de la actividad de 1 a AIE, derecho a transmitir su partic ipación y a obtener el v alor correspondiente a la misma, y a participar en el patrimonio resultante de la liquidación.

Por otra parte, las obligaciones principales de los socios son: a) Responder personal, solidaria v subsidiaria mente por las deudas de la AIE. pudiéndose limitar

deudas a algu nos socios med iante acuerdo específico con el acreedor, pero es ilícito el pacto de limitación general de responsabi lidad: Desem bol so de 1 a aportac ión; y, finalmente, c) Contribuir a la eliminación de l as pérd idas, por partes iguales o en la forma convenida en el contrato de agrupación.

aunq ue 1 a A IE no tiene ánimo de lucro, el ejercicio de u na actividad económica llevará a la obtención de ingresos y a la realización de gastos, prod uciéndose en consecuencia un otras condiciones convenidas en lo resultado negativo o positivo.

En el caso de que se produzcan beneficios, estos serán imputados a los socios en la medida determinada en el contrato de Agrupación o, en defecto de previsión del mismo, por partes iguales. Sin embargo, será nul a, por leonina, la claúsu la que exclu va a cualqu ier socio de toda participación en los beneficios. (3) Relación Aire-Conferencias marítimas. En España existen únicamente dos conferencias marítimas: COPE-CAN, para el tráfico entre el archipiélago canario y la península y, BALCON para el tráfico entre las islas Baleares y la Península. Pero, el tema que interesa es averiguar si en

son: el derecho a partici par de los su relación con una Agrupación para el transporte de mercancías por vía marítima, por un lado, se puede llegar a calificar 1 a actuac ión de 1 as conferencias españolas como monopolística y, por otro lado, si la actuación de la AIE puede llegar a considerarse como una práctica de competencia desleal respecto a las conferencias marítimas.

La Lev 27/1992, de 24 de noviembre de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (B.O.E. núm. 283. de 25 de noviem bre de 1992). en su artículo 84, entiende por conferencia marítima "un grupo constit uido por dos o más empresas navieras que efectúan navegaciones de línea regular de cabotaje, exterior o extranacional en una o varias rutas parti culares, dentro de determinados lími-En cuanto al régimen económ ico, tes geográficos, y que han concertado u n acuerdo cualq uiera que sea su nat u raleza, dentro de cu yo marco actúan ateniéndose a unos fletes uniformes o comunes o a cualesquiera que respecta a la navegación".

Todo y que se trata de una definición m u y precisa de lo que es u na conferencia marítima, el legislador no hace ninguna mención en dicho precepto ni en ningún otro de cual es la finalidad perseguida con la constitución de dichos grupos de empresas nav ieras o conferencias. Así, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la finalidad de las conferencias marítimas, consiste primordial mente en la eliminación de la competencia, tanto externa -por servicios regulares no integrados en las mism as y y servici os no reg u lares-, como interna -por los miembros que las componen_(4). Unicamente en el

párrafo segundo del citado artículo, la Ley hace una breve referencia a este tema diciendo que las conferencias deben someterse a la competencia de los servicios regulares no integrados en las m ismas, así como de los servicios no regulares para evitar que "..en ningún caso, la actuación de las conferencias pueda suponer la eliminación de la competencia sobre partes esistanciales del mercado en el

crear situac iones dom inan tes por parte de las empresas integradas en las mismas".

Pues bien, se puede concluir, según GONDRA (5) que, en líneas generales, el objetivo de las conferencias marítimas consiste en la supresión de la competencia a través de la consecución de una posición monopolísti ca en el mercado, como medio para lograr u na racional regulación del tráfico regular de línea.

La eliminación de la competencia externa por las conferencias, que es la que interesa analizar en estas líneas, se consigue, generalmente, mediante las siguientes prácticas: limitación de la admisión de nuevos miembros; la celebración de acuerdos vinculatorios o acuerdos de fidelidad con los cargadores, que obl igan a éstos a guardar fidelidad a la conferencia, con las líneas que la integran: v. finalmente, mediante la puesta en práctica por las navieras conferenciadas de una política de dumping, ofertando precios más bajos mediante el empleo de fighting ships (6) en la zona donde se detecta la presencia perturbadora del outsider (competidor). Cons igu iendo de este modo ostentar una posición de predominio, cuando no monopolística.

(3) MASSAGUER, J., "La Agrupación de Interés Económico . Un | primer comentario de los aspectos jurídico -societarios de la Ley 1 2/199 1, de 29 de abri l", RG D n úm 564, septiem bre 1 991, pág 7.664. En cuanto a la exigencia de imputación directa de los resultados a los socios dice que "no puede ser interpretada en térm inos absolutos o materiales, como ineludible obligación de entrega efectiva a los socios de la parte correspondiente en el excedente. Nada impide que ésta quede en la AIE como contribuciones destinadas a satisfacer las necesidades financieras de la AIE en el desarrollo de la actividad de cooperación o incluso como fondos propios atesorados, siempre que sea razonable y no implique un fraude de ley". Por tanto, los beneficios no siempre deben ser repartidos entre los socios. sino que pueden utilizarse como una forma de autofinanciación.

En este punto, formas de financiación de la AIE, además de las reguladas por la propia Ley; esto es, aportaciones a capital, contribuciones para la cobertura de pérdidas y, la eventual existencia de cuotas de financiación el autor menciona otros mecanismos, deducidos del plan normativo de la Ley y del Derecho supletorio que dice, son: "como modalidad de financiación interna, la AIE dispone de la posibil idad de atesorar beneficios en reservas o remanente a cuenta nueva. Como modal idad de financiación externa, la AIE puede

aumentar el capital mediante modificación del contrato de agrupación -si previamente se ha fijado- y emitir obligaciones . A falta de una prohibición de recurri r al ahorro públ ico -como Ja que pesa sobre la AEIE-, la AIE tiene reconocida la posi bi l'idad de emitir obligaciones (art. I de la Ley 21 1/1964, de 24 de septiembre, sobre emisión de obligaciones por sociedades colectivas, comanditarias o de responsabil idad limi tada, por asociaciones y otras personas jurídicas, Boletín Oficial del Estado núm 3 1 1, de 28 de diciembre de 1964) por un importe que no podrá superar la cifra de capital social desembolsado y, en caso de que no se haya fijado, el valor de su

- (4) Esta finalidad va fue puesta de manifiesto por la propia Royal Com ission on Shippi ng R ings, que daba la siguiente defin ición : "una combinación más o menos cerrada de empresas de navegación con el fin de regular o restringir la competencia en el transporte en una determinada ruta o rutas".
- (5) GON DRA ROMERO, J.M. "Las conferencias marítimas ante el derecho de la competencia", ROM núm . 1 13, jul io-septiembre 1969, pág. 346.

Desde este punto de vista y, tomanmencionadas anteriormente, todo y escudarse en la racional regulación mercancías, convirtíendose así en del tráfico regu lar de cabotaje que supone el tráfico conferenc iado, parece que en estos tráficos nos encontramos ante un monopolio de las conferencias marítimas que operan en este área. No obstante, debemos matizar un poco más esta afirmación, ya que en el caso español no podemos habl ar propi amente de prácticas monopolísticas, sino que los excesos que la práctica de las conferencias han deparado respecto a los usuarios, frente a los cuales no han tenido defensa alguna, provoca que el servicio prestado por las conferencias puede cal i ficarse com o monopolístico todo y que en el fondo no se trate de u n m onopol io. Las razones que apoyan esta afirmación, son: por un lado, la protección que de ambas conferencias hace la Dirección General de Marina Mercante. Y, por otro lado, las quejas que reitera damente han puesto de manifiesto los usuarios del servicio por la falta de racionalización de los itinerarios y frecuencias de las salidas estableci das por las navieras conferenciadas, sin que en ningún caso hay an sido josas. escuchadas sus voces por la conferencia, debiendo añadir, en el caso de Canarias, la imposición unilateral de las tarifas por la conferencia (siempre al alza y desde el punto de vista de los usuarios totalmente injustificadas), lo que ha provocado finalmente la creación por un grupo de usuarios de una AIE, con el objeto de proteger

sus intereses frente a los abusos de las navieras conferenciadas.

no la acción de una conferenci a para las conferencias marítimas internos -existencia de u n grupo todo en una situación como la actual por las líneas que componen la conpuede llevar a la definitiva desaparición de la conferencia, ya que son los propios usuarios de dichas líneas los do como base las zonas geográficas que deciden agruparse para realizar ellos mism os el transpor te de las

> La creación de una AIE, sobre todo en Canarias, puede suponer la definitiva desaparición de las Conferencias

outsiders frente a la conferencia (8). los propios socios de la AIE- que en en general. ningún caso será tendente a la conferencia por varias razones, pero, sobre todo, porque la AIE le puede ofrecer unas condiciones para el transporte de sus mercancías mucho más venta-

Las ventajas que ofrece la creación de una AIE para el transporte marítimo de mercancías en contraposición al tráfico conferenciado son muchas, destacando sobre todas las siguientes: la ventaja principal, que además coincide con lá finalidad perseguida por cualq uier outsider, consiste en hacer una función de filtro regenera-

dor o punto de referencia en el que debe fijarse la conferencia, haciendo La consecuencia fundamental que de moderador de los excesos llevados a cabo por las conferencias y, depende, por u n lado, de factores supone la creación de una AIE, sobre evitando de este modo cualquier tendencia monopolística que pudiera -crisis económica, problemas inter- surgir en el seno de las mismas. Pero, nos entre los miembros de la confe- no es ésta la única ventaja, también rencia, así como el descontento de se pueden c it ar l as s igu ientes: a) los usuarios por el servicio prestado supondrá una creciente mejora del transporte marítimo con la península, ferencia -, sobre todo en Canarias, por cuanto 1 os usuarios no estarán sometidos a unos itinerarios y a unas tarifas preestablecidas, teniendo los socios en todo momento a su disposición barcos para el transporte de sus mercancías a cualqu ier punto de la península (cuanto mayor sea la flota de la AIE, tanto de buques en propiedad como fletados, mejor servicio podrá prestar a sus socios); b) reducción en los costes del transporte, ya que son los socios de la AIE (usuarios), los que determi nan el preci o del transporte (con la única limitación impuesta por el "hire" que la AIE pague por los buques fletados), en contraposición a las conferencias en que son las líneas quienes imponen las tarifas a los usuarios, todo lo cual que incidirá directamente en los precios de los productos, favoreciendo de esta forma a la competitividad exterior de las empresas establecidas A demás, se tratará de u n outsider en las islas y a la distribución interna activo, pues los suyos serán actos de de 1 os prod uc tos; y, c) esta mejor estricta competencia en lo que a la asignación de recursos prod ucirá un conferencia se refiere, ya que tendrá beneficio apreciable no sólo para los un volumen de carga relati vamente comerciantes, sino también para los invariable, así como una clientela - consumidores y la sociedad canaria

Por todas estas razones las conferencias marítimas tendrán muy difícil impedir o restringir la competencia externa que supone la AIE, teniendo como única forma de lucha, a nuestro modo de entender, la denuncia de la realización por la AIE de práct icas que suponen competencia desleal o bien, la realización por ésta de tráfico regular de cabotaje sin autori zación adm inistrat iv a ante la Dirección General de Marina Mercante. Ante esta situación, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿realiza la AIE tráfico regular de cabotaje debiéndo-

- (6) La utilización de fighting ships suele hacerse cuando una conferencia quiere expu lsar de una zona determ inada a un com peti dor molesto o bien, cuando uno o varios "outsiders" desean el iminar o debil itar la conferencia en un momento en que la coy untura no es totalmente favorable o cuando surgen disensiones internas susceptibles de hacer desaparecer la conferencia.
- (7) HERNANDEZ IZAL, "El flete en el transporte marítimo. Contratación y tarifación", Ed. Librería Bosch, Barcelona 1986, pag. 53.

(8) Afirmación que se desprende de la propia definición que de "outsider" acostumbra a darse, entendiendo por tal servicio aquel que se presta fuera de la conferencia, y que sirve los intereses de una clientela, sensiblemente coincidente con la de la conferencia, tanto geográfi-

En el caso que nos ocupa, la coincidencia de clientela no es sensiblemente coincidente, sino que es idéntica, pues se trata de una parte de la clientela que, descontenta por el servicio ofertado por la conferencia, decide realizar ella misma el servicio, creando para ello una AIE.

Economist & Jurist

se someter, por tanto, al requisito de de la activ idad concurrencial". Por combinación de la noción de navegaprevia autorización administrativa?. La respuesta en principio es negativa. normas jurídicas que regulan la orde-En cuanto a la consideración de las prácticas realizadas por la AIE como de competencia desleal o no frente al las conferencias marítimas. El punto al o no. de partida debe ser, en todo caso la Constitución Españ ola que, en su artícu lo 38 reconoce el derecho o princi pio de la libertad de empresas de AIE cuyo objeto sea el transporte en la economía de mercado.C9)

debemos entrar a considerar si el serv icio ofertad o po r la AIE p uede act i vidades tienen la producción o lar de cabotaje, será todo servicio de suponer un acto de competencia des- comercialización de bienes, estable-

leal. competencia desleal (B.O.E. num. 10, de 11 de enero) define como competencia desleal cualqu ier comportamiento que se realice en el mercado cías a la península como a otras islas, por los empresarios y por cualesquiera personas q ue parti c ipen en el mismo, cuando produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español y siempre que tengan fines concurrenciales, es decir, o Baleares a la Península y que, adesiempre que el comportamiento se revele objeti vamente i dóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de u n tercero (arts . 1 a 4 de la Lev).C10)

Por otra parte, la Ley, en su artículo 15,1 "considera desleal prevalerse en taje y, en consec uencia, precisa de el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes. La ventaja ha de ser significativa". A continuación en el apartado 2 del artículo añade "tendrá tam- guntas, en primer lugar debemos dar de las tarifas y condiciones del transbién l a consideración de desleal la un concepto de lo que se entiende por porte establecidos y publicados y, simple infracción de normas jurídicas navegación de línea regular de caboque tengan por objeto la regulación taje. Concepto que se obtiene de la 7 del RD 720/84) (12).

marítimo regular en España. En este punto partiremos de un ejemplo marítimo de mercancías. Así, imagi-Es a partir de este principio que nemos un grupo de empresas importadoras/exportadoras que, entre sus cidos en el archipiélago canario o en La Ley 3/1991, de 10 de enero, de las Islas Baleares (zonas ambas que por su particular enclave geográfico precisan de un transporte marít imo eficaz tanto para el envío de mercancomo para el aprovisionamiento de las industrias y de los usuarios o consumidores establecidos en las islas), que const i tuyen una AIE para el transporte de mercancías de Canarias más, cumple toda la normativa regulad ora de la AIE en España. ¿Oue requisitos legal es debe cumplir la AIE para la realización del transporte marítimo de sus mercancías?. El servicio prestado por la AIE, ¿se trata de transporte marítimo regular de caboautorización previa administrativa?. Y, finalmente, ¿realiza la AIE actos de competencia desleal?.

Para responder a tod as estas pre-

tanto, es preciso analizar aquellas ción de cabotaje y n avegación de línea regular contenidos en el artículo nación del t ráfico marít i mo pa ra 7º de la Ley 27/1992. En cuanto a la poder dar una respuesta precisa en primera, la Ley entiende que "la que, cuanto a si los actos realizados por la no siendo navegación interi or, se servicio y condiciones ofertadas por AIE son actos de competencia desle- efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que España ejer-Régimen jurídico del transporte ce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción". Mientras que navegación de línea regular es "la sujeta a itinerarios, frecuencias de escalas, tarifas y cond iciones de transporte previamente establecidas".

Por tanto, navegación de línea regucabotaje que, aun en el caso de que no se denomine así, se oferte de forma general a los posibles usuarios y se preste en condiciones de regularidad, publicidad y contratación asimilables a los servicios regulares de cabotaje el cual, además, cuando se realice con finalidad mercantil, quedará sujeto a autorización administrativa (art. 81 de la Ley 27/1992) (11). De este modo, tanto de la lectura de Ley (arts. 7 y 81) como del Real Decreto 720/1984 (art. 7), se desprende que para considerar que se realice tráfico marítimo regular de cabotaje deben cumplirse una serie de requisitos:

- a) Pu blic idad de i t i nerarios, frecuencias, tarifas y condiciones gene-
- b) Regu larid ad del serv ic i o, que supone la adopción de medidas que aseguren la prestación de un servicio eficaz y adecuado.
- c) Estricta aplicación a los usuarios
- d) Transporte de carga general (art.

- (9) Este derecho o principio a la libertad de empresa incluve la libertad de iniciar una activ idad empresarial o económica, la de contratar y la de competir. La libertad de competi r incluye la de utilizar todos los medios para afirmarse en el mercado, atraerse la clientela y fijar características de la oferta y de la demanda, dirigida a concretos destinatarios o en períodos limitados. Sin embargo, se trata de un principio que el ordenamiento positivo va a limitar cuando su ejercicio entrañe una desviación de su función social. Pero, además, la libertad de competencia significa que el daño infligido a los competidores no es ilícito (Cfr. VICENT CHULIA, F., "Compendio Crítico de Derecho Mercantil", ed. Bosch, Barcelona, 1991, pag. 1054).
- (10) VICENT CHULIA, F., "Compendio de Derecho Mercantil", ed. Bosch, Barcelona, 1991, pag. 1061. Menciona el autor que la definición contenida en la Ley procede de manera inmediata de la Ley suiza, cuyo artículo 2 establece que es "desleal todo comportamiento o práctica comercial que es engañoso o contraviene de cualquier otra forma las normas de la buena fe y que influve sobre las relaciones entre los competidores o entre proveedores y clientes".
- (11) El estableci miento de servicios de transporte marítimo regular de cabotaje, así como la admisión de nuevos buques está sometido en

España a autorización previa administrativa por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la Di rección General de Mari na Mercan te y su ordenación se halla regulada, además de en la Ley 27/1992, por las siguientes normas:

- Real Decreto 720/1984, de 28 de marzo, sobre Ordenación del Transporte Marítimo Regular (B.O.E., n um. 89, de 13 de abril de 1984, corrección de errores B.O.E. num. 109, de 7 de mayo de 1984).
- Orden de 16 de mayo de 1985 de desarrol l o del Real Decreto 720/1984, de 28 de marzo, sobre Ordenación del Transporte Marítimo Regular (B.O.E. num. 122, de 22 de mayo de 1985).
- Orden de 29 de julio de 1992, sobre Autorización de Servicios de Líneas Marítimas Regulares de Cabotaje (B.O.E. num. 187, de 5 de agosto de 1992).
- (12) Veamos, por tanto, que ambas normas se preocupan especialmente en diferenciar lo que es navegación de cabotaje, de aquella que se produce en condiciones de regularidad. Por ello, debemos diferenciar estos dos conceptos, que si bien son afines, expresan realidades diferentes: por un lado, la navegación de cabotaje que se realiza sin fijeza v sin ajustarse a los requisitos del RO 720/84 v, por otro lado, la de cabotaje de l'inea regular que debe someterse al cumplimiento del citado decreto.

E conomist & Jurist

En consecuencia, una vez establecidos los requisitos precisos para el 'establecimiento de una línea regular de cabotaje, habrá que analizar si éstos se dan en el tráfico operativo de la AIE propuesta, para concluir que la actividad desarrollada por la AIE no se trata de un servicio regular de cabotaje, a pesar de su gran coincidencia. Respecto al primero de los requisitos, publicidad de itinerarios, frecuencias, tarifas y cond iciones generales, la AIE no llevará acabo ninguna actividad de difusión publicitaria en relación a los servicios que presta, ya que todos ellos se produ - condiciones del transporte establecicual fue constitiuda.

estos puedan llegar a tener con los cabotaje. servicios de línea regular autorizados por la Dirección General de Marina Mercante a otras empresas navieras. no es menos cierto que se t rata de una regularidad concertada única v exclusivamente por v para los socios de la AIE en atención a sus necesida des, para sus importaciones de materias primas y exportaciones de productos manufacturados.

La AIE no hará publicidad de los servicios que presta, ya que se producen sobre la base del acuerdo entre los socios

cen sobre la base del acuerdo concerdos y publicados. Por todo lo dicho tado entre los socios para el transpor- anteriormente, si las actividades de la te de sus propias mercancías, dejan- AIE se basan a lo establecido en sus do natu ralmente abierta la posibili - estatu tos por el acuerdo de los sodad de que terceros interesados en cios, habrá que deducir que tampoco d icho servicio puedan igualmen te en este supuesto podemos decir que salir beneficiados, sin que por ello se se prod u zca n inguna activ idad de vulnere la naturaleza y objeto para la navegación regu lar de cabotaje, en tanto en cuanto aun en el caso de que El segundo de los requisitos, regu - la AIE tenga unas tarifas y condiciolaridad del servicio. A u nq ue se nes de transporte preestablecidas, en puede realmente pensar en la exis- tanto falte el requisito de la publicitencia de una cierta regularidad en dad de las mismas cabe presumir que los servicios que la AIE oferta a sus no es posible conceptuar dicha actisocios debido a la coincidencia que v idad como una 1 ínea reg u lar de

El último de los requisitos, transporte de carga general. Es evidente que dada la diversidad de actividades empresariales a las que se pueden ded icar los socios de la AIE este requisito siempre se cumplirá, ya que la diversidad de las actividades de los socios hará que, igual que sucede con las líneas regulares de cabotaje. la AIE vend rá obligada a aceptar El tercer requisito, estricta aplica- todo tipo de cargas, aunque a difeción a los usuarios de las tarifas y rencia de éstas y por el objeto al que

esté destinada la AIE podemos afirmar que se tratará de navegación de cabotaje, pero no de línea regular, ya que al ser su objeto el transporte de mercancías de los socios se elimina el carácter de servicio público que entraña toda línea regular.

Por todas estas razones podemos concluir, que para que podamos decir que la AIE realiza un servicio regular de cabotaje se deben dar todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 7 del RD 720/1984, afirmación ésta que encuentra su apoyo normativo en la exposición de motivos del propio Real Decreto, que respecto a los mencionados requisitos dice: "... l os cuales se consideran como mínimos y esenciales para el armónico desarrollo y adecuado funcionamiento del transporte marítimo regular ...".

La conclusión de que la AIE en el ejercicio de su actividad (transporte de mercancías por vía marítima) no está sometida al RD 720/1984, por cuanto no realiza un servicio regular de cabotaje, nos llev a a conclu i r igualmente que tampoco reali za, en el ejercicio de su actividad, un acto de competencia desleal por infracción o violación de normas contenidas en el artículo 15, apartado 1º de la Lev 3/1991, por cuanto no precisa para la iniciación de su actividad, al no poder ser considerado el servicio ofrecido como un servicio regular de cabotaje, de la precepti va autorización previa administrativa, y siempre y cuando cumpla con todas aquellas otras normas administrativas, tales como sanitarias, contables, fiscales, etc, no pod rá decirse que real iza actos de competencia desleal.

IIIJ e	Deseo suscribirme a la revista especializada ECONOMIST & JURIST por un período de un (1) año, al precio de 6.000 pesetas + el 3% de IVA									
• • -	A PELLIDOS	NOMBRE								
	CALLE / PLAZA	NUMER O PISO								
	CIUD A D	CODIGO POSTAL								
CD.C.	PR OVINCIA	PAIS								
a	TELE FONO	NIF								
O (.)	bg liimmill&'i.	blillaydlAr*CllllCllllD								
m (/)	dimali <u>di</u> .CXIIcmgoaliNi IbiiriiailiilitndifkJSII, ———— Nididiid i 1 1 1 1									
(/)	NIdia11t11 1 1 1 1 1 1clL	dl 18								

Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A Tif. 457.48.88 - 207.38.20 FAX 207.14.57 C/ Nápoles, 272 - 4º 2ª BARCELONA

Subvenciones oficiales

-Se prorroga y mod ifica la Orden 29 de julio d e 1.992 que establece las bases reg u l adoras para la concesión de ayudas a las Cooperat ivas y Socied ades Laborales con cargo al Programa de Desarrollo Cooperati-

Orden de 18 de marzo de 1.993. (B.O.E. de 2 de abril de 1.993, nº

-Se amplía el plazo de presenta ción de solicitudes establecido por la Orden de 16 de ju lio de 1.992, para adaptación a la competencia internacional y diversifición, en rel ación a la Ind u stria nº 95). Textil y Confección.

Orden de 29 de marzo de 1.993. (B.O.E. de 1 de abril de 1.993, n°

-Régimen de avudas destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria.

Real Decreto 477/1993 de 12 de abri l. (B.O.E. de 3 de abril de 1.993, n° 80).

-Programas de actu ación en relación a los inmigrantes.

Orden de 25 de marzo de 1.993. (B.O.E. de 10 de abril de 1.993, n° 86).

-Establece las bases generales para concesión de subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen actividades en el campo de la cooperación internacional para la ejecución de proyec-

tos de cooperación al desarro-¹¹Orden de 29 de marzo de 1.993.

(B.Q.E. de 13 de abril de 1.993,

-Establece la normativa aplicable para la concesión de ayudas a Entidades sin fines de lucro para la realización de actividades de educación de adultos.

Orden de 2 de abril de 1.993. (B.O.E. de 16 de abril de 1.993,

-Ayudas previstas en el <u>P</u>lan de Act u ación Tecnoló gico Ind u s-

Orden de 15 de febrero de 1.993. (B.O.E. de 17 de abril, n°

-Se amplía el plazo de la Orden de 21 de febrero de 1.985, de bases de colaboración entre las corporaciones Locales v el Institu to N acional de Em pleo pa ra contra taci ón de tra ba jadores desem pleados en obras y servi-cios.

Orden de 19 de abril de 1.993. cación de zonas con impl anta- (B.O.E. de 21 de abril de 1.993,

> -Ad aptación al Pl an General contable de las empresas constructoras.

Orden de 27 de enero de 1.993. (B.O.E. de 24 de abril, n° 98).

-Norm as para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Cons u m idores y Us uar ios de ámbito nacional en 1.993.

Orden de 20 de abril de 1.993. (B.O.E. de 28 de abril de 1.993, nº 101).

-Establece la base reguladora de la concesión de ayudas al Transporte Público por carretera. Orden de 26 de abril de 1.993. (B.O.F. de 30 de abril de 1.993,

-Selección de criterios para las solicitudes de ayudas presentadas según el reglamento (CEE) nº

619/1993, de 17 de marzo de 1.993 relativo a la mejora de la calidad.

Orden de 30 de abril de 1993, na

-Procedim iento para la concesión de subvenciones dentro del Plan de Actu ación Tecnológica Industrial (PATI) en relación con las acciones especiales en Soft.: ware y en CIM.

Orden de 29 de abril de 1.993. (B.O.E. de 12 de mayo de 1.993, n° 113).

-Concesión de subvenciones a Corporaci ones Locales pa ra l a creación de infraestructu ras derivadas de los Planes de Emergen cia Nuclear.

Orden de 28 de abril de 1.993. (B.O.E. de 13 de mayo de 1.993, n° 114).

-Concesión de ayudas previstas en el Plan Nacional de los Industriales para 1.993 en materia de residuos tóxicos y peligrosos.

Orden de 22 de marzo de 1.993. (B.O.E. de 15 de mayo de 1.993, n° 116).

-Concesión de subvenciones a agrupaciones de agricultores para la defensa antigranizo en la campaña 1.993.

Orden de 4 de mayo de 1.993. (B.O.E. de 15 de mayo de 1.993, n° 116).

-Ayudas para fomentar métodos de producción agraria compatibles con la protección del medio ambiente en los regadíos de la Mancha Occidental y Campo de Montiel en aplicación del Reglamen to (CEE) 2078/92 de 30 de junio de 1.992.

Orden de 17 de mayo de 1.993. (B.O.E. de 20 de mayo de 1.993,

-Sistema de ayudas a productores de plantas de vinos para inversiones y trabajos durante el ejercicio 1.993.

Orden de 17 de mayo de 1.993. (B.O.E. de 21 de mayo de 1.993, n° 121).

-Subvenciones y ayudas a Entidades sin ánimo de l uc ro de ámbito Nacional para la real ización de programas y actividades de información. defensa y protección de consumidores y usuarios. Orden de 20 de abril de 1.993. (B.O.E. de 22 de mayo de 1.993, n° 122).

Información Jurídica

María Jesús Cañizares

Gay, reelegido decano del Colegio de Abogados de Barcelona

abogado Eugeni Gav Montalvo. A su elección como presidente del Consejo General de la Abogacía Española tado. se une ahora la victoria en las elecciones de la Junta del Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, celebradas el pasado 8 de junio.

Las críticas a su supuesta falta de cortesía por decidir presentarse a la reelección -Gay es decano del Colegio desde 1989-, no han podido evitar que obtuviera un total de 3.392 votos frente a los 2.914 logrados por su más firme opositor, Juli de Miquel Berenguer, los 2. 1 1 O de Felip Portabella Cornet y los 43 logrados por Jordi Morató-Aragonés.

Pero el verdadero triunfo de estas elecciones ha sido el alto índice de participación, el más alto en toda la historia del Colegio. De los 11.700 censados, votaron un total de 4.685 letrados, lo que supone el 40 por ciento del total.

Ejercientes

Del total de pa rtici pan tes, 3.990 eran abogados ejercientes, que disponen de voto doble, y 695 no están en activo, por lo que tienen voto simple. Un total de 247 letrados ejercieron el voto por correo. En las elecciones anteriores, celebradas en 1989, votaron 2.899 letrados, el 26'7 por ciento de los 10.800 censados ese año.

También resul tó ganador tod o el equipo de la candidatura de Eugeni Gay, cuyos miembros formarán la nueva Junta de Gobierno, a pesar de que las listas eran abiertas y los abogados podían escoger entre las diferentes equipos.

Se da la circu nstancia de que, en 1989, el equipo de Gay también fue elegido en bloque, pero anteriores decanos, como An tonio Plasencia, no consiguieron «sacar» toda la candidatura.

En la nueva Ju nta sólo repiten el

El protagonista de la jornada electoral, que adquirió tintes típicamente americanos -los candidatos saludaban a los electores en la puerta de la sede del Colegio, situada en la calle Mallorca, lo que algunos interpretaron como u n especie de «coacción»-, calificó la experiencia de la victoria, que se <lió a conocer a altas horas de la madrugada, como «muy bonita», ya que recibió la inmediata felicitación de sus contricantes.

Eugeni Gay es, además, miembro de la Sociedad Internacional de la Historia de la Profesión de Abogado, v icesecretari o de la Comi sión de Derechos Humanos de la Unión Internacional de Abogados, secretario general del Movimiento Internacional de Juristas Católicos y fundador de la Red Latinoamericana de Juristas Católicos.

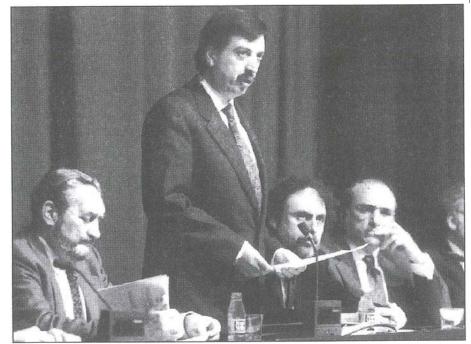
El 28 de mayo fue elegido presiden-

Sin duda, este ha sido el año del propio Gay como decano y Francesc te de l a Interco leg i al de Colegios Caminal Badia, nuevo vicedecano, y Profesionales de Cataluña, que agruque en el anterior mandato fue dipu- pa a 143 entidades y ha participado en las negociaciones con la Generalitat y el Gobierno central sobre el anteproyecto de reforma de Ley de Colegios profesionales.

El nuevo decano dijo que las elecciones habían supuesto un gran éxito para el Colegio, « y a que el índice enorme de partici pación constituye un triunfo para esta institución».

Eugeni Gay considera muy importante y «ex cepc ion al» que haya resultado elegido todo su equipo, en el que hay dos mujeres, y que tomó posesión el pasado 22 de junio. En su d i scurso, Gay rei teró, entre otras cuestiones, sus peticiones de que se mejoren las dotaciones para la Justicia gratuita, que los colegios de abogados sean subvencionados y que se limite el acceso a la profesión, reivindicaciones todas ellas que formaban parte de su programa electoral.

Además, Gay defiende el impulso de la colegiación única para todo el



Eugeni Gay ha sido decano del Colegio barcelonés desde 1989

territorio español y la lucha contra el intrusismo. En este sentido, pretende aprovechar su cargo en el Consejo General para defender los intereses del Colegio de Barcelona, ya que por primera vez en la historia, un decano de esta ciudad preside a los letrados españoles.

El objetiv o inmedia to de Gav es reu nirse con los miembros de su equipo para repartirse las funciones que tendrá cada uno de sus miem bros, en base a la especialidad y experiencia de cada uno.

Deportividad

Los otros tres candidatos que aspiraban al Decana t o aceptaron con deport i v idad 1 a derrota. Jul i de Miguel precisó, no obstante, que los votos contrarios a Gay suman más de 5.000, lo que evidencia la oposición al nuevo decano. Estos votos podrían haberse unido si hubieran prosperado l as negoc iac iones entre Juli de Miguel y Felip Portabella durante la campaña para presentar una candidatura común. Discrepancias en el contenido del programa electoral frustraron este proyecto que, s i n dud a, hubiera logrado la derrota de la candidatura de Eugeni Gay.

Un total de 4.685 letrados votaron en los comicios, lo que supone el 40 por ciento de los censados. el índice más alto de la historia colegial

Portabella, que ha sido considerado como el vencedor mora l de estas elecciones, ya que sin apenas hacer campaña electoral, ha logrado 2.110 votos, manifestó que «en adelante, se deberá tener en cuenta la existencia de estos 5.000 votos contrarios a Gay, sin que esto sirva de amenaza. Por su parte, Jordi Morató Aragonés, que acudió sólo a las elecciones en una candidat u ra testimonial que pretendía poner en evidencia la división en el colectivo de los abogados, se mostró satisfecho del aumento de participación de los colegiados en las elecciones y de que se le diera «la oportunidad de expresar mis ideas y espero que, en la medida de lo posible, la Junta entrante las recoja». Este letrado, partidario de que el Colegio barcelonés se pron u nc ie sobre la autodeterminación de los pueblos, deseó a Gay « tod a 1 a suerte para compaginar las tareas del Colegio con las del Consejo General de la Abogacía».

Composición

La Junta de Gobierno es el órgano rector del Colegio de Abogados de Barcelona . Se compone de 20 miembros que incl uyen u n decano, u n v icedecano, un tesorero, un auditor de cuentas, un bi bliotecario, un secretario y otros diputados, bajo cuya responsabilidad recae la gestión de las diferentes áreas del Colegio.

La Junta es elegid a por sufragio directo de los colegiados que se convocan cada cuatro años y se renuevan por mitades cada dos años.

Este órgano n ombra com isiones delegadas, cuatro de las cuales trabajan para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger el ejercicio profesional del abogado: la Comisión de Deon tología Profesional, la de Intrusismo profesional, la de Regulación de Honorarios y la del Tumo de Oficio y de Asistencia al Detenido.

Nuevo equipo de gobierno

- Eugeni Gay Montalvo, decano (3.392 votos): Nacido en 1946. decano del Colegio desde 1989. Presidente de Federación de Colegios de Abogados de Europa y del Consejo General de la Abogacía.
- Fran cesc Cam i n al Bad ia, v icedecano (3.403 v otos): Nacido en 1945. Dip u tado de la Ju nta de Gobierno del Colegio desde 1991. Secretario de la Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña.
- Joan Bassas i Marinés, diputado (3.373 votos): Nacido en 1952. Abogado del Tribunal de la Rota. Profesor Universitario.
- Josep M. Bernat Freixas, diputado (3.410 votos): Nacido en Barcelona en 1949. Fundador de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas y presidente de esta organización entre 1990 y 1991.
- Joan Gassiot Benet, diputado (3.315 votos): Nacido en Barcelona en 1962. Especialis ta en Derecho Civil y al Mercantil.
- Mer itxell Josa Cam poa mor, dipu tad a (3.330 votos): Nacida en Argel en 1941. Licenciada en Farmacia y en Derecho. Directora adjunta de la Dirección de Servicios de transportes de la CMB de 1980 a 1986. Abogada del Ayuntamiento de Barcelona.
- Joan Artur Ma rgenat Pad rós, diputado (3.312 votos): Nacido en Barcelona en 1945. Casado y padre

- de dos hijos. Veinticinco años de ejercicio profesional. Asesor de empresas.
- Felipe Santos Ollé, diputado (3.298 votos): Nacido en Reus en 1932. Miembro de las secciones de Derecho Fiscal y Financiero, Normativa profesional y derecho Aeronáutico y del Espacio de la Comisión de Cultura del Colegio.
- Mateo Seguí Parpal, diputado (3.469 votos): Nacido en 1945. Colegiado desde 197 1. Especial ista en Derecho Penal.
- Inm aculada U mbert Millet, d i pu tada (3.393 votos): Nacida en Barcelona en 1952. Licenciada en Filosofía y Letras y Derecho. Miembro de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados.
- Antonio Velasco Garrido, diputado (3.353 votos): Nacido en Pontevedra en 1953. Miembro del Cuerpo General Técnico del Ministerio de Hacienda y del de Inspectores Financieros y tributarios, actualmente en excedencia.
- Miguel Vilanova Cullell, diputado (3.341 votos). Nacido en 1965. Colegiado en ejercicio desde enero de 1991 . Especializado en derecho Adm inistrativo y Urbanismo. Miembro de la Comisión de defensa de los Derechos de la Persona y de la Asesoría Jurídica de SOS Racismo.

877 empresas españolas han exportado más de mil millones en 1992

Ofrecemos a continuación el listado de todas las empresas españolas que el año pasado exportaron por encima de los mil millones de pesetas, según datos oficiales recogidos en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio. No puede hablarse en términos generales de una subida o de retroceso, pues de todo hay en estas 877 compañías multimillonarias en el campo de la exportación. Baste recoger el dato de que entre las 25 primeras exportadoras, en doce casos ha habido avances sustanciosos en dicha partida durante 1992, diez compañías sufrieron retroceso y tres, Citroen, Dow Chemical y Altos Hornos, han mantenido la cifra en los dos últimos años. Y hasta dentro de un mismo sector, como es el del automóvil, frente a los fuertes incrementos de Seat, Pasa y General Motors, advertimos un retroceso de 45.000 millones de pesetas en Ford España.

Los cinco primeros lugares del listado pertenecen al sector del automóvil y en el sexto lugar figura IBM, compañía que por cierto, mantiene su lugar pese al notable retroceso habido en sus ventas al exterior, gracias a que si bien ha sido ampliamente rebasada por Citroen Hispania, recupera el

puesto perdido ante el retroceso de Repsol Petróleo, firma que el año pasado exportó casi 26.000 millones de pesetas menos que en 1991. También Petronor que redujo a casi la mitad sus exportaciones, Cepsa y Repsol Química, entran dentro del grupo de exportadoras a la baja.

Por sectores, en el automóvil el lugar de honor corresponde a Seat, que es asimismo la mayor exportagora del país durante el año último. En informática, la más activa en su departamento de exterior ha vuelto a ser IBM España y en neumáticos repite Michelín. Repsol ocupa el lugar de honor entre las exportadoras petroleras, en vehículos industriales la primera plaza corresponde a la catalana Nissan Motor Ibérica y en construcción naval vuelve a encabezar el listado Astilleros Españoles. En el departamento siderúrgico Acerinox es la mayor exportaencabeza el listado Robert Bosch y en metales no férricos el puesto de honor corresponde a Asturiana de Zinc. En el sector agrario la más activa por sus exportaciones resultó serel año pasado la Cooperativa Exportadora de Cítricos Monforte con casi 20.000 millones de pesetas, seguida por Pascual Hermanos (naranjas) con 14.000 millones y

Arrocerías Herba (grupo Kio) con 12.000.

En el grupo papelero la número uno es Ence, en electrodomésticos línea marrón la primera posición corresponde a Sony y en telecomunicaciones a Alcatel, mientras el sector farmacéutico está encabezado por Antibióticos, el aéreo por Univers Air, el de electrodomésticos línea blanca por BS Electrodomésticos y el constructor por Dragados.

Dato a anotar de este listado de las grandes exportadoras españolas, es que las ocho empresas que ocupan los primeros lugares, son extranjeras. Y entre las 25 primeras, en catorce casos el capital foráneo gobierna, en siete es el INI el que manda, en uno los capitales extranjeros y nacionales están a la par y sólo en tres empresas, Acerinox, Cepsa y Asturiana de Zinc, el control corresponde a capitales dora, en equipamientos para la automoción españoles, en dos de ellos a Banesto (Acerinox y Asturiana de Zinc) y al Central en el restante (Cepsa).

Ofrecemos a continuación la lista de las 877 exportadoras españolas que vendieron mercancías fuera por más de 1.000 millones de pesetas el año pasado. En todos los casos las cifras indican millones



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nº			Exp	ortación (en	millones ptas	s.)	
Personal Remark Assiministics y recumbins 68,518 102,572 130,005 170,826 202,157 251,005 170,826 202,157 271,005 2			1987	1988	1989	1990	1991	1992
General Motors Espirials, Cerbes y recambios 139.887 179.222 217.197 201.404 231.817 245.667 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201 177.007 200.624 215.201		Seat. Automóviles y accesorios	141.329	152.705	176.212	214.044	293.506	373.106
Ford Expaña, Autonovièles y piezas 17,7286 147,104 14,048 19,3767 206,624 215,201								
Column Principal Training yaccessories Column Principal Principa								
Neuminton Michelin Neumintons								
Percent Tallouc Espaina, Vehiculous y recumbios 24.912 26.968 6.093 6.034 61.633 64.643								
Perpois Periodeo. Derivados del petroleo. 83.382 75.239 89.076 102.25 37.109 61.599 Nissam Morte Dérica. Vehiclos tode terron y furgenetas 16.888 24.27 24.910 37.889 34.865 66.880 11 Astillerae Españoles. Butques y reparaciones. 1.330 110.08 80.94 17.27 34.962 81.171 21 Petroleos de Horte. Lubricantes y combustibles. 65.521 63.06 81.625 63.628 84.049 49.785 22 Petroleos de Horte. Lubricantes y combustibles. 65.521 63.06 81.625 63.628 84.049 49.785 23 Constructories Aerusiaticas. Aviones y componentes. 18.101 32.319 40.138 49.535 52.812 49.336 24 Acentro. Accordinates Autoritative de petroleo. 69.239 45.049 56.035 73.445 47.576 25 Constructories Aerusiaticas. Aviones y componentes 18.101 32.319 40.138 49.535 52.812 49.336 26 E.N. Stateringica. Productos stateringicas. 45.601 43.533 40.948 40.035 40.035 26 E.N. Stateringica. Productos stateringicas. 42.040 43.930 43.056 42.040 42.040 26 Constructories aerusiaticas y acutories aerusiaticas y acutories 42.040 43.040 42.040 43.040 42.040 43.040 42.040 43.040 42.040 43.040 43.040 42.040 43.040								
10 Nissan More Ibérica: Veluculos todo terreno y furgonetas 1,6888 24,247 24,919 37,589 34,448 56,689 12,421 12 Perroleos del None, Labricanes y combustibles 65,521 63,506 81,625 63,628 84,049 93,78 12 Perroleos del None, Labricanes y combustibles 65,521 63,506 81,625 63,628 84,049 93,78 12 Perroleos del None, Labricanes y combustibles 65,521 63,506 81,625 63,628 84,049 93,78 12 Perroleos del None, Labricanes y componentes 18,011 23,319 40,188 40,533 40,400 51,279 34,843 52,955 47,376								
Petroleos de Norte, Lurbricamés y componentes 65.21 63.506 81.625 63.628 84.494 49.78 14 Compressions Aeroniativas, Avines y componentes 18.011 23.319 40.18 49.535 49.400 51.279 34.834 52.956 47.736	10							
13 Constructiones Aeroniauticas Aviones y componentes 18.011 32.319 40.18 49.553 52.812 49.336 14 Acerinos Aeroniauticas Aviones y componentes 24.035 40.040 51.279 34.834 67.934 15 Cin. Epathola de Perroléos. Derivados del perroleo 69.236 45.045 50.005 73.443 67.934 16 E.N. Siderrigiae Productos desiderigiaeos 45.691 34.533 40.988 50.153 50.005 17 Robert Bosch, Baterias y equipos para auto 28.048 29.216 31.373 35.472 38.036 42.099 18 Reprod Quintica. Productos quinticos 28.097 39.399 41.805 42.946 38.094 38.043 38.543 18 Reprod Quintica. Productos quinticos 28.097 39.399 41.805 42.946 38.094 38.043 38.344 19 Reproductos quinticos 28.097 39.399 41.805 42.946 38.094 38.344 38.344 21 Down Chenical Ibérica. Productos quinticos 25.185 24.037 25.746 25.288 31.877 22 Alton Hornos de Viazopa. Productos siderriginos 15.948 20.173 16.436 20.946 24.989 24.946 24.9								
14 Acerinox. Accro inoxidable y laminados 24/385 40/400 51/279 34/84 52/956 47/376 15 Cita Expaida de Petróleso. Derivados del petróleso 60/236 65/045 56/085 73/443 62/025 16 E.N. Siderrigica. Produces siderrigicas 45/910 34/533 49/948 50/153 54/451 17 Robert Book. Baetráa y cupitopos para auto 28/048 29/16 31/33 34/92 34/56 36/562 18 Mercades Reur España. Vehículos industriales y accesorios 33/72 18/750 22/16 24/959 32/856 36/862 18 Repsol Quimica Productos sigrimicos 28/907 39/99 41/855 42/946 30/840 33/854 19 Santina Motor. Vehículos fodo terreno 77/115 10/840 14/107 15/950 22/888 30/973 34/84 34/94 34/84 20 Santina Motor. Vehículos fodo terreno 77/115 10/840 14/107 15/950 22/888 31/973 34/94 3								
E.N. Sidentingica. Productos sidentrigicos 45.691 34.533 40.948 50.153 54.451 45.705								
17 Robert Boseh, Baterfas y equipos para auto 28.048 29.216 31.373 35.472 38.036 42.069 38.6562 38.6562 88.6562	15	Cía. Española de Petróleos. Derivados del petróleo	69.236	45.045	56.035	73.443	67.934	46.023
Repeal Quimien, Productus quimicos 3.372 18.750 22.016 24.959 32.856 36.562								
19 Repsol Químicas Productos químicos 28,097 33,939 41,865 42,946 33,835 31,077								
20 Santama Motor, Vehículos dol terreno 17.115 10.840 14.107 15.930 22.888 31.077 22.84037 23.746 25.558 26.213 26.724 22.158 23.314 26.215 23.314 24.215 23.314 26.215 23.314 26.215 23.314 24.215 23.215		1						
Priestrame Hispania, Neumátricos 20.011 23.699 20.723 23.215 23.314 20.215								
22 Firestone Hispania, Neumáticos 20.011 23.699 26.723 23.214 20.340 24.808 24.097 23 Alox Hormos de Vizayay Productos siderírgicos 15.940 20.1173 16.434 20.340 24.808 24.097 24 Asturiama de Zinc, Derivados del zinc 10.309 20.0173 30.218 19.206 15.405 24.070 25 Rlo Tinto Minera, Cobre pritras y derivados 14.897 16.891 15.538 16.218 24.947 23.127 26 Mecanismos Austiliares Indust, Componentes electrónicos 7.135 3.997 4.96 14.052 17.860 20.901 27 Coop, Esp. Ctrizco Sonfortor Productos bortorfuticolas 13.916 14.12 13.346 11.921 16.105 19.391 28 E.N. de Celulosas, Pastas y papel 26.024 25.164 25.865 17.622 16.709 17.752 28 Sarriopanel y Celulosa, Papel de impresión 22.44 17.290 28 Sarriopanel y Celulosa, Papel de impresión 22.44 17.290 30 Sony España, Electrodomésticos línea marrón 1.907 2.542 4.020 6.442 10.306 18.861 31 Veco Pegaso, Camiones, autocares y otros 18.119 25.369 12.773 8.781 16.66 15.385 32 Alcatel Standard Eléctrica, Sistemas telecomunicación 4.779 4.217 9.723 8.781 16.66 15.385 33 Alcatel Standard Eléctrica, Sistemas telecomunicación 4.779 4.217 9.723 8.781 15.460 15.385 34 Antibióticos, Especialidades farmacetuicas 10.347 13.008 13.171 13.493 14.870 15.198 35 Acenor, Hierro y acero 1.665 12.72 28.111 13.493 14.870 15.198 36 Pascual Hermanos, Naranjas, hortalizas y legumbres 6.590 13.171 13.493 14.870 14.186 37 Univers Air Vuelos charter 1.900 13.476 14			25.185	24.037	23.746	25.558	26.213	26.724
24 Asturiana de Zinc. Defrivados 14.897 16.89 15.246 24.070 25 Rio Tinto Minem. Coher printary derivados 14.897 16.89 15.538 10.218 24.97 23.127 26 Mecanismos Auxiliares Indust. Componentes electrónicos 7.135 3.997 496 14.052 17.860 20.901 27 Coop. Exp. Círicos Monforte. Productos hortofruícolas 13.916 14.412 13.364 11.91 16.015 19.9391 28 El.M. de Celulosas. Pastas y papel 26.024 25.164 25.865 17.622 16.079 17.732 29 Sarniopapel y Celulosa. Papel de impresión 1907 2.542 4.020 6.442 10.066 16.861 31 Iveco Pegaso. Camiones, autocares y otros 18.119 25.309 12.773 8.716 6.445 16.649 31 Neco Pegaso. Camiones, autocares y otros 18.119 25.309 18.739 13.721 17.406 15.539 31 Inversor Registro Production Servicio Servi		Firestone Hispania. Neumáticos	20.011	23.699	26.723	23.215	23.314	26.215
Section Sect		,						
27 Coop. Exp. Ctricos Monforte. Productos hortofrutcolas 13916 14.412 13.364 11.921 16.105 10.309 17.752 28 E.N. de Celulosas. Papel de impressión 2.244 17.290 17.752 29 Sarriopapel y Celulosa. Papel de impressión 1.907 2.542 4.020 6.442 17.290 10.406 16.861 31 Iveco Pegaso. Camiones, autocares y otros 18.119 25.369 12.773 8.716 6.445 16.649 17.290 17.201								
28 E.N. de Célulosas, Pastas y papel 26,024 25,164 25,865 17,622 16,709 17,752 29 Sarriopapel y Celulosa, Papel de impresión 1907 2,542 4,020 6,442 10,406 16,861 31 Iveco Pegaso, Camiones, autocares y otros 18,119 25,369 12,773 8,716 6,445 16,661 32 Alcatel Standard Eléctrica, Sistemas telecomunicación 4,779 4,217 9,723 8,850 16,564 15,385 33 Inespal, Artículos de aluminio 10,347 13,008 14,399 13,721 17,406 15,385 34 Antibóticos. Especialidades farmaceluticas 16,65 1,272 28,111 24,249 18,354 14,194 35 Acenor, Hierro y acero 1,665 1,272 28,111 3,349 18,141 7,754 18,354 14,194 36 Pascual Hermanos, Naranjas, hortalizas y legumbres 6,590 13,171 13,496 14,376 14,186 12,592 3,186 5,596 13,391 18,141 <	26	Mecanismos Auxiliares Indust. Componentes electrónicos	7.135	3.997	496	14.052	17.860	20.901
2								
New Normal Services 18,119			26.024	25.164	25.865	17.622		
Acatel Standard Eléctrica, Sistemas telecomunicación 4,779 4,279 9,723 8,880 16,564 15,385 16,583 Artículos de aluminio 10,347 13,008 14,399 13,721 17,406 15,395 13,419 15,430 15,198 15,198 15,199			1.907	2.542	4.020	6.442		
10.347 13.008 14.399 13.721 17.406 15.359 12.72 13.008 14.399 13.721 17.406 15.359 12.73 12.149 15.430 15.198 13.74 13.403 14.870 14.186 13.75 12.24 13.471 13.493 14.870 14.186 14.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 15.87 15.870 13.711 13.493 14.870 14.186 15.87 13.471 13.493 14.870 14.186 15.87 13.471 13.493 14.870 14.186 15.87 13.471 13.493 14.870 14.186 15.87 13.471 13.493 14.870 14.186 15.87 13.471 13.493 14.870 14.186 15.87 13.471 13.493 14.870 14.186 15.87 13.471 13.493 14.870 14.186 15.87 14.870 14.186 14.186 15.87 14.870 14.186 14.186 15.87 14.870 14.186 14.186 15.87 14.186 14.186 14.186 1								
15.198								
1.665 1.272 28.111 24.249 18.354 14.194			10.547	13.008				
13.476 New Sair Vuelos charter			1.665	1.272				
Hewlett Packard Española. Equipos de informática 4,081 8,023 8,141 7,754 10,500 13,194 195		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		6.590	13.171	13.493	14.870	
Tecnimagen, Televisores 12,949			4.081	8.023	8 141	7 754	10.500	
Aviación y Comercio (Aviaco). Pasajes y carga 3.357 10.362 11.722 8.198 25.378 12.389 42 Arrocerías Herba. Arroces 6.122 3.448 4.860 5.637 11.710 12.100 43 Condiesel. Accesorios para automoción 2.518 2.393 3.218 4.410 7.930 11.690 44 Hocchst Ibérica. Productos químicos y farmacéuticos 2.277 2.336 2.380 2.743 12.462 11.589 45 Aluminio Español. Aluminio en bruto 16.021 18.003 19.642 14.578 12.684 11.508 12.684 11.508 12.684 11.508 12.684 11.508 12.684 11.508 12.684 11.508 12.684 12.6								
Accordina Herba Arroces	40	BS Electrodomésticos. Frigoríficos, cocinas y otros	3.040	3.119	4.334	6.898	8.057	12.633
Condiesel Accesorios para automoción 2.518 2.393 3.218 4.410 7.930 11.690 44 Hoechst Ibérica. Productos químicos y farmacéuticos 2.277 2.336 2.380 2.743 12.462 11.589 45 Aluminio Español. Aluminio en bruto 16.021 18.003 19.642 14.578 12.684 11.508 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.684 11.508 14.578 12.584 12.684 11.508 14.578 12.584 12.684 11.508 14.578 12.5		Aviación y Comercio (Aviaco). Pasajes y carga	3.357	10.362	11.722	8.198	25.378	12.389
Hoechst Ibérica Productos químicos y farmacéuticos 2,277 2,336 2,380 2,743 12,462 11,589 45 Aluminio Español. Aluminio en bruto 16,021 18,003 19,642 14,578 12,684 11,508 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,508 14,578 12,684 11,608 14,578 12,234 12,347 12,347 12,347 12,347 12,347 12,347 12,347 12,348 12,484 12,484 13,485 14,578 14,578 12,348 14,578		Arrocerías Herba. Arroces						
Aluminio Español. Aluminio en bruto 16.021 18.003 19.642 14.578 12.684 11.508								
47 Renault Vehículos Industria les. Camiones y accesorios 737 1.213 1.776 2.990 8.357 11.234 48 Foret. Productos químicos 7.775 7.986 9.799 10.234 9.846 11.160 49 Albitus. Electrodomésticos línea blanca 63 32 82 878 8.503 10.929 50 Gema. Antibióticos 7.184 7.388 9.177 10.582 10.683 10.819 51 Fesa Fertilizantes Españoles. Fertilizantes químicos 9.568 8.679 16.241 14.397 13.361 10.273 52 Cádiz Electrónica. Módulos eléctricos automóvil 98 4.630 10.020 53 Unicables. Cableado para vehículos 1.922 2.661 5.677 4.425 6.023 9.863 54 Dragados y Construcciones. Obras y construcciones 4.570 994 1.527 10.567 2.018 9.845 55 Montefibre Hispania. Fibra acrílica 8.347 9.624 5.463 7.024 9.850 9.844								
48 Foret. Productos químicos 7.775 7.986 9.799 10.234 9.846 11.160 49 Albilux. Electrodomésticos línea blanca 63 32 82 878 8.503 10.929 50 Gema. Antibióticos 7.184 7.388 9.177 10.582 10.683 10.819 51 Fesa Fertilizantes Españoles. Fertilizantes químicos 9.568 8.679 16.241 14.397 13.361 10.273 52 Cádiz Electrónica. Módulos eléctricos automóvil 98 4.630 10.020 53 Unicables. Cableado para vehículos 1.922 2.661 5.677 4.425 6.023 9.863 54 Dragados y Construcciones. Obras y construcciones 4.570 994 1.527 10.567 2.018 9.848 55 Montefibre Hispania. Fibra acrílica 8.347 9.624 5.463 7.024 9.850 9.844 56 ACG Componentes. 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 58 Ertoil. Derivados del petróleo 13.875 10.630 9.355 59 Nestlé. Productos alimenticios 6.159 6.359 5.643 6.515 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865 6.026 7.718 4.445 3.517								
Albilux Electrodomésticos línea blanca 63 32 82 878 8.503 10.929 50 Gema Antibióticos 7.184 7.388 9.177 10.582 10.683 10.819 10.821 10.819								
50 Gema Antibióticos 7.184 7.388 9.177 10.582 10.683 10.819 51 Fesa Fertilizantes Españoles. Fertilizantes químicos 9.568 8.679 16.241 14.397 13.361 10.273 52 Cádiz Electrónica. Módulos eléctricos automóvil 98 4.630 10.020 53 Unicables. Cableado para vehículos 1.922 2.661 5.677 4.425 6.023 9.863 54 Dragados y Construcciones. Obras y construcciones 4.570 994 1.527 10.567 2.018 9.848 55 Montefibre Hispania. Fibra acrílica 8.347 9.624 5.463 7.024 9.850 9.844 56 ACG Componentes								
52 Cádiz Electrónica. Módulos eléctricos automóvil 98 4.630 10.020 53 Unicables. Cableado para vehículos 1.922 2.661 5.677 4.425 6.023 9.863 54 Dragados y Construcciones. Obras y construcciones 4.570 994 1.527 10.567 2.018 9.848 55 Montefibre Hispania. Fibra acrílica 8.347 9.624 5.463 7.024 9.850 9.844 56 ACG Componentes 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 57 Braun Española. Pequeños electrodomésticos 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 58 Ertoil. Derivados del petróleo 13.875 10.630 9.355 59 Nestlé. Productos alimenticios 6.159 6.359 5.643 6.515 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales	50							
53 Unicables. Cableado para vehículos 1.922 2.661 5.677 4.425 6.023 9.863 54 Dragados y Construcciones. Obras y construcciones 4.570 994 1.527 10.567 2.018 9.848 55 Montefibre Hispania. Fibra acrílica 8.347 9.624 5.463 7.024 9.850 9.844 56 ACG Componentes. 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.435 57 Braun Española. Pequeños electrodomésticos 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 58 Ertoil. Derivados del petróleo 13.875 10.630 9.355 59 Nestlé. Productos alimenticios 6.159 6.359 5.643 65.15 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62			9.568	8.679	16.241			
54 Dragados y Construcciones. Obras y construcciones 4.570 994 1.527 10.567 2.018 9.848 55 Montefibre Hispania. Fibra acrílica 8.347 9.624 5.463 7.024 9.850 9.844 56 ACG Componentes 9.455 57 Braun Española. Pequeños electrodomésticos 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 58 Ertoil. Derivados del petróleo 13.875 10.630 9.355 59 Nestlé. Productos alimentícios 6.159 6.359 5.643 6.515 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi			1.022	0.661	E (77			
55 Montefibre Hispania. Fibra acrílica 8.347 9.624 5.463 7.024 9.850 9.844 56 ACG Componentes 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 57 Braun Española. Pequeños electrodomésticos 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 58 Ertoil. Derivados del petróleo 13.875 10.630 9.355 59 Nestlé. Productos alimenticios 6.159 6.359 5.643 6.515 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
57 Braun Española. Pequeños electrodomésticos 9.169 7.611 8.591 8.459 8.828 9.434 58 Ertoil. Derivados del petróleo 13.875 10.630 9.355 59 Nestlé. Productos alimenticios 6.159 6.359 5.643 6.515 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351								
58 Ertoil. Derivados del petróleo 13.875 10.630 9.355 59 Nestlé. Productos alimenticios 6.159 6.359 5.643 6.515 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
59 Nestlé. Productos alimenticios 6.159 6.359 5.643 6.515 8.372 8.761 60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051			9.169	7.611	8.591			
60 Bendix España. Frenos y otros accesorios 2.704 3.401 4.076 4.555 5.917 8.632 61 Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales 5.858 4.783 5.264 4.715 3.513 8.494 62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865			6 159	6.359	5.643			
62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865 6.026 7.718 4.445 3.517 8.085								
62 Petroquímica Española. Derivados del petróleo 7.697 6.932 9.004 6.909 8.519 8.442 63 Europea Equipamiento Doméstico. Televisores, vídeos, hi-fi 138 900 4.873 7.032 7.449 8.402 64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865 6.026 7.718 4.445 3.517 8.085	61	Fomento de Comercio Exterior. Servicios comerciales	5.858	4.783	5.264	4.715	3.513	8.494
64 Tubos Reunidos. Tubos de hierro y acero 7.212 8.821 8.562 8.628 10.685 8.379 65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865 6.026 7.718 4.445 3.517 8.085				6.932			8.519	
65 Cía. Roca Radiadores. Sanitarios 4.709 4.901 5.360 6.334 7.187 8.351 66 Torraspapel. Papel estucado y no estucado 4.065 7.466 8.833 8.340 67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865 6.026 7.718 4.445 3.517 8.085								
67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865 6.026 7.718 4.445 3.517 8.085								
67 Pirelli Neumáticos. Neumáticos 5.264 5.884 5.953 7.564 7.051 8.172 68 Basf Española. Productos químicos 2.803 4.476 6.148 6.112 8.123 8.127 69 Siemens. Material eléctrico e informático 3.865 6.026 7.718 4.445 3.517 8.085	66	Torraspapel. Papel estucado y no estucado			4.065	7.466	8.833	8.340
69 Siemens. Material eléctrico e informático		Pirelli Neumáticos. Neumáticos			5.953	7.564	7.051	8.172
170 2.000 5.120 7.021 7.000			3.003					
				.,,,,	2.003	3.120	1.521	7.003

Economist &.lurist

		Exportación (en millones ptas.)							
Nº orden	1987	1988	1989	1990	1991	1992			
71 Celulosas de Asturias. Pasta de papel	6.255 2.567 31	4.262 6.565 2.359 4 1.160	16.360 4.250 3.235 38 348	9.342 6.172 4.057 70 271	8.356 6.621 4.650 1.282 3.299	7.843 7.837 7.807 7.776 7.742			
76 Delco Products Overseas. Equipos automoción	3.789 2.871 3.719 6.421 11.320	5.245 5.532 4.524 5.590 6.636	5.968 10.750 4.956 5.145 5.660	7.066 9.083 5.114 4.587 11.694	7.181 8.633 5.852 5.583 10.137	7.730 7.714 7.684 7.646 7.626			
81 Bayer Hispania Industrial. Compuestos químicos	4.442 4.874 5.597 3.720	4.836 6.277 4.818 5.591	5.547 6.174 5.584 6.680	6.626 6.609 5.999 5.851 2.037	6.249 7.206 7.556 5.926 4.036	7.609 7.545 7.499 7.480 7.445			
86 Bioibérica. Materias primas farmacéuticas	5.826 5.822 9.285 3.142 5.988	9.650 4.486 10.785 4.678 6.555	7.921 4.465 9.630 8.369 7.772	9.149 5.674 5.519 8.625 7.712	10.210 8.980 6.864 7.108 8.078	7.397 7.377 7.138 7.129 7.058			
91 Honda España. Motocicletas y accesorios	1.390 5.500 12.593 448 2.782	2.277 7.950 11.417 2.135 4.616	2.480 10.306 3.219 2.024 5.186	2.380 10.362 3.668 2.584 5.595	2.910 10.168 18.881 4.698 6.824	7.058 6.974 6.972 6.933 6.931			
96 Altos Hornos de Bergara. Aceros y perfiles laminados	4.798 6.195 5.054	121 3.756 4.961 5.464	6.014 272 7.194 4.824 6.518	7.057 1.173 6.850 6.066 6.027	7.132 4.313 6.809 6.959 7.490	6.931 6.888 6.879 6.838 6.823			
101 GKN Transmisiones España. Accesorios para vehículos	4.615 474 459	4.194 2.793 515 3	5.514 2.997 1.461 26.609	5.042 5.002 1.578 31.208	5.389 6.316 2.364 21.415	6.650 6.646 6.604 6.535			
105 Air España. Pasaje y carga	699 4.540 2.483 5.087 5.501	3.254 4.746 2.719 5.576 4.448	2.357 3.452 3.063 5.176 7.681	4.106 4.672 3.285 6.189 4.030	7.328 5.985 1.732 4.923 4.547	6.530 6.526 6.481 6.459 6.457			
111 Enrique Lorenzo y Cía Buques e industria auxiliar	743 1.349 2.800	755 3.747	4 1.920 3.665 3.909	7.127 5.054	3.220 3.220 6.736 2.964	6.457 6.456 6.430 6.412 6.290			
116 Castellblanch. Cava	3.141 3.833 7.072 4.082	29.604 4.885 6.728 3.774	3.373 4.934 7.411 4.134	12.050 4.565 8.000 3.789	4.880 5.077 5.867 4.833	6.276 6.258 6.237 6.205 6.027			
121 Bressel. Accesorios para automóviles	12 6.180 4.611 4.196	3 6.568 5.508 4.254	3 5.157 6.829 3.418	15 5.057 7.418 4.991	1.990 5.890 7.273 5.796	5.940 5.861 5.815 5.677 5.667			
126 Sandoz Química. Derivados químicos 127 Ederlan. Accesorios para vehículos 128 Astilleros de Huelva. Buques e industria auxiliar 129 Electrificaciones del Norte. Aparellaje eléctrico 130 Nervacero. Alambrón y laminados	3.141 2 2.158 3.710	4.768 546 3.714	5.518 1.309 6.007	5.955 1 3.294 4.132	5.165 5.491 2.048 6.215	5.665 5.592 5.584 5.562 5.527			
131 Comercial de Potasas. Oxicloruro y sulfato potasio 132 E.N. Elcano. Transporte de cargas 133 José M. Aristrain Madrid. Perfiles, tubos y laminados 134 Levantina de Mármoles (Grupo). Mármoles y granitos 135 Tolsa. Bentonita y tierra decolorante	6.943 8.846 4.552	7.667 10.628 4.345	7.197 10.508 4.212	7.593 10.231 4.282	5.407 9.381 4.562	5.430 5.378 5.321 5.262 5.149			
136 Servicio Nac. Prod. Agrarios. Cereales 137 Acumulador Tudor. Acumuladores eléctricos 138 Rank Xerox Española. Máquinas de oficina. Informática 139 Industria de Diseño Textil. Prendas exteriores de vestir 140 Copreci. Termostatos, componentes, válvulas	1.547 6.021 5.841 3.020	1.247 5.584 7.023 3 3.610	3.425 4.657 6.532 28 4.018	1.183 4.377 4.785 15 4.012	1.394 6.008 6.096 3.250 4.646	5.108 5.094 5.032 5.022 4.927			

Nº	Exportación (en millones ptas.)							
orden	1987	1988	1989	1990	1991	1992		
141 Miniwatt. Tubos de imagen de TV	1.858	4.573	4.348	3.071	849 5.078	4.860 4.824 4.796		
144 Tioxide Europe. Blanco de titanio. Pigmentos	4.985	4.197	5.128	3.075	2.971	4.773 4.754		
146 La Cellophane Española. Papel celofán, polietileno	2.898 7	2.324 490	1.915 1.566	2.765 2.404	4.093 3.295	4.711 4.665		
148 Roldán. Barras, varillas y alambre	3.514 2.291	5.078 2.745	4.976 2.625	5.670 2.650	4.183 3.523	4.632 4.609		
150 Pedro Domecq. Vino de Jerez. Brandy	2.662	3.273	2.845	3.996	3.113	4.594		
 Outokumpu Copper. Semielaborados del cobre Energía e Ind. Aragonesas. Productos químicos Sala Hermanos. Material de bellas artes 	2.347 3.741	4.168 4.514	4.412 4.990	4.749 4.573	5.118 5.255	4.592 4.569 4.540		
154 SWF Autoelectric. Equipos limpiaparabrisas	518 3.156	897 3.102	2.102 4.180	3.420 3.724	4.325 4.280	4.487 4.454		
156 Sáez Merino. Prendas de vestir tejanas	2.280	1.421	2.613	4.429	4.403	4.420		
157 Frape Behr. Accesorios para vehículos	2.143 5.570	2.222 3.298	2.454 3.245	2.835 2.922	3.760 3.932	4.399 4.393		
159 Solvay. Química básica	3.222 2.355	5.003 2.687	4.689 2.251	4.624 2.781	3.704 3.275	4.358 4.349		
161 Hola. Revistas. Semanario ¡Hola!	625	1.110	1.498	2.365	2.475	4.310		
162 LTE International Airways. Vuelos charter	3.617	4.506	5.160	4.229	5.414	4.301 4.277		
164 Alúmina Española. Oxido de aluminio	1.834	6.822	6.117	7.067	6.001	4.274 4.260		
166 Conservas y Frutas. Conservas vegetales	3.982	4.411	4.008	4.246	4.562	4.213		
167 Aiscondel. Pvc y transformados	4.738 4.081	6.653 4.665	5.471 5.309	6.287 4.122	4.066 3.470	4.168 4.140		
169 General Química. Química básica y agroquímica	511 2.775	670 3.261	2.620 3.809	3.287 3.500	3.802 3.591	4.126 4.121		
Xyloquímica				125	1.252	4.035 4.022		
Benetton España. Prendas confeccionadas	2.613	3.381	5.013	4.161	2.909	4.017		
MB España. Juguetes	773 694	1.507 936	2.504 985	3.327 1.991	2.966 3.163	3.989 3.966		
176 Telettra España. Sistemas de telecomunicación	607	1.190	1.096	2.179	2.491	3.955		
177 Comercial Italo Española. Pieles de ovino curtidas	4.917 2.563	3.221 2.908	3.569 2.679	3.471 2.680	3.581 3.462	3.932 3.931		
179 Fulltsu Espana. Matenal mformatico	282 2.489	2.021 1.802	6.688 2.224	6.196 3.368	4.745 3.156	3.914 3.910		
181 Esmalglass. Esmalte vitrificado y frita	1.240	1.345	1.971	2.454	2.834	3.896		
182 Generadores de Vapor F.Wheeler. Válvulas y calderería	16 2.854	3.518	107 3.620	2.475 4.047	2.665 4.184	3.861 3.835		
184 Consultores Tecnologías Punta. Naves llave en mano	2.730				894	3.802		
185 Aceites y Proteínas. Aceites de semillas	2.730	2.877	3.278	2.863 719	975 2.141	3.794 3.782		
187 Alginet Textil. Tejidos denim, pana y otros	1.7.40	2.741	1.450	4.470	3.592	3.745		
188 Valeo Térmico Motor. Radiadores para coches	1.742 2.001	2.741 2.660	3.651 2.750	3.136 3.068	3.352 3.675	3.730 3.719		
190 Becton Dickinson. Material de laboratorio	1.489	2.087	2.009	2.255	2.814	3.633		
191 Metalúrgica Galaica. Hierro, acero, laminados	2.071 4.264	1.521 2.748	1.021 1.974	1.658 1.351	1.200 7.554	3.607 3.603		
193 Forjas y Aceros de Reinosa. Piezas forjadas	2.555	3.134	4.622	5.326	4.692	3.555 3.554		
Hispano Mecano Eléctrica. Envolvente metálico. Aislantes	1.119	1.590	1.870	2.696	3.165	3.551		
196 Siemens Nixdorf. Material informático	6.881	7.226	8.831	5.042	7.102	3.550		
197 Cristalería Española. Vidrio en bruto y trabajado	5.565 2.824	6.724 3.235	6.602 3.504	5.867 3.688	3.597 3.739	3.540 3.535		
199 Amper. Aparatos de telecomunicación	1.088 1.584	1.663 1.861	2.263 2.302	1.825 2.615	1.401 3.230	3.529 3.527		
201 General Electric CGR. Aparatos de electromedicina	1.747	2.112	2.490	2.674	3.467	3.519		
202 Merlin Gerin Gardy. Aparellaje eléctrico	742	774	1.029	2.043	2.102	3.471		
203 Agroponiente. Hortalizas y frutas	67 2.603	1.417 3.489	1.451 6.423	2.332 6.621	4.250 3.072 2.455	3.470 3.440 3.425		
205 Sandeman Coprimar. Mosto fermentado y vinos	2.577	2.665	2.361	2.702	2.455 2.708	3.425 3.380		
206 Industrial Asturiana S.Bárbara. Semielaborados de cobre	626 3.740	2.156 4.273	3.129 4.643	3.737 4.298	3.011	3.378		
208 Erhsa Qmm1ca bas1ca	167 2.631	253 2.879	392 3.367	6.686 2.871	4.233 2.977	3.376 3.331		
210 Transcatalana de Comercio. Cereales	2.145	744	1.285	2.515	2.190	3.323		
JULIO,	1993					63		

Economist & urist

		v cc uii		ortación (en r	nillones ptas.	.)	
N ^o orden		1987	1988	1989	1990	1991	1992
211	Laboratorios Radio GH. Manufacturas de materias plásticas	233	271	870	1.308	2.419	3.322
212	Richco Rotterdam. Cereales	1.502	2 126	2.504	1.165	2.451	3.316
213 214	Zardoya Otis. Ascensores y accesorios	1.503 46	2.126 858	2.594 2.992	2.937 3.703	3.159 4.109	3.308 3.305
215	Jumberca. Maquinaria textil	9.253	6.256	9.623	5.905	5.453	3.270
216	Repsol Derivados. Productos químicos	310	2.050	3.249	2.770	2.759	3.266
217	Agro Sevilla. Aceite de oliva	371	1.884	732	5.466	1.937	3.248
218 219	Taulell. Baldosa y gres	839 1.762	1.180 1.954	1.444 1.770	1.645 2.430	2.333 3.814	3.24 3.21
220	Cargill España. Aceites y harinas de semillas	9.467	10.151	13.119	7.755	5.135	3.21
221	Faespa. Faros para vehículos	1.694	1.550	2.369	2.822	3.356	3.17
222	Scott Miranda. Pasta de papel	2.272	4.200	4.374	6.195	5.281	3.14
223 224	Investrónica · Ordenadores personales	3.372 1.561	4.280 1.814	5.926 2.023	4.113 2.161	2.847 2.920	3.14 3.13
225	Juliana Constructora Gijonesa. Industria naval	1.501	1.014	2.023	2.101	2.720	3.12
226	Juan Ballester Roses Sucesores. Aceite de oliva, girasol, maíz	1.557	1.806	2.008	2.695	2.608	3.122
227	Varta Baterías. Baterías y accesorios						3.108
228 229	Industrias Frigoríficas Louro. Productos cárnicos	148	58	677	1.167	1.294	3.092 3.073
230	Nurel. Hilados y fibras	2.197	2.191	2.087	2.613	2.638	3.066
231	Diana. Calzado	1.070	1.584	1.476	2.350	2.684	3.060
232	Veto rex España. ibra e vidrio ::;	2 492	2 977	2 402	2 0 4 4	2 400	3.042
233	Patricio Echeverna. Forja y fund1cmn	2.483 1.858	2.877 7.011	3.493 1.620	3.844 1.967	3.400 2.306	3.030
235	S.A. de Fibras Artificiales. Hilados y fibras	509	525	1.231	1.441	5.355	3.010
236	Fábrica Nac. Moneda y Timbre. Pasta papel. Billetes y moneda	295	195	531	563	2.656	2.99
237	Celaya Emparanza y Galdós. Aparellaje eléctrico,	1.165	1.338	1.563	2.499	2.588	2.983
238 239	Erkimia. Productos químicos				4.782	2.964 6.117	2.982 2.979
240	Industrias Peleteras. Piel de ovino y cordero	3.596	3.309	3.008	2.584	2.623	2.96
241	Grespania. Baldosas de barro y gres	780	1.269	1.846	2.126	2.453	2.962
242	AMP Española. Aparatos eléctricos	339	354	598	865	2.204	2.95
243	Manuel Garrido Fernández. Conservas vegetales y frutales	1.991	1.758	2.335	2.214	2.582	2.95
244 245	Hornos Ibéricos Alba. Yeso y cemento portland	4.754 237	5.143 247	14.942 978	3.824 1.610	3.187 1.882	2.948 2.948
246	Industria Navarra del Aluminio. Perfil de aluminio aleado	991	2.499	3.087	1.981	2.490	2.92
	Civinasa. Vino blanco y tinto	281	204	262	1.671	4.194	2.90
	Rico y Echeverría. Hierros y aceros	2.168	2.032	1.683	1.587	3.040	2.89
	Rockwell ABS España. Accesorios para automóviles	67 1.936	122 1.976	483 2.555	1.776 1.713	1.675 1.782	2.88 2.88
251	Gonvarri Industrial. Productos siderúrgicos	196	315	481	458	903	2.863
252 \$	Sesostris. Cebada y trigo	7.242	1.529	5.374	3.899	2.439	2.82
	Ampo. Válvulas eléctricas y neumáticas	1.237	1.965	2.039	2.936	2.423	2.82
254 255	Manufacturas Fotográficas Esp. Material fotográfico	2.054 1.911	2.632 2.631	2.406 2.754	3.533 2.104	3.240 2.520	2.81
256	Unión Carrocera Castro Caride. Carrocerías	21	26	32	423	4.183	2.809
257	Victorio Luzuriaga. Fundición de hierro	2.310	3.170	3.669	3.472	2.834	2.80
	Saginaw Overseas. Componentes de automóvil	806	2.699	2.808	3.354	2.605	2.75
260	Vicasa. Vidrio. Botellas y frascos	1.050 2.664	1.042 1.869	1.875 1.968	3.162 1.956	3.680 2.335	2.74° 2.74°
261	Tampalla Egnañala Cartán para industria gráfica	2.011	2 127	2 205	2 722	2.059	2.72
261 262	Tampella Española. Cartón para industria gráfica	2.011 1.018	2.137 958	2.305 1.246	2.733 1.808	2.058 2.020	2.73 2.73
263	Vuelos Internac. Vacaciones. Transporte aéreo charter						2.72
264 265	Revestimientos Esp. Moldeados. Frenos para automóviles	1.013 492	1.608 692	1.609 895	1.725 1.438	2.073 2.242	2.72 2.72
	Siemens Matsushita Components. Componentes informáticos Naviera Vizcaína . Transporte naval			602	2.604	3.009	2.70° 2.70°
268	Chemo Ibérica. Productos farmoquímicos	1.040	2.306	1.848	1.752	1.748	2.700
269 1	Export. Viníc. Valenciana. Vinos de mesa, mostos y vermut Ingemar. Mármol y granito manufacturado	1.767 2.165	1.493 2.494	1.658 2.756	2.490 2.842	3.132 2.861	2.679 2.660
271	José Hernández Pérez e Hijos. Conserva vegetal y de fruta	1.542	2.231	2.418	2.400	2.312	2.65
272	Valeo Climatización. Equipos climatización auto			∠. ⊤1∪	1.001	1.844	2.63
273	M}\ale. Piezas sueltas para motores	728	890	1.339	1.955	2.298	2.63
	Printer Industria Gráfica. Libros y revistas	3.564 984	3.781 1.518	3.783 1.874	3.268 1.449	2.662 1.856	2.63 2.61
	Ferro Enamel Española. Fibras y esmaltes						
274] 275	•		1.014	1.040	1.700	1	0.00
274 1 275 276 1	Papelera Guipuzcoana Zicuñaga. Pasta de papel y papel	1.281	1.214 1.899	1.948 1.734	1.788 2.307	1.675 2.082	
274 1 275 276 2 277 0 278	Papelera Guipuzcoana Zicuñaga. Pasta de papel y papel	1.281 2.878	1.899	1.734	2.307	2.082	2.582 2.562
274 1 275 276 2 277 0 278	Papelera Guipuzcoana Zicuñaga. Pasta de papel y papel	1.281					2.600 2.582 2.562 2.562 2.562

Economist & Jurist

	Economis	n WJul	131				1
Nº			Exp	ortación (en r	nillones ptas	.)	
orden		1987	1988	1989	1990	1991	1992
281	Lignotock Galicia. Partes de carroceria	3.023	4.848	5.244	4.233	4.683	2.558 2.549
	PPG Ibérica. Pintura para carrocería	1.637	1.359	1.720	2.152	2.465	2.537
284	Skis Rossignol de España. Esquís para nieve	1.829	1.888	2.045	2.559	2.622	2.536
285	Radiadores Ordóñez. Radiadores para el automóvil	1.676	1.864	2.006	2.293	2.282	2.534
286	Azuvi. Azulejos y baldosas	673	1.007	1.464	1.434	1.840	2 527
287	Refinados del Aluminio. Piezas de forja y fundición	32	351	981	1.126	1.697	2.527 2.518
288	Matrici. Accesorios para automoción	783	1.349	1.568	3.277	3.927	2.514
289	Osborne y Cía Vinos de Jerez y brandies	1.535	1.913	1.695	1.962	2.051	2.496
290	Lucas Girling. Componentes y accesorios automoción	1.060	1.024	1.540	1.597	2.644	2.494
291	Industrias Acetato de Celulosa. Hilado de rayón acetato	1.632	1.832	1.861	2.156	2.230	2.492
292	S.A. Cardoner. Sulfuros y colorante al azufre	1.446	1.663	1.701	2.151	2.289	2.492
293	Loewe. Bolsos y prendas de piel	1.537	2.103	3.200	3.635	2.343	2.491
294	Derivados del Etilo. Bromuro de metilo, fenilglicina	1.652	1.609	1.917	1.785	2.561	2.490
295	Famosa. Muñecas y juguetes	2.383	2.618	2.575	2.498	2.725	2.490
296	Basf Pinturas y Tintas. Pinturas, esmaltes y barnices	424	448	519	1.073	1.806	2.481
297	Agrícola Alginet. Hortalizas, cítricos y frutas	1.821	1.415	1.896	1.691	2.470	2.475
298	Arbora Holding. Pañales y compresas					1.361	2.408
299 300	Sánchez Polaina Harinas y sémolas	3.790	2.502	1.270	1.027	2.20.4	2.457
300	Oleaginosas Espanolas. Acette de soja	3.790	2.592	1.279	1.927	2.294	2.442
301	Auxonia Higiene. Polvo talco. Higiene femenina						2.436
302	Sefanitro. Productos químicos	1.573	1.381	329	837	1.107	2.430
303	General de Confitería. Goma de mascar y caramelos	1.341	1.807	1.884	2.334	2.441	2.424
304 305	Duo Fast de España. Grapas y clavos de hierro	2.210	2.396	2.785	2.692	2.514	2.423
303	Cultivities y 1120 1. Construction						2.422
306	Talleres de Escoriaza. Cerrajería	1.286	1.714	2.173	2.071	1.882	2.422
307	Financiera Maderas Amaderas semimanufacturadas	1.908	1.742	1.418	1.368	2.496	2.420
308	Grafitos Eléctricos Noroeste. Electrodos para hornos	2.644	2.382	2.808	2.691	2.136	2.405
310	Iván Shoes. Calzado	816	950	906	914	893	2.404
010	Transporte y pasaje marianio minimi						2.403
311	Coop. Hortofrutícola Ejidomar. Hortalizas	1.499	1.869	1.663	1.597	1.934	2.396
	Gallital Ibérica. Componentes para automoción	2.090	1.932	2.439	2.153	2.438	2.395
314	Industrias Pont. Aceite de oliva	2.913	1.724	1.960	2.007	2.203	2.393
315	Benteler España. Componentes de automoción	1.130	1.400	1.996	2.100	2.231	2.390
010	Seniore: Espanar Componences de automotion minimum			9	1.050	2.301	2.389
	Sintermetal. Amortiguadores para automóvil	1.237	1.596	1.789	1.878	2.077	2.387
	Orkli. Aparatos sanitarios	774	1.043	1.260	1.372	1.853	2.378
318	Todomold . Accesorios automóvil	454	573	881	1.193	1.664	2.374
320	Navarra Componentes Electrón Material electrónico	886	1.583	3.954	2.288	2.230	2.369
		000	1.565	3.934	2.200	2.230	2.361
321	Cía. Andaluza de Minas. Minerales metalúrgicos	2.077	2.246	1.799	1.788	2.859	2.354
322 323	Comercial de la Forja. Forja de hierro			860	1.809	1.703	2.352
324	Química Farmacéutica Bayer. Acido acetilsalicílico	1.144	1 220	000	53	2.178	2.349
325	Cerámicas Aparici. Pavimentos y revestimientos	201	1.220 400	999 726	1.902 1.378	1.917 2.003	2.337 2.331
		201	100	720	1.576	2.003	2.331
326	Maximino Moreno. Conserva vegetal y de fruta	1.164	1.024	1.253	1.090	2.129	2.331
327 328	Industrias Reunidas Automoción. Accesorios automóvil	13	50	169	443	1.576	2.330
	Cía. Exportadora Frutícola Sol. Frutas	3.713	2.845 345	3.494 483	2.365 768	3.022 1.933	2.326 2.324
	Natra. Ĉacao y manteca de cacao	2.110	2.152	10.123	2.029	2.147	2.324
221							
331 I 332	Fagor Arrasate. Máquina herramienta	834	856	1.654	2.941	1.405	2.318
	osé Guiu y Cía. Aceite de oliva en bruto	1.311	158 1.767	1.625 1.455	1.774 4.102	1.924 5.901	2.315 2.304
	Agraz. Conservas vegetales	1.291	1.583	2.569	2.163	1.918	2.304
335	Carbonen y Cía. de Córdoba. Salsas y condimentos. Aceites	988	1.675	1.045	1.469	1.947	2.295
336	Vicente Gandía Pla. Vinos	1.045					
337	Givaudan Ibérica. Química básica	1.345 1.108	1.120	1.331	1.657	1.736	2.256
	Tipel. Pieles acabadas	1.106	1.153 2.535	1.503 3.886	1.749 3.231	1.975 2.816	2.250 2.247
	Líneas Aéreas Canarias. Transporte aéreo. Carga		2.555	3.000	3.231	2.010	2.241
340	Industrial Química del Nalón. Coque de hulla, disolv. nafta	1.435	1.854	2.587	2.504	2.635	2.241
341	Fontestad. Hortalizas y cítricos	1.526	1.004	1 422	1 570	1 000	2 220
	Química Sintética. Compuestos farmacoquímicos	1.526	1.984 1.017	1.433 866	1.578 1.239	1.888	2.239 2.237
	Accesorios de Tubería de Cobre. Tubería de cobre	860	1.121	951	1.239	1.484 1.686	2.237
	Curtidos la Doma. Cuero de cordero	624	870	789	1.107	1.789	2.225
345	Mercados en Origen. Hortalizas, frutas y cítricos	5.058	3.955	2.086	1.120	4.925	2.217
346	San Miguel Fábricas de Cerveza. Cerveza	702	928	1 261	1 451	1 405	2 215
	ndustrias Promociones Alimen. Salsa y concentrado de tomate	249	928 351	1.261 488	1.451 482	1.495 1.316	2.215 2.212
348	Setra. Carrocerías. Autocares	119	11	82	2.018	2.891	2.212
	Cía. Electrónica del Automóvil. Accesorios para vehículos	473	619	837	1.192	1.328	2.199
350	Industrias Químicas de Navarra. Productos agroquímicos	1.740	1.973	1.864	1.980	2.418	2.197

Economist & urist

			Expo	ortación (en r	nillones ptas.)	
Nº orden		1987	1988	1989	1990	1991	1992
351	ICI Mevisa. Colorantes	1.399	1.712	2.037	1.981	1.962	2.194
352	Maye. Lavadoras automáticas	2.199	2.285	2.053	1.889	2.113 820	2.189 2.188
353 354	Di'!_l Roy Ibérica. Confc.ción ropa interior	1.207	1.550	1.544	1.710	2.042	2.186
355	Mecánica de la Peña. Calderería y maquinaria	208	91	881	1.651	2.890	2.185
356	Criaderos Minerales y Deriv. Sulfato neutro de sodio	1.539	1.356	1.787	1.771	1.668	2.184
357 358	Sociedad de Compras Modernas. Productos alimenticios	295 1.155	792 3.304	980 2.046	1.277 1.552	1.563 2.450	2.183 2.180
359	Microser. Circuitos impresos eléctricos	415	556	1.111	1.717	1.666	2.179
360	Salgado y Cía Aceite de oliva	902	1.070	1.413	3.247	4.794	2.175
361 362	Esteve Química. Compuestos heterocíclicos Bagu. Naranja dulce y clementina	483 1.803	812 1.869	1.982 1.620	2.103 1.738	2.640 2.407	2.174 2.171
363	Cables de Comunicaciones. Cables telecomun. y eléctricos						2.169
364 365	Bonny. Productos hortofrutícolas	1.639	1.447	1.553	1.373	1.841	2.148 2.147
366	Astilleros Reunidos Nervión. Equipos de construcción naval	3			7.414	4.939	2.143
367 368	Señalización y Acc. Aut. Yorka. Accesorios automóvil	1.033	1.585	1.453	1.794	1.140 2.605	2.142 2.141
369	Frutas Maripi. Frutas	1.180	1.120	1.466	1.393	2.131	2.136
370	Coop. Nuestra Señora la Bella. Productos hortofrutícolas	1.023	859	1.107	1.481	1.750	2.126
371	Emesa Trefilería . Alambre de acero para hormigón	1.783	1.897	2.829	2.319	1.455	2.116
372	Esmaltes Cerámicos Torrecid. Pavimentos cerámicos	90	63	87 806	356 449	1.344 1.558	2.115 2.112
374 375	Derivados Lácteos y Alimentic. Alimentos congelados	415 1.361	781 1.621	1.047 1.647	1.549 2.205	2.026 2.083	2.101 2.098
	·						
376	Industrias Mecánicas Galicia. Proyectos industriales Les Must de Cartier España. Artículos de relojería	1.131 2.215	2.511 2.156	1.822 3.026	2.411 2.379	3.267 1.802	2.096 2.096
378	Fermentaciones y Síntesis Esp. Farmaquímica	1.320	1.529	2.272	2.011	1.964	2.092
379 380	Unión Químico Farmacéutica . Medicamentos	1.598	1.336	1.591 15	1.227 91	1.484 1.283	2.089 2.086
381	Cementos del Mar. Cemento clinker y portland	2.520	2.372	2.595	2.970	2.443	2.086
382	Construcciones Mecánicas Xifra . Máquina herramienta	599	1.273	1.366	1.208	1.280	2.084
383	Italco. Confección textil de caballero	672	1.456	1.860	1.649	1.752	2.081 2.081
385	Beiersdorf. Cintas adhesivas	35	44	74	225	1.829	2.076
386	Brose. Elevalunas para coches	929	34	227	460	901	2.069
387 388	Danobat. Máquinas herramientas	828 892	1.635 481	1.363 861	1.440 1.524	2.016 2.125	2.057 2.057
389 390	Angel Camacho. Aceite de oliva	1.622	1.868 210	2.152 549	1.771 1.051	2.379 1.210	2.053 2.051
		0.50					
391 392	Luis Ayuso. Acido láctico	979 5.176	1.101 1.872	1.259 956	1.296 1.760	1.668 2.103	2.044 2.035
393	Mecaner. Troqueles fabricación carrocerías	859	817	1.024	2.031	2.249	2.034
394 395	Codorniu. Vinos espumosos	1.931 1.580	1.942 1.545	2.013 2.026	1.985 1.960	1.920 2.086	2.033 2.028
396	lb Mei. Motores para electrodomésticos			1.919	1.800	1.852	2.027
397	Zayer. Máquinas herramientas	2.069	2.567	3.156	4.395	3.024	2.025
398 399	Talleres Pasaban. Maquinaria para papel	932	890 627	594 1.177	854 1.445	1.119 1.761	2.023 2.023
400	Super - Ego Tools. Herramientas de mano	1.571	2.138	1.729	1.795	1.797	2.016
401	Hermanos Escot Madrid. Cereales			-		2.125	2.009
402 403	Servicio Exp. Mat. Ferroviario. Material ferroviario Sarrió. Papel	659 9.096	112 9.273	351 10.640	1.027 9.769	836 1.955	1.997 1.995
404	Talleres Fabio Murga. Fundiciones especiales	1.003	1.231	1.592	1.690	1.619	1.990
405	Cía. Continental Hispánica. Cereales, harinas y mat. primas	6.936	4.150	1.032	3.384	1.308	1.989
406 407	Moguer Cuna de Platero. Fresas y productos hortícolas			956	1.167	1.519	1.986 1.982
408	Cía. Ibérica Gea. Intercambiadores de calor	531	935	518	1.078	1.344	1.981
409 410	Scott Ibérica . Papel tisú	1.526	5.217	3.102	1.322	1.839	1.973 1.965
411	Henkel Ibérica. Productos de limpieza y detergentes	75	176	279	1.024	1.721	1.963
412	BDF Nivea. Productos cosméticos	1 571	9	12 653	401	1.340	1.959
413	Agraria de Transf. Hortichuel. Hortalizas		600		1.027	1.554 1.411	1.957 1.947
415	Teka Industrial . Fregaderos, cocinas y hornos	1.192	1.530	2.285	1.476	1.667	1.943
416 417	Regex. Hilados de algodón y sintético	758	1.003	842	898	1.049	1.940 1.937
418	Rodrigo Sancho. Piel de caprino curtida	1.252	2.058	1.771	1.834	1.559	1.936
419 420	Boss España. Maquinaria de elevación	1.741	568 1.652	1.167 1.730	2.349 1.815	2.403 1.947	1.936 1.926
720	Destinationes D. Chinematicia. Flantas atolitaticas	1./+1	1.032	1.730	1.013	1./+/	1.720

Economist & Jurist

			Exp	ortación (en	millones pta	s.)	
Nº ordei	1	1987	1988	1989	1990	1991	1992
421 422 423 424 425	Manufacturas de Estaño y Plomo. Productos para envases	800 972 1.982 349	1.060 1.341 1.742 522	1.167 1.320 2.272 566	1.538 1.482 2.347 904	1.966 1.780 2.469 1.416	1.922 1.919 1.918 1.912 1.908'
426 427 428 =	Industrias Palex. Fármacos hospitalarios Ruffini. Piezas sueltas para automoción Española del Zinc. Zinc electrolítico. Aleaciones Moehs. Química básica Carrera y Carrera. Artículos de joyería	1.353 1.139	1.530 1.674	1.817 1.695	2.055 2.155	1.852 1.773	1.908 1.906 1.903 1.902 1.901
431 432 433 434 435	Hernández Zamora. Sandías, tomates y melones	902 1.805 247 96 1.158	887 1.923 324 262 3.936	1.356 1.921 465 141 1.469	1.300 1.891 690 1.413 1.284	1.512 2.071 880 4.063 1.606	1.899 1.895 1.893 1.892 1.889
436 = 439 440	Bodegas y Bebidas. Vino, whisky y vinagre	1.112 1.701 1.741	1.392 1.428 1.777	1.970 1.441 1.777	1.632 1.636 1.727	2.324 2.254 2.005	1.883 1.875 1.875 1.870
441 442 443 444 445	Comaro. Hortalizas y frutas congeladas	601 179 1.879	797 260 2.190	696 1.047 161 2.553 1.141	697 1.444 1.017 2.527 1.151	1.145 1.917 1.206 2.256 1.968	1.865 1.863 1.862 1.859 1.856 1.854
446 • 449 450	Productos Codorniu y Garriga. Papel adhesivo. Tejidos a: I: i ^a ; Jt	91 1.930 2 1.561	199 2.065 10 1.609	351 1.968 554 1.570	1.106 2.149 1.098 213 1.778	1.196 1.892 2.120 1.234 2.120	1.852 1.847 1.841 1.839 1.833
453 454 455	Coservas Arotz. Hortalizas y frutas	2.152 727 588 1.292	1.929 1.208 720 1.208	2.508 1.214 800 1.269	2.630 1.569 1.012 1.230 458	2.331 1.731 1.222 2.196 2.689	1.829 1.824 1.820 1.815 1.814
456 !b	Ramón Vizcaíno. Instalaciones frigoríficas I l't, c! Segad. Frigoríficos y congeladores Hiab Valman. Bombas y grúas hidráulicas	1.101 1.010 31 1.323	988 1.186 219 1.342	1.184 1.185 740 1.602	1.170 1.373 847 1.701	1.276 1.897 2.244 1.625	1.809 1.797 1.794 1.791 1.789
461 464 465	Empresa Mercantil Exportadora. Plantas industriales	1.564 1.562 1.820 510	1.795 2.099 2.009 431	. 1.846 2.438 2.472 507	2.228 1.916 1.505 694	1.873 1.778 1.283 1.156	1.788 1.786 1.785 1.782 1.782
466 = 469 470	DS Chemicals España. Derivados químicos Duro Felguera. Const. mecánicas y metálicas Cehorpa. Productos alimentarios Sancho Abarca Fábrica Calzado. Calzado para hombre Acettes del Sur. Acettes	125 1.585 184	547 1.512 337	1.247 1.797 500	2.072 1.751 1.573	2.664 1.697 1.241	1.781 1.780 1.779 1.775 1.775
473 474 475	Juliano Bonny Gómez. Hortalizas. Tomates Planeta Internacional. Libros Pizarras Samaca. Revestimientos de pizarra Ibérica del Frío. Aparatos de frío Unión Española de Explosivos. Explosivos y cartuchería	2.562 1.432	2.707 2.152	2.301 2.104 93	2.174 2.003 1.358	2.000 1.514 1.623	1.773 1.761 1.759 1.756 1.754
476 477 478 479 480	Transform. Agrícolas Badajoz. Conservas vegetales Cromogenia Units. Productos curtientes Angel Teresa Hermanos. Productos hortofrutícolas Gates Vulca. Accesorios de automoción Gillette Española. Láminas y maquinilla 'fit;	625 675 1.810 2.836	693 771 1.762	924 1.049 2.020 630 193	1.480 1.136 1.486 1.116 1.791	1.405 1.282 1.776 1.213 1.901	1.754 1.751 1.750 1.748 1.746
481 = 484 485	Sidernaval Equip. Siderúrgicos. Hornos altos. Trenes laminac Formol y Derivados. Productos químicos Tybor. Tejidos de punto	3 1.441 471 109 544	2.058 650 947 837	4 2.032 934 66 534	112 1.747 1.052 1.014 824	1.834 1.787 1.012 1.006 1.016	1.745 1.745 1.741 1.735 1.730
489	Ibérica del Alumbrado. Aparatos de iluminación	1.250 674 1.652 239	2.009 1.498 2.115 725	1.700 1.544 2.270 1.258	2.397 1.451 1.790 1.067	2.030 867 1.390 1.413	1.723 1.721 1.716 1.706 1.706

Economist & Jurist

Econor	mist	&	urist

NQ		Expo	rtacion (en	millones ptas	.)		NQ			Exp	ortación (en r	nillones ptas.)	
orden	1987	1988	1989	1990	1991	1992	orden		1987	1988	1989	1990	1991	1992
491 Agraria de Transf. Santa Cruz. Hortofrutícola	1.125	1.497	1.906	1.959	1.505	1.700 1.698 1.692	561 562 563	Amifarma. Eurohueco. Artículos de artes gráficas Pferd Ruggeberg. Muelas y abrasivos	2.213 827	230 1.196 1.052	837 667 1.206	762 972 1.380	1.289 1.247 1.374	1.505 1.500 1.496
494 Hispano Ferritas. Ferritas (núcleos magnéticos)	757 2.251	1.068 2.814	1.238 2.966	1.572 3.082	1.401 1.671	1.687 1.684	564 565	Hijos de Bautista Mecho. Cítricos Vilarrasa. Hilados de algodón	693 583	917 517	887 991	1.044 1.205	1.577 1.426	1.494 1.494
496 Giró Hermanos. Mallas para el envasado 497 Alfa Laval. Secadoras centrífugas 498 Draftex Ibérica. Piezas de caucho para vehícul.	700 1.181	835 1.156	992 2.127	1.096 1.786 310	1.566 1.810 1.641	1.681 1.681 1.680	566 567 568	Vives Vidal. Trajes de baño y ropa interior	242	320	625	931	1.360	1.483 1.483 1.480
499 Interclisa Carrier. Aparatos de climatización	2.008	1.401	1.679 133	1.393 839	1.344 1.673	1.673 1.669	569 570	Ronal Ibérica. Llantas de aluminio	1.315 1.262	1.089 875	1.600 1.044	1.085 950	997 840	1.480 1.479
501 Induxtra Suministros Llorella. Materias primas alimenticias	263	1.027	186	354	1.368	1.669 1.668	571 572 573	Resinas Sintéticas. Resinas	994 1.110	1.188 1.000	1.301 1.181	1.217 1.139	1.354 1.686	1.477 1.476
504 Curtidos Codina. Pieles y cuero de ovino	1.155 743 1.858	1.257 1.353 1.415	1.428 1.906 1.142	1.376 1.810 1.031	1.335 1.801 1.532	1.665 1.663 1.651	574 575	M. Ros. Material eléctrico automoción Construcciones Mecan. Caballé. Maquinaria herramienta	1.173 222 144	846 358 187	1.156 307 317	1.093 871 297	1.373 1.271 1.326	1.472 1.472 1.470
506 General Española de Librería. Libros escolares y de lectura 507 Frenos y Embragues. Frenos y pedales de mando	1.237 140	951 514	974 1.999	1.174 1.304	1.532 1.517	1.643 1.636	576 577	Productos Industriales Caucho. Artículos de caucho Telemecánica Elect. Española. Automatismos industriales	575	727	758	855	1.087	1.470 1.468
508 3M España. Transformados químicos	935 1.130 4.723	1.168 1.203 2.214	1.367 1.254 2.815	1.309 1.532 2.214	1.135 1.340 1.774	1.631 1.630 1.628	578 579 580	Fibras del Noroeste. Tableros de fibra	1.636 691	6 2.832 879	33 3.035 1.068	483 2.029 877	1.044 1.188 1.051	1.467 1.467 1.466
511 Frutas Romo. Cítricos	1.104 1.279	925 954	933 761	1.223 737	1.335 1.203	1.618 1.618	581 582	Centracero. Productos siderúrgicos	568 530	934 685	932 737	1.015 1.233	1.748 1.340	1.460 1.458
513 Juguetes Feber. Peluches y juguetes	1.195 614 270	1.509 1.035 331	716 938 470	1.045 1.156 1.001	1.619 1.254 1.121	1.614 1.614 1.613	583 584 585	Fundiciones del Estanda. Aceros moldeados	779 711 118	889 715 204	967 1.083 214	1.331 991 687	1.529 1.133 1.591	1.458 1.456 1.454
516 Icuatro. Equipamiento hospitalario	1.329	1.458	1.367	1.500	1.553	1.607 1.606	586 587	Remetal. Lingotes de aluminio	2.359 1.962	2.443 1.670	2.806 1.691	3.188 1.892	1.631 1.506	1.453 1.440
518 Hidro Nitro Española. Ferromanganeso	1.939 1.036	2.197 1.335	3.069 1.568	2.041 1.710	2.422 1.334	1.605 1.604 1.598	588 589 590	Productos Cruz Verde. Insecticidas Esteban Orbegozo. Alambre de hierro	89 1.073 822	152 1.217 825	171 859 952	656 859 1.404	1.173 1.905 1.377	1.439 1.438 1.437
521 Branec	1.200	1.241	1.252	1.324	1.471	1.591 1.590	591 592	Industrias Videca. Frutas en almíbar. Conservas	880 899	854 1.197	891 1.329	886 1.498	1.347 1.727	1.434 1.434
523 Siderúrgica Sevillana. Barras de hierro y acero	4.399 261 1.420	2.848 859 2.505	4.072 998 1.633	3.163 1.113 1.636	2.209 1.605 1.080	1.583 1.582 1.578	593 594 595	Jesmar. Muñecas de plástico	1.107 1.884 529	1.146 2.031 646	1.415 1.939 731	1.664 1.613 687	1.482 1.519 1.193	1.433 1.432 1.432
526 Williams & Humbert. Vino de Jerez, ginebra, brandy	1.371 863	954 833	1.054 872	1.335 667	1.262 994	1.577 1.577	596 597	Volpak. Máquinas industria alimentaria Elring Española. Juntas para automoción	481 221	740 223	767 391	1.016 744	1.191 1.270	1.430 1.428
528 Helados La Menorquina. Helados	567 214 1.887	783 373 1.915	1.286 490 1.654	1.572 521 2.437	1.612 835 2.487	1.576 1.574 1.574	598 599 600	Krainel. Pequeños electrodomésticos	1.012 860	719 1.138 5	900 1.283	1.284 1.232 1	1.354 1.361 972	1.427 1.426 1.425
531 Francisco Oliva. Productos de la huerta 532 Giesa Schindler. Ascensores. Repuestos	1.210 124	1.03i 225	1.160 1.008	1.132 1.450	1.154 1.492	1.572 1.571	601 602	Hilados y Tejidos Puigneró. Tejidos de algodón e hilados	2.330 1.157	3.265 1.237	2.291 1.731	2.148 1.375	1.617 1.549	1.412 1.406
533 Bitossi España	1.166 482	1.374 3.234	1.241 3.566	1.330 2.906	1.659 2.463	1.571 1.570 1.570	603 604 605	Agraria de Transf. Abemar . Hortalizas	1.421 370 896	1.581 494 1.434	1.493 385 1.343	1.226 883 1.232	1.782 846 1.552	1.405 1.399 1.399
536 Todagrés. Baldosas y otros pavimentos	1.006 1.312	1.104 1.341	1.481 1.326	1.193 1.361	1.474 1.629	1.557 1.555	606 607	Hernández Contreras. Conservas vegetales y frutas	978 1.327	904 945	984 1.082	1.051 738	1.522 1.299	1.399 1.394
538 Sachs Ibérica. Componentes automóvil 539 Enfersa. Nitratos. Fertilizantes 540 S.A. de Vera. Guías para ascensores	297 1.620 910	161 2.529 1.452	75 3.704 1.384	678 5.287 1.340	1.227 1.779 1.380	1.547 1.547 1.546	608 609 610	Pérez Escámez Hermanos. Conserva de vetegales y frutas	1.825 1.042 955	1.629 1.083 767	1.485 1.303 1.366	887 1.234 998	2.117 1.473 1.087	1.393 1.391 1.390
541 Gutiérrez Ascunce Corporación. Equipos de construcción naval 542 Minerva. Aceite de oliva envasado	558 3.505 246	1.428 4.334	1.628 2.584 405	1.030 3.948 491	1.400 7.182	1.544 1.536 1.535	611 612 613	Maquinaria Icopsa	124	190	468	854	942	1.389 1.385
544 Hispano Química. Productos químicos auxiliares 545 Mozárbez. Embutidos	1.188	327 1.053	1.318	1.068	1.139 1.005	1.534 1.533	614 615	Grupos Diferenciales. Accesorios automóvil	1.539 691	1.422 980	1.646 1.050	1.692 1.048	1.699 1.068	1.385 1.381 1.377
546 Ferruzzi Trading Ibérica. Materias primas para piensos	334	223	353	3.306	2.903	1.528 1.527	616 617	Productos Asfálticos. Derivados asfálticos	1.560	2 1.724	3 2.138	178 2.657	4.330 2.626	1.374 1.373
548 Conservas Veget. Extremadura. Conservas vegetales	441 1.659	600 889	966 1.208	1.120 2.003	1.223 1.348	1.526 1.521 1.520	618 619 620	Maiers. Transformados de plástico	705 683 1.784	948 462 1.754	923 559 1.234	920 641 1.066	1.388 866 1.280	1.373 1.371 1.371
551 Cookson Ceramics Ibérica. Pigmentos y esmaltes 552 Matadero Frigorífico Motellos. Carnes	165 28	208 544	298 926	283 1.219	990 1.236	1.519 1.518	621 622	Festina. Relojes Levantina Industrias Asociadas Medichem. Compuestos farmacéuticos	427	650	0.4.4	1.000	1 200	1.371 1.370
553 Oype Ebanistería. Marcos y espejos	336	1.398	652 746	736 2.007	979 1.437	1.518 1.517 1.511	623 624 625	Flamagás. Encendedores y multicargas Vincke. Tubos, caucho, hierro, acero	437 1.036 763	658 918 762	844 1.054 833	1.088 1.242 1.056	1.286 1.429 1.252	1.367 1.367 1.363
556 Felguera Calderería Pesada. Calderería	324	416	636	811	1.236	1.509 1.508 1.508	626 627 628	Industrias Químicas Asociadas. Productos químicos	360 750	1.205 796	4.917 690	1.654 539	1.426 941	1.363 1.360
558 Frutas Selectas Murcianas. Hortotruticolas 559 Tecnología Metalúrgica. Piezas de hierro y bronce 560 Metacal. Piezas de funcición automoción	2.763	607 3.362	732 3.616	834 3.161	1.439 2.100	1.508 1.507 1.506	628 629 630	Mecánica de Los Corrales de B. Piezas para automoción	160 778	557 110 507	295 140 890	509 480 969	980 944 1.259	1.359 1.357 1.356

Economist & urist

	CX UII		ortación (en r	nillones ptas.	.)	
N° orden	1987	1988	1989	1990	1991	1992
631 Coop. Industrial Batz. Accesorios automoción	424	384	440	1.052 977	1.634 1.432	1.356 1.355
633 Industrias y Confecciones. Prendas textiles exteriores	1.469	1.141	364	991	1.112	1.351
634 Girbau. Lavadoras industriales	815 1.695	1.106 1.939	1.239 2.052	1.464 2.488	1.433 1.927	1.347 1.346
635 Nicolás Correa. Máquinas y aparatos eléctricos	1.093	1.939	2.032	2.400	1.927	1.340
636 Luis Páez. Vino de Jerez y brandy	1.050	1.116	934	1.118	1.009	1.343
637 Hilaturas Miel. Hilos acrílicos	301 754	119 714	246 1.053	379 1.344	1.075 1.412	1.342 1.338
639 Bodegas Age. Vinos	1.547	1.455	1.262	1.432	1.277	1.336
640 Danesa Bau Rafael Salgado. Aceites y semillas					1.052	1.334
641 Vda. de Marcelino Mtz. e Hijos. Granito	550	579	826	782	1.117	1.329
642 Selcom Aragón. Puertas automáticas ascensores	348	394	655	889	1.216	1.323
643 Artes Gráficas Toledo. Libros	1.608 49	2.173 375	2.080 914	1.588 1.377	1.245 3.567	1.322 1.320
644 Autotex. Tapicerías para automoción	49	313	339	1.134	1.261	1.320
•				4 227		
646 Digital. Sistemas informáticos	334 732	758 666	962 1.031	1.227 779	1.701 1.109	1.316 1.315
648 Hispavic Industrial. Semimanufacturas de plástico	1.199	838	1.076	1.168	798	1.314
649 Heraclio Fournier. Naipes. Artículos de papelería	1.279	1.274	1.369	1.128	1.469	1.310
650 Isolux. Instalaciones eléctricas	150	150	93	40	1.112	1.308
651 Cronion. Libros, revistas y otros	2.106	2.168	825	1.661	1.637	1.305
652 Castillo Export. Hortalizas	698	838	1.790	917	970	1.300
653 A.g.raria de :rranf. Arena. Hortalizas y frutas	587 537	611 594	589 597	758 487	1.211 828	1.300 1.296
655 Perfil en Frío. Tubos y perfiles	1.714	1.275	1.676	1.576	1.188	1.296
CEC Lineates Especiales Community automobile	72	543	759	714	1.160	1.294
656 Lingotes Especiales. Componentes automoción	12	343	139	/14	1.100	1.294
658 TRW Torfimasa. Accesorios automoción	1.015	1.488	1.501	1.301	1.603	1.293
659 Eduardo Vieira. Pescado fresco y congelado	967	1.174	1.221	1.313	1.088	1.290 1.289
• •	2.106	1.760	2.071	0.122	1 450	1 200
661 S.A. Camp. Detergentes y jabones	2.186 818	1.768 887	2.071 930	2.133 986	1.452 1.320	1.288 1.286
663 Proquisa. Productos químicos						1.286
664 Televés. Antenas de televisión	421 13	523	1.041 1.161	1.841 161	1.336 1.237	1.286 1.286
666 Corchos de Mérida. Tapones de corcho	205	368	596	786	1.056	1.280
667 Plásicos.Españ?l s. Transformados de plástico	94	738	652	248	1.327	1.279
668 Dog1. Tejidos elastlcos	1.046	1.284	1.462	1.569	1.404	1.278
669 Poliglás . Fibra de vidrio. Poliéster	1.360 314	1.168 428	982 697	953 823	1.166 1.311	1.276 1.275
671 Sener Ingeniería y Sistemas. Ingeniería	415	986 191	232 535	278 273	1.509 953	1.270 1.268
672 Tableros de Fibras. Maderas y tableros	588	191	333	213	933	1.266
674 Alfa Manufacturing Company. Menaje de acero inoxidable	308	575	832	964	1.247	1.266
675 Porcelanas de Saneamiento. Sanitarios	497	514	601	723	961	1.264
676 Kali Chemie Ibérica . Materias primas alim.y farmac						1.264
677 Octaviano Palomo. Cereales	376	422	605	905	842	1.261
678 Textil Aparicio. Textiles para el hogar	773 891	750 913	832 636	895 706	1.108 1.075	1.253 1.247
680 Antel Pieles curtidas	1.703	1.370	1.227	943	852	1.242
601 Davides v. Formon Emites oftwices v. houtelizes	950	700	940	722	989	1 242
681 Perales y Ferrer. Frutas, cítricos y hortalizas	852 469	788 543	849 749	835	983	1.242 1.242
683 Curtidos de Peletería. Cueros y pieles curtidas	1.913	1.334	1.293	1.145	1.255	1.241
684 Comuna. Conservas vegetales	774	980	884	926	1.224	1.239 1.235
685 Cikautxo. Piezas técnicas de automoción	603	852	951	885	1.069	1.233
686 Fulgencio Hernández. Conservas vegetales. Zumos	950	1.000	969	1.050	1.360	1.235
687 Alu - Perfil España. Extrusionado de aluminio						1.232 L232
689 Benitex. Tejidos y mallas de plástico	91	148	220	487	915	1.231
690 Cerámicas Gaya. Baldosas de barro y gres	354	418	569	860	1.075	1.231
691 Bodegas Schenk. Sangría. Vinos	1.221	1.345	1.161	1.162	1.148	1.231
692 Diemen. Maquinaria eléctrica	384	501	553	862	1.224	1.228
693 Rotatek. Encuadernadoras, rotativas	1.126	1.257	1.314	1.871	1.834	1.227
694 Agraria de Transf. Roquetas. Productos de la huerta	683 1.064	791 844	831 1.297	1.036 1.135	1.232 1.253	1.224 1.223
696 Manufacturas y Acc. Eléctricos. Faros, intermitentes, lámparas 697 Gumix. Maquinaria caucho y plástico	883	906	1.082	1.075	1.318	1.222 1.222
698 Fritta. Esmalte vitrificado, frita	360	529	619	1.010	1.247	1.221
699 Cosim. Maquinaria para metalurgia	1.1	120	700	914	1.401	1.219
700 Star Bonifacio Echeverría. Armas de caza y cortas	11	428	780	814	1.491	1.217

Economist & urist

Number 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 1994 1995			Expo	ortación (en n	nillones ptas.)	
1702 Hermandad Farmac, Mediterránco, Productos farmacéuticos 192 343 671 627 1.110 1.216 703 Cia Colomé de Aceites, Aceite de oliva refinando 1.214 704 Koolair, Aparatos calefacción y aire acondicionado 1.214 705 Conservas Sanfrutas, Conservas vegetales 1.214 706 Fundiciones Gelma, Piezas de fundición bajo plano 51 854 1.120 1.460 2.026 1.211 707 Agraria de Transt, S. Cayetano, Hortalizas 789 945 939 905 977 1.209 708 Dart Rhefrie, Envases termolpats, V vidrio 712 249 715 845 952 1.209 709 Generos de Punto Torras, Prendas de vestir de ante 802 1.014 980 1.057 944 1.209 709 Generos de Punto Torras, Prendas de vestir de ante 802 1.014 980 1.057 944 1.209 710 Arregui, Aceros laminados y llantas 995 1.087 1.194 1.066 1.207 711 Coop, Andaluza Costa de Huelva, Frutas congeladas 1.717 1.640 1.470 1.251 879 1.206 712 Berja - Frutas, Productos hortofrutícolas 1.204 1.204 1.204 1.204 713 Grupp Internacional, Calzado de piel 1.800 1.619 1.538 1.536 866 1.199 714 Barisintex, Productos farmaquímicos 1.046 930 894 1.045 1.134 1.198 715 Bubler, Maquinaria 1.197 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 716 Nutrexpa, Derivados del cacao 322 456 836 901 974 1.196 1.197 1.000 1	- Ti	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1.214	702 Hermandad Farmac. Mediterráneo. Productos farmacéuticos						1.216
2707 Agraria de Transf. S. Cayetano Hortalizas 789 945 939 905 977 1.209	704 Koolair . Aparatos calefacción y aire acondicionado	522	963	384			1.214
708 Dart Ibérica. Envases termoplast. y vidrio 712 249 715 845 952 1.209 709 Géneros de Punto Torras. Prendas de vestir de ante 802 1.014 980 1.057 944 1.209 710 Arregui. Aceros laminados y llantas 995 1.087 1.194 1.069 1.066 1.207 711 Coop. Andaluza Costa de Huelva. Frutas congeladas 1.717 1.640 1.470 1.251 879 1.206 713 Grupp Internacional. Calzado de piel. 1.800 1.619 1.538 1.536 866 1.199 714 Barisintex. Productos farmaquímicos 1.046 930 894 1.045 1.134 1.198 715 Bulher. Maquinaria 1.046 930 884 1.045 1.134 1.199 716 Nutrexpa. Derivados del cacao 322 456 836 901 974 1.196 717 Bentonitias Especiales. Bentonitas y sepiolitas 24 3.390 4.815 4.020 1.193 719 Molt's. Calzado de piel 486 698 1.008 987 1.424							
710 Arregui. Aceros laminados y llantas 995 1.087 1.194 1.069 1.066 1.207	708 Dart Ibérica. Envases termoplast. y vidrio	712	249	715	845	952	1.209
1.204 Till				1.194		1.066	
714 Barisintex. Productos farmaquímicos 1.046 930 894 1.045 1.134 1.198 715 Buhler. Maquinaria 322 456 836 901 974 1.196 716 Nutrexpa. Derivados del cacao 322 456 836 901 974 1.196 718 Bentonitas Especiales. Bentonitas y sepiolitas 24 3.390 4.815 4.020 1.193 718 Molts. Calzado de piel 486 698 1.008 987 1.424 1.191 720 Alpinexport. Confección y artículos textil. 289 926 1.782 1.190 721 Industrias Figueras. Asientos deportivos. Butacas 775 775 625 592 929 1.184 722 Cheswick. Accesorios para automoción 775 775 625 592 929 1.184 723 St. Patrick. Vestidos de novia y comunión 555 619 955 1.095 1.397 1.183 724 Cherubino Valsangiacomo. Vinos 746 628 1.001 1.304 1.240 1.181 725 Cop. Agrícola San Bernardo. Frutas 371 307 996 1.263 1.466	712 Berja - Frutas. Productos hortofrutícolas						1.204
1,193	714 Barisintex. Productos farmaquímicos		930	894	1.045	1.134	
718 B pmed. Derivados petrolíferos 486 698 1.008 987 1.424 1.191 719 Molt's. Calzado de piel 486 698 1.008 987 1.424 1.191 720 Alpinexport. Confección y artículos textil. 289 926 1.782 1.190 721 Industrias Figueras. Asientos deportivos. Butacas 775 775 625 592 929 1.184 722 Cheswick. Accesorios para automoción 755 619 955 1.095 1.397 1.183 723 St. Patrick. Vestidos de novia y comunión 555 619 955 1.095 1.397 1.183 724 Cherubino Valsangiacomo. Vinos 746 628 1.001 1.304 1.240 1.183 725 Coop. Agricola San Bernardo. Frutas 371 307 996 1.263 1.466 1.181 726 Agut. Instrumento precisión y medida 542 635 878 819 969 1.181 727 Goya en España. Aceite de oliva 841 797 866 1.058 954 1.181 728 Agrumexport. Cítricos 720 668 617 624 1.		322	456	836	901	974	
1.184 1.22 Cheswick Accesorios para automoción 775 775 625 592 929 1.184 1.22 Cheswick Accesorios para automoción 775 775 625 592 929 1.184 1.23 St. Patrick Vestidos de novia y comunión 555 619 955 1.095 1.397 1.183 1.24 Cherubino Valsangiacomo. Vinos 746 628 1.001 1.304 1.240 1.183 1.25 Coop. Agrícola San Bernardo. Frutas 371 307 996 1.263 1.466 1.181 1.26 Agut. Instrumento precisión y medida 542 635 878 819 969 1.181 1.27 Goya en España. Aceite de oliva 841 797 866 1.058 954 1.181 1.28 Agrumexport. Cítricos 720 668 617 624 1.069 1.181 1.29 Esmena. Estanterías y mobiliario 414 563 1.345 1.803 1.411 1.178 1.30 Alcoholera de la Puebla. Vinos y alcoholes 334 193 1.704 1.175 1.31 C. Augusto Egli. Vinos de mesa 658 1.114 1.027 836 1.105 1.171 1.32 Bruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 1.33 Cetro Aceitunas 274 1.074 1.526 1.408 1.168 1.35 Petrolífera Ducar. Combustibles y lubricantes 235 14.408 2.682 2.314 1.168 1.36 Col·lducci?ns y Der_ivados. Tuos perfiles y chapa 1.811 2.671 2.051 2.233 1.810 1.168 1.36 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 384 498 901 789 818 1.167 1.37 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 1.37 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 1.38 2.39 2.399 1.747 1.271 1.164 1.40 CPC España. Productos alimenticios 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164 1.40 CPC España. Productos alimenticios 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164 1.40 CPC España. Productos alimenticios 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164 1.40 CPC España. Productos alimenticios 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164 1.40 CPC España. Productos alimenticios 1.418	718 Bpmed. Derivados petrolíferos	486		1.008	987	1.424	1.191
722 Cheswick. Accesorios para automoción 775 775 625 592 929 1.184 723 St. Patrick. Vestidos de novia y comunión 555 619 955 1.095 1.397 1.183 724 Cherubino Valsangiacomo. Vinos 746 628 1.001 1.304 1.240 1.183 725 Coop. Agrícola San Bernardo. Frutas 371 307 996 1.263 1.466 1.181 726 Agut. Instrumento precisión y medida 542 635 878 819 969 1.181 726 Ooya en España. Accite de oliva 841 797 866 1.058 954 1.181 729 Esmena. Estanterías y mobiliario 720 668 617 624 1.069 1.181 730 Alcoholera de la Puebla. Vinos y alcoholes 734 193 1.704 1.175 731 C. Augusto Egli. Vinos de mesa 658 1.114 1.027 836 1.105 1.171 732 Bruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 734 Treffler	• •			289	926	1.782	
724 Cherubino Valsangiacomo. Vinos 746 628 1.001 1.304 1.240 1.183 725 Coop. Agrícola San Bernardo. Frutas 371 307 996 1.263 1.466 1.181 726 Agut. Instrumento precisión y medida 542 635 878 819 969 1.181 727 Goya en España. Aceite de oliva 841 797 866 1.058 954 1.181 728 Agrumexport. Cítricos 720 668 617 624 1.069 1.181 729 Esmena. Estanterías y mobiliario 414 563 1.345 1.803 1.411 1.178 730 Alcoholera de la Puebla. Vinos y alcoholes 414 563 1.345 1.803 1.411 1.175 731 C. Augusto Egli. Vinos de mesa 658 1.114 1.027 836 1.105 1.171 732 Deruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 733 Cetro Aceitunas. Aceitunas 274 1.074 1.526 1.408 1.168 735 Petr	722 Cheswick. Accesorios para automoción						1.184
725 Coop. Agrícola San Bernardo. Frutas 371 307 996 1.263 1.466 1.181 726 Agut. Instrumento precisión y medida 542 635 878 819 969 1.181 727 Goya en España. Aceite de oliva 841 797 866 1.058 954 1.181 728 Agrumexport. Cítricos 720 668 617 624 1.069 1.181 729 Esmena. Estanterías y mobiliario 414 563 1.345 1.803 1.411 1.178 730 Alcoholera de la Puebla. Vinos y alcoholes 334 193 1.704 1.178 731 C. Augusto Egli. Vinos de mesa 658 1.114 1.027 836 1.105 1.171 732 Bruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 733 Cetro Aceitunas. 274 1.074 1.526 1.408 1.168 735 Petrolífera Ducar. Combustibles y lubricantes 235 14.408							
727 Goya en España. Aceite de oliva 841 797 866 1.058 954 1.181 728 Agrumexport. Cítricos 720 668 617 624 1.069 1.181 729 Esmena. Estanterías y mobiliario 414 563 1.345 1.803 1.411 1.178 730 Alcoholera de la Puebla. Vinos y alcoholes 334 193 1.704 1.175 731 C. Augusto Egli. Vinos de mesa 658 1.114 1.027 836 1.105 1.171 732 Bruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 733 Cetro Aceitunas. Aceitunas. 1.169 734 Trefllerías Quijano. Alambre y cables 274 1.074 1.526 1.408 1.168 735 Petrolífera Ducar. Combustibles y lubricantes 235 14.408 2.682 2.314 1.168 736 Co!!ducci?ns y Der_ivados. Tuos perfiles y chapa 1.811 2.671 2.051 2.233 1.810 1.168 737 Rolg Ceram1ca. Pavimentos ceram1cos 384 498 901 789 818 1.167 738 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 739 Haluco España. Hortalizas 425 511 371 536 907 1.165 740 Situbsa. Tubos de escape automoción 843 781 893 810 800 1.165 741 CPC España. Productos alimenticios 1.164 742 Ciba Geigy. Medicamentos 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164	725 Coop. Agrícola San Bernardo. Frutas	371	307	996	1.263	1.466	1.181
728 Agrumexport. Cítricos 720 668 617 624 1.069 1.181 729 Esmena. Estanterías y mobiliario 414 563 1.345 1.803 1.411 1.178 730 Alcoholera de la Puebla. Vinos y alcoholes 334 193 1.704 1.175 731 C. Augusto Egli. Vinos de mesa 658 1.114 1.027 836 1.105 1.171 732 Bruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 733 Cetro Aceitunas. Aceitunas 274 1.074 1.526 1.408 1.168 734 Trefllerías Quijano. Alambre y cables 274 1.074 1.526 1.408 1.168 735 Petrolífera Ducar. Combustibles y lubricantes 235 14.408 2.682 2.314 1.168 736 Col·lducci?ns y Der_ivados. Tuos perfiles y chapa 1.811 2.671 2.051 2.233 1.810 1.168 737 Rolg Ceramlca. Pavimentos ceramlcos 384 498							
730 Alcoholera de la Puebla. Vinos y alcoholes 334 193 1.704 1.175 731 C. Augusto Egli. Vinos de mesa 658 1.114 1.027 836 1.105 1.171 732 Bruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 733 Cetro Aceitunas. Aceitunas 1.169 1.174 1.526 1.408 1.169 734 Trefllerías Quijano. Alambre y cables 274 1.074 1.526 1.408 1.168 735 Petrolífera Ducar. Combustibles y lubricantes 235 14.408 2.682 2.314 1.168 736 Co!lducci?ns y Der_ivados. Tuos perfiles y chapa 1.811 2.671 2.051 2.233 1.810 1.168 737 Rolg Ceramlca. Pavimentos ceramlcos 384 498 901 789 818 1.167 738 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 739 Haluco España. Hortalizas 425 511 371 536 907 1.165 740 Situbsa. Tubos de escape automoción 843 781 893 810 800 1.165	728 Agrumexport. Cítricos	720	668	617	624	1.069	1.181
732 Bruno Ripollés. Cítricos 798 679 780 751 987 1.170 733 Cetro Aceitunas. Aceitunas 1.169 734 Trefllerías Quijano. Alambre y cables 274 1.074 1.526 1.408 1.168 735 Petrolífera Ducar. Combustibles y lubricantes 235 14.408 2.682 2.314 1.168 736 Co! Iducci?ns y Der_ivados. Tuos perfiles y chapa 1.811 2.671 2.051 2.233 1.810 1.168 737 Rolg Ceram1ca. Pavimentos ceram1cos 384 498 901 789 818 1.167 738 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 739 Haluco España. Hortalizas 425 511 371 536 907 1.165 740 Situbsa. Tubos de escape automoción 843 781 893 810 800 1.165 741 CPC España. Productos alimenticios 1.418 1.572 2.399 1.747		414	563				
734 Trefllerías Quijano. Alambre y cables 274 1.074 1.526 1.408 1.168 735 Petrolífera Ducar. Combustibles y lubricantes 235 14.408 2.682 2.314 1.168 736 Co!1ducci?ns y Der_ivados. Tuos perfiles y chapa 1.811 2.671 2.051 2.233 1.810 1.168 737 Ro1g Ceram1ca. Pavimentos ceram1cos 384 498 901 789 818 1.167 738 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 739 Haluco España. Hortalizas 425 511 371 536 907 1.165 740 Situbsa. Tubos de escape automoción 843 781 893 810 800 1.165 741 CPC España. Productos alimenticios 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164 742 Ciba Geigy. Medicamentos 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164	732 Bruno Ripollés. Cítricos						1.170
737 Ro1g Ceram1ca. Pavimentos ceram1cos 384 498 901 789 818 1.167 738 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 739 Haluco España. Hortalizas 425 511 371 536 907 1.165 740 Situbsa. Tubos de escape automoción 843 781 893 810 800 1.165 741 CPC España. Productos alimenticios 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164 742 Ciba Geigy. Medicamentos 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164	734 Trefllerías Quijano. Alambre y cables	235	274				1.168
738 Cosmética Selecta. Perfumes y cosméticos 387 715 946 1.766 1.247 1.166 739 Haluco España. Hortalizas 425 511 371 536 907 1.165 740 Situbsa. Tubos de escape automoción 843 781 893 810 800 1.165 741 CPC España. Productos alimenticios 1.164 742 Ciba Geigy. Medicamentos 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164							
740 Situbsa. Tubos de escape automoción 843 781 893 810 800 1.165 741 CPC España. Productos alimenticios 1.164 742 Ciba Geigy. Medicamentos 1.418 1.572 2.399 1.747 1.271 1.164		387	715	946	1.766	1.247	1.166
742 Ciba Geigy. Medicamentos	E LO CILI E Î I						
7.2 Clou Colg). Freetenicites		1 418	1 572	2 399	1 747	1 271	
743 Italgrani Iberia. Preparados de cereales	743 Italgrani İberia. Preparados de cereales	474	194	605	146	939	1.162
745 Aleaciones de Metales Sinter. Equipos para automoción		2.222	3.347	1.688	1.785	987	
746 Industrias Prieto. Conservas vegetales y zumos 2.289 2.094 2.269 2.285 2.004 1.159 747 Española de Placas de Yeso. Paneles y yeso encartonado 1.168 1.306 1.501 1.338 1.503 1.158	747 Española de Placas de Yeso. Paneles y yeso encartonado						1.158
748 Etxe - Tar. Máquinas transfer	749 Hortofrutícola de Cartaya. Hortalizas y frutas	245					1.156
750 Mercados Químicos Industriales. Semifacturados de plástico 345 364 516 732 879 1.156 751 Galler Ibérica. Encajes y puntillas 293 365 588 1.009 1.187 1.156							
752 Gabrielitos. Pescados congelados	752 Gabrielitos. Pescados congelados	108	262	436	867	869	1.155
753 Piezas y Tratamientos. Productos siderúrgicos 392 612 731 945 836 1.154 754 S.A. Tejidos Industriales. Tejidos para decoración 1.132 1.131 1.110 1.222 1.086 1.154		1.132	1.131	1.110	1.222	1.086	1.154
755 Talleres Casals. Ventiladores y herr. portátiles							
756 Ferrer Pharma International. Especialidades farmacéuticas 858 1.031 1.185 882 1.080 1.151 757 Daniel Iborra. Productos hortofrutícolas 1.573 1.394 1.055 1.016 1.168 1.150							
758 Hilaturas Llaudet. Hilados sintéticos 368 474 519 1.983 992 1.148 759 Agrícola Paloma. Hortalizas 517 588 802 807 940 1.148							
759 Agricola Lalonia. Hortanzas							
761 Liwe Española. Confección textil 2 37 787 1.010 1.065 1.146 762 Agraria de Transf. Mazarrón. Lechugas, tomates y pimientos 847 830 1.132 1.061 1.006 1.145		847					
763 Bermarmol, Mármol y sus manufacturas	763 Bermarmol. Mármol y sus manufacturas				833	890	
764 Lucta. Productos químicos 724 793 708 766 1.038 1.141 765 Derivados Fenólicos. Productos químicos 660 883 1.019 872 871 1.141							
766 Stork Screens de España. Cilindro para estampado textil 152 99 180 995 1.110 1.140 767 Ediciones Océano. Libros 520 684 678 864 945 1.140							
768 Castellón. Mandos por cable para automoción	768 Castellón. Mandos por cable para automoción	425	480	766	711	885	1.140
769 Edscha España. Componentes automoción 596 1.011 1.086 1.148 1.290 1.139 770 Bristol Myers. Medicamentos y perfumería 1.570 2.103 2.413 2.703 1.853 1.138							

70

Economist &.lurist

	Economis	Exportación (en millones ptas.)							
No		1007			<u></u>	1000			
orden		1987	1988	1989	1990	1991	1992		
77½ 77¾		1.821 914	864 857 57	899 798 224	1.141 575 696	913 918 1.332	1:134 1:133 1:132 1:131		
774	Bayer Hispania Comercial. Productos fitosanitarios	161	247	368	865	1.332	1.131		
777		570 115	518 231	677 551	851 722	1.058	1.128		
	Industrias Lácteas Asturianas. Productos lácteos Camamobel. Muebles Coop. Agrícola San Isidro. Hortalizas y frutas	815 548 364	1.767 839 523	3.252 1.040 624	2,213 1.063 836	1.011 847 1.060	1.127 1.125 1.122		
781 782 783		1.377 1.936	3.340 2.035	3.153 1.342	2.117 1.280	2.263 1.086	1.122 1.121 1.120		
784	OJiver y Batlle. Maquinaria para química	564 616	459 574	580 552	800 65 4	1.149 935	1.115		
	Gorostidi. Maquinaria para papel	1.130	780	1.414	1.717	1.443	1.110		
788	Monturas. Bombas y válvulas aerosol	766 369	95 7 224	1.170 321	1.101 529	1.155 815	1.110 1.106		
789 790	Industrias Anayak. Fresadoras y otra maquinaria	1.087	1.235	1.616	1.892	1.620	1.106 1.105		
791	Emfisint, Moqueta sintética Textiles Mora. Mantas y textiles hogar	6	148	540	68 2	1.256	1:103 1:103		
793 794	J. y E. Ballester Pesudo. Cítricos Equipamiento Institucional. Mobiliario y equipos electrón	694	856	814	717	1.151	$\frac{1}{1} \cdot \frac{102}{100}$		
795	Matricería Deusto. Troqueles y matrices	903	1.155	1.328	2.386	2,040	1.100		
796 797 798	Quesos Frías. Quesos Aceites Toledo. Aceites de oliva y girasol Peiró Camaró. Cítricos y otras frutas	1.216	1.152	1.103	1.339	1.069	1.099 1.098 1.098		
799 800	Vinicola Rondel Cayady Vinos. Alambre de hierro y acero	671	1.835	2.240	1.487	1.109	1:096		
	Bertie. Calzado de piel	946	600	863	891	932	1.095		
803	Cerámicas del Foix. Pavimentos y revestimientos	666 266	743 1.042	1.063 1.060	1.122 966	1 .030 1 .311	1.094 1.090		
804 805	Julián Chivite Marco. Vinos con d.o. Navarra	612 673	494 671	595 763	837 622	1.096 800	1.088 1.088		
806 807 808	Myrurgia. Perfumería y cosmética	954	1.129	1.286	947	1.018	1.085 1.084 1.084		
809 810	Critesa. Panel copolímero	417 823	433 946	512 1.058	822 1.046	1 .052 995	1.080 1.079		
811	Coop. de Callosa de Ensarria. Cítricos y nísperos	831 194	697 403	833 490	1.050 648	1.246 905	1.078 1.076		
813	Juan Motilla. Cítricos, frutas y hortalizas	619	984	797	792	1.086	1.074		
	Bach. Válvulas no retomables Tepe. Aceitunas en conserva	440 2.445	633 2.165	755 1.883	987 1.737	1.082 1.494	1.073 1.072		
	Loramendi. Maquinaria para acería	253	369	1.400	582	1.093	1.071 1.068		
818 819	Fluviá Industrial. Hilados	804 5	888 6	714 68	875 284	1.002 1.789	1.067 1.066		
820		1.123	997	748	854	936	1.066		
	Kelsey Hayes de España. Accesorios para automoción Valac	16	98	230	580	789	1.065 1.063		
823 824 825	Miguel García Sánchez e Hijos. Frutas	296	389	449	563	846 874	1.062 1.061 1.059		
	Productos Eaton Livia. Válvulas para motores	683	832	646	975	966	1.059 1.053		
829		129 1.149	639	1.092 1.267	1.086 1.058	1.198 1.064	1.051		
830	Levi Strauss de España. Camisas, jerseys y pantalones	835 6.475	488 3.697	272 2,910	416 1.313	1.005 1.406	1.051		
832 833	Rhóne Poulenc Farma. Fármacos para hospitales	192	263	495	692	798	1.049 1.049		
	Industrias Mecánicas Noroeste. Equipamientos industriales Desarrollo Técnico Industrial. Derivados químicos						1.048 1.048		
836 837							1.047 1.043		
	Platt Saco Lowell . Maquinaria textil	586 842	523 893	414 1.664	9 4 7 1 583	1.214 1.975	1.042		
840	Industrias Luma. Antirrobos para motos y bicicletas				=		1.039		

Economist & urist

270	Exportación (en millones ptas.)							
N° orden	1987	1988	1989	1990	1991	1992		
 841 Hilados Egarfil. Hilados y manufacturas textiles 842 Vitrex. Baterías de cocina 843 Agraria de Transf. Domar. Productos de la huerta 844 Industrias de Optica. Artículos de óptica 845 Joaquín Sanz. Cítricos 	67 8 1 .05 1 45 0 86 2	582 1.484 549 1.238	617 1.634 694 1.048	623 1.407 681 1.179	1.144 1.196 891 1.139	1.039 1.039 1.038 1.038		
846 Metalbages. Estampación. Componentes auto	135 806 1 216	172 766 220	263 916 1.061 258	6 24 795 1.281 270	1.139 9 <i>2</i> 7 1.083 847	1.037 1.035 1.033 1.031 1.029		
851 Fabricación Electrodomésticos. Calentadores y frigoríficos	543 590 646 755 4.565	537 601 801 787 1.909	857 580 1.266 886 1.744	795 560 982 9 <i>2</i> 7 4.417	784 869 1.400 912 1.516	1.029 1.029 1.027 1.027 1.026		
856 Panda Expcirt. Hortalizas y frutas	1.061	1.239	1.307	1.460	1.467	1.026 1.026 1.025 1.025 1.025		
861 Tornillería Universal. Tomillería	360 866 584 490	496 960 661 596 25	712 843 552 711 861	933 771 796 714 1.293	970 793 946 889 1.000	1.022 1.021 1.017 1.015 1.015		
866 Stork Inter Ibérica. Maquinaria para frío	931 917	991 1.010	1.156 985	1.315 1.096	2.236 819	1.014 1.011 1.008 1.007 1.007		
871 Luis Jover. Algodón en rama	378	459	487	623	792	1.004 1.004 1.003 1.002 1.001		
876 Extract - Oil. Colorantes naturales alimentación		558	889	949	1.009	1.000		



LA ECONOMA DEL PAIS ESTA ENSUS MANOS.



la última y más completa información sobre empresas, mercados; y los diferentes sectores de la economía en nuestro país. Los datos más rigurosos y contrastados han convertido a Fomento en una publicación imprescindible, con las secciones reconocidas a nivel nacional: «Juzgados y Economía», «Banca y Crédito», «Notas cortas», efe. Un elemento vital de consulta para el profesional dehoy.

del país en sus manos.

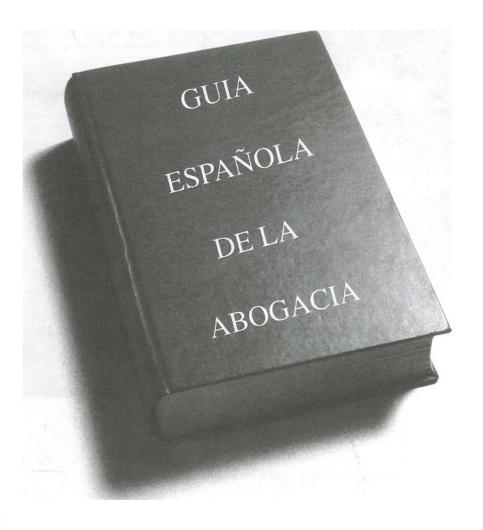
¡Suscribase va!

	fa	nelo sac	she XUI - N.*910 Bonsa, T.*eeera 1986 a00 pesatas	TOTALS			
		«LIDERES 19 DE LA IMPORTACION ESI			nes de la ATTACTION la en 1985	Ent	uccion .
		SPARE ANY		edicioni de la constanti de la	987 pañolas	opeones de la ORTACION añola en 1987	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	calle dese suscribe a la Rev hará efectivas:	vista «FOMENTO DE LA bolso del primer eiem Innominativo.	Casanova, 57		DDUCCION 2530697 • FAX(93)32338	s. 000	*

'\$'E 09{0S'E1(' 'ES'T.9L 'ES L.9L C'll'ES'TIÓ9{

Es el si o el no. El blanco o el negro. El norte o el sur. Y en este caso, para los profesionales del derecho, el existir o el no existir.

"Ser o no ser" es la filosofía que centra una obra como Ja GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA



r. *er*ⁿ significa estar inscrito en la primera obra que se publica en nuestro país com o soporte ún ico de los profesionales del derecho de todo el terri torio nacional, detallados por miembros y socios, áreas de actuación, idiomas de trabajo, etc.

Y estar presente como fuente de consulta en empresas y organismos oficiales, que reciben gratu ita men te la GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA, y que en cualquier momento se dirigirán a Vd. para resolver sus necesidades jurídicas.

deljuego diario de la consultoría jurídica de nuestro país. Es perder oportunidades en el mercado por no figurar en el sitio y momento justos. Es no avanzar ni progresar. Piense como uno de sus posibles clientes. Si necesitan resolver un problema legal... ¿lo más lógico no es que acudan a la GUIA ESPAÑOLA DE LA ABOGACIA?

Es muy simple "Ser o no ser"z. estar inscrito o no en la GUIA ESPANOLA DE LA ABOGACIA es la diferencia entre existitir y no existir.

Por todo ello, a Vd. le interesa aparecer.

-Para más información, diríjase a:

@[fEditora Profesional,

Rosellón, 186 2° - 3ª 08008 Barcelona Tel. (93) 451 34 21 Fax (93) 454 35 37 Julio 1993

